



Universidad  
Nacional  
de Quilmes

Código

**13902**

**Diplomatura en Ciencia y Tecnología**

Materia: Taller de trabajo universitario

Tema: Unidad 2

Docente: Flores - Garcia, .

Autor:

Editorial:

La batalla de las ideas (1943-1973)

En el séptimo volumen de la Biblioteca del Pensamiento Argentino, colección dirigida por Túlio Halperín Donghi, Beatriz Sarlo –una de las voces más influyentes y prestigiosas de la intelectualidad argentina– avala con su saber e interpretación el recorrido de los años que van entre la revolución de junio y el regreso de Perón al gobierno.

*La batalla de las ideas (1943-1973)* está directamente imbricado con el volumen anterior, *Bajo el signo de las masas (1943-1973)* de Carlos Altamirano, en tanto completa el panorama de esos años con los otros actores también políticos, aunque en otro sentido: los artistas, los estudiantes, los historiadores, los sociólogos, los universitarios y la Iglesia, que tuvieron incidencia en la sociedad.

Beatriz Sarlo organiza en tres etapas “esa otra masa, verdaderamente gigantesca de discursos sobre la política y la sociedad, que casi siempre aspiraron a ser escuchados no sólo en la esfera pública sino también a influir el proceso político, como guías, intérpretes o puntos de referencia ideológicos”: la caída del peronismo en 1955; el debate interno a la Iglesia y su politización, y la universidad de la reforma y de la revolución.

Los debates, articulaciones y dilemas respecto de la sociedad que por esos años se fueron cristalizando; las reformas, progresos, ilusiones y avatares que atravesaron el campo intelectual de ese período aparecen registrados cabalmente por el lúcido pensamiento de Beatriz Sarlo.

Biblioteca del Pensamiento  
Argentino VII

Ariel Historia



9 789509 122758

Beatrix Sarlo  
*La batalla de las ideas (1943-1973)*

Biblioteca  
del Pensamiento

Argentino

VII

Ariel

Beatrix  
Sarlo

# La batalla de las ideas (1943-1973)

Biblioteca  
del Pensamiento  
Argentino

VII

Ariel Historia

## ÍNDICE

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <i>Advertencia</i> ..... | 13 |
|--------------------------|----|

### ESTUDIO PRELIMINAR

|   |    |
|---|----|
| <b>I. ¿QUÉ HACER CON LAS MASAS? .....</b>                     | 19 |
| 1. Verdad y ficción en el peronismo .....                     | 19 |
| 2. Asimilar el hecho peronista .....                          | 21 |
| 3. El divorcio entre doctores y pueblo .....                  | 24 |
| 4. Contra las “clases morales” .....                          | 27 |
| 5. Unos males difusos y proteicos .....                       | 29 |
| 6. El contenido y la forma .....                              | 31 |
| 7. Contra el “duro corazón de los cultos” .....               | 33 |
| 8. Las espadas del nacionalismo marxista .....                | 36 |
| Notas .....   | 39 |
| <br>  |    |
| <b>II. CRISTIANOS EN EL SIGLO .....</b>                       | 43 |
| 1. La gran revista católica .....                             | 44 |
| 2. La intervención política en la “democracia de masas” ..... | 48 |
| 3. Cristianismo y marxismo .....                              | 53 |
| 4. ¿Otros caminos? .....                                      | 57 |
| Notas .....   | 59 |
| <br>  |    |
| <b>III. LOS UNIVERSITARIOS .....</b>                          | 63 |
| 1. Varias refundaciones .....                                 | 63 |
| 2. Universidad pública versus universidad privada .....       | 65 |
| 3. Herencia de la reforma y reforma académica .....           | 68 |
| 4. Qué ciencia en la universidad .....                        | 71 |

Diseño de cubierta: Mario Blanco  
Diseño de interior: Alejandro Ulloa

© 2001 Beatriz Sarlo

Derechos exclusivos de edición en castellano  
reservados para todo el mundo:  
© 2001 Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel  
Independencia 1668, 1100 Buenos Aires

ISBN 950-9122-75-0

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723  
Impreso en la Argentina

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

|   |     |
|---|-----|
| 5. Fin de la cuestión universitaria.....                      | 74  |
| Notas .....   | 76  |
| <b>IV. HISTORIADORES, SOCIOLOGOS, INTELECTUALES .....</b>     |     |
| 1. Cuestiones de método .....                                 | 80  |
| 2. Historias culturales de la historia social y cultural..... | 80  |
| 3. Del ensayo a la crítica.....                               | 86  |
| 4. Marxismo, estructuralismo, comunicación.....               | 90  |
| 5. ¿Qué lugar para los intelectuales? .....                   | 94  |
| 6. El compromiso y sus transformaciones .....                 | 99  |
| Notas .....   | 101 |
|   | 106 |

## ANTOLOGÍA

|  |     |
|--|-----|
| <b>I. ¿QUÉ HACER CON LAS MASAS? .....</b>  | 115 |
| 1. <i>Verdad y ficción en el peronismo</i> .....   | 117 |
| VICTORIA OCAMPO: "La hora de la verdad", 117; JORGE LUIS BORGES: "L'illusion comique", 121; Américo Ghioaldi: "La tarea desmitificadora", 123. |     |
| 2. <i>Asimilar el hecho peronista</i> .....  | 128 |
| MARIO AMADEO: "La liquidación del peronismo", 128.   |     |
| 3. <i>El divorcio entre doctores y pueblo</i> .....  | 136 |
| ERNESTO SABATO: "El otro rostro del peronismo. Carta abierta a Mario Amadeo" (fragmento), 136.   |     |
| 4. <i>Contra las "clases morales"</i> .....  | 141 |
| OSIRIS TROIANI: "Examen de conciencia", 141.   |     |
| 5. <i>Unos males difusos y proteicos</i> .....   | 148 |
| EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA: "¿Qué es esto?", 148.   |     |
| 6. <i>El contenido y la forma</i> .....  | 152 |
| GINO GERMANI: "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo" (fragmento), 152.  |     |
| 7. <i>Contra el "duro corazón de los cultos"</i> .....   | 166 |
| ARTURO JAURETCHE: "Carta a Ernesto Sabato", septiembre de 1956, 166.   |     |
| 8. <i>Las espadas del nacionalismo marxista</i> .....  | 171 |
| JORGE ABELARDO RAMOS: "El régimen bonapartista", 171.  |     |

## II. CRISTIANOS EN EL SIGLO.....

|   |     |
|---|-----|
| 1. <i>Doctrina social y diagnóstico</i> ..... | 183 |
|---|-----|

GUSTAVO J. FRANCESCHI: "Derechas e izquierdas", 183; "La cuestión gremial", 188; "Los que llegan", 196.

|   |     |
|---|-----|
| 2. <i>Cristianismo y marxismo, ¿un diálogo posible?</i> ..... | 201 |
|---|-----|

GUSTAVO J. FRANCESCHI: "Los cristianos progresistas", 201; CONRADO EGgers LAN: "Cristianismo y marxismo" (reportaje), 209.

|  |     |
|--|-----|
| 3. <i>La democracia cristiana se renueva</i> ..... | 216 |
|--|-----|

JUNTA EJECUTIVA NACIONAL DE LA JUVENTUD DEMÓCRATA CRISTIANA: "Manifiesto de una generación comprometida", 216; CARLOS A. AUYERO: "Proyecto político y socialización del poder", 218.

|  |     |
|--|-----|
| 4. <i>Radicalización y peronismo</i> ..... | 226 |
|--|-----|

MONSEÑOR DEVOTO: "Carta de Pascua de 1966", 226; MOVIMIENTO DE SACERDOTES PARA EL TERCER MUNDO: "Compromiso de Navidad 1968", 228; MOVIMIENTO DE SACERDOTES PARA EL TERCER MUNDO: "Nuestras coincidencias básicas", 1 y 2 de mayo de 1969, 231; LUCIO GERA: "Revolución, socialismo y violencia", 232; P. CARLOS MUGICA: "Los valores cristianos del peronismo", 237.

|  |     |
|--|-----|
| 5. <i>La palabra de la Iglesia</i> ..... | 251 |
|--|-----|

PASTORAL COLECTIVA DEL EPISCOPADO ARGENTINO: "La promoción y la responsabilidad de los trabajadores" (mayo de 1956), 251; EPISCOPADO ARGENTINO: "La Encíclica 'Populorum Progressio'", 1967, 256; EPISCOPADO ARGENTINO: "Declaración sobre 'Justicia' y 'Paz', Asamblea de San Miguel, abril de 1969, 259; COMISIÓN PERMANENTE DEL EPISCOPADO ARGENTINO: "Declaración sobre la situación dramática que vive el país, Buenos Aires, agosto de 1971", 263.

## III. LOS UNIVERSITARIOS .....

|  |     |
|--|-----|
| 1. <i>El peronismo contra la Reforma</i> ..... | 271 |
|--|-----|

JORDÁN BRUNO GENTA, INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL: "La función de la Universidad Argentina, discurso del 17 de agosto de 1943", 271; GENERAL DE BRIGADA JUAN DOMINGO PERÓN: "Acto de Promulgación de la Ley Universitaria, discurso, 9 de octubre de 1947", 278; FUA: "Ante la nueva ley universitaria (ley 13.031 de 1947)", 286.

|  |     |
|--|-----|
| 2. <i>La refundación de la universidad</i> ..... | 290 |
|--|-----|

DOCTOR ATILIO DELL'ORO MAINI: "Mensaje a los profesores y estudiantes universitarios, difundido por Radio Nacional el 4 noviembre 1955", 290; EL PROBLEMA UNIVERSITARIO ANTE LA JUNTA CONSULTIVA NACIONAL, REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE FEBRERO DE 1956, 297; JOSÉ LUIS ROMERO: "Entrevista", 307; JOSÉ LUIS ROMERO: "Palabras de clausura", 309; RISIERI FRONDIZI: "La Universidad y sus misiones", 314.

|   |     |
|---|-----|
| <b>3. Ciencia e investigación .....</b>   | 323 |
| PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES: "Las investigaciones científicas y técnicas en el 2º Plan Quinquenal, 1953", 323; BERNARDO HOUSSAY: "La investigación científica", 327; JORGE SÁBATO: "Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia", 333; OSCAR VARSAVSKY: "El Club de Roma", 340.                        |     |
| <b>4. Los reformistas .....</b>   | 342 |
| FUBA: "Nosotros somos la universidad", 342; FLORENTINO SANGUINETTI: "La extensión universitaria", 344; COMISIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS: "Los problemas del ingreso a la Universidad", 351; FUBA: "Un bosquejo del congreso", 1959, 356; ANALÍA PAYRÓ: "La reforma", 359; VIII CONGRESO DE FUUA: "11 de abril: nace la FUUA", 362. |     |
| <b>5. Los humanistas .....</b>  | 365 |
| DESPACHO SOBRE PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DEL HUMANISMO, 365; PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS ARGENTINAS: "Declaración Pública aprobada en Santa Fe, octubre de 1968", 372.  |     |
| <b>6. El fin de la cuestión universitaria .....</b>   | 374 |
| RAMÓN ALCALDE: "Una política para la universidad", 374; RODOLFO PUIGGRÓS: "Universidad, peronismo y revolución", 377.   |     |
| <b>IV. HISTORIADORES, SOCIOLOGOS, INTELECTUALES .....</b>   | 383 |
| <b>1. El ensayo .....</b>   | 385 |
| H. A. MURENA: "El pecado original de América", 385; JUAN JOSÉ SEBRELI: "Celeste y colorado", 388.   |     |
| <b>2. Nuevos caminos de investigación histórico-social .....</b>  | 396 |
| IMAGO MUNDI: "Texto de presentación, septiembre de 1953", 396; GINO GERMANI: "Hacia una democracia de masas", 397; TULIO HALPERÍN DONGHI: "La historiografía argentina en la hora de la libertad", 402.   |     |
| <b>3. Una forma nueva de hablar sobre literatura .....</b>  | 408 |
| DIEGÓ SÁNCHEZ CORTÉS (DAVID VIÑAS): "Arlt - Un escolio", 408; DAVID VIÑAS: "Literatura argentina y realidad política" (fragmento), 410; NOÉ JITRIK: "El proceso de nacionalización de la literatura argentina", 411.  |     |
| <b>4. Estructuralismo y marxismo .....</b>  | 423 |
| ELISEO VERÓN: "Muerte y transfiguración del análisis marxista", 423; JUAN JOSÉ SEBRELI: "Polémica con Eliseo Verón", 433; OSCAR MASOTTA: "Anotación para un psicoanálisis de Sebreli", 438.   |     |
| <b>5. Intelectuales y artistas .....</b>  | 443 |
| CUESTIONES DE FILOSOFÍA, 1962: "Presentación", 443; NORBERTO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE: "Los intelectuales argentinos y su sociedad", epílogo, 445; ABELARDO CASTILLO: "El camino ya no tiene salida", 450; CARLOS A. BROCATO: "La subestimación de  |     |

la literatura", 452; NICOLÁS ROSA Y MARÍA TERESA GRAMUGLIO: "Tucumán arde", 457; ROBERTO JACOBY: "Proclama", 459; ANÍBAL FORD: "Cultura dominante y cultura popular", 460; GRUPO PLATAFORMA: "Declaración a los trabajadores de la salud mental", 462; GRUPO DOCUMENTO: "Declaración", 465.

<sup>35</sup> Juventud Demócrata Cristiana, Carta al ministro del Interior, 5 de marzo de 1965.

<sup>36</sup> Véase Abelardo Jorge Soneira, op. cit., p. 59 y ss.

<sup>37</sup> Carlos Mugica, *Peronismo y cristianismo*, Buenos Aires, Merlín, 1973, p. 24. El texto citado pertenece a una conferencia pronunciada en 1971.

<sup>38</sup> Intervención del teólogo Lucio Gera en Sacerdotes para el Tercer Mundo. *Documentos. Reflexión*, Buenos Aires, Publicaciones del Movimiento, 1972, pp. 205-206.

<sup>39</sup> Carlos Mugica, op. cit., p. 47.

<sup>40</sup> Carta al Episcopado del equipo y colaboradores de la revista *Cristianismo y revolución*, noviembre de 1966. Incluida en Habegger, Mayo y Armada, cit., p. 286.

<sup>41</sup> "Declaración del Episcopado Argentino en la presente situación nacional", San Miguel, 21 de octubre de 1972.

<sup>42</sup> "Reflexión del Episcopado Argentino sobre la violencia", Buenos Aires, 24 de mayo de 1974. Un panorama amplio de las relaciones entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas puede consultarse en: Fortunato Mallimaci, "Catolicismo y militarismo en Argentina (1930-1983)", *Revista de Ciencias Sociales*, número 4, Universidad Nacional de Quilmes, agosto 1996.

<sup>43</sup> "Pro-memoria" (Documento entregado por la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina a la honorable Junta Militar), San Miguel, 26 de noviembre de 1977.

<sup>44</sup> "Documento de la Conferencia Episcopal Argentina: Iglesia y comunidad", 8 de mayo de 1981.

### III. LOS UNIVERSITARIOS

#### 1. VARIAS REFUNDACIONES

Por lo menos cinco veces en el curso de treinta años, la universidad argentina fue animada por una idea de refundación. Del primer giro fue responsable el peronismo que promulgó en 1947 una ley universitaria donde no figuraban los principios de la reforma y se creaban los instrumentos para un cambio en el cuerpo de profesores y en el sistema de su nombramiento que liquidaba por completo la hasta entonces muy relativa autonomía de la institución respecto del Poder Ejecutivo.<sup>1</sup> Perón sentía antipatía por la tradición reformista universitaria y no se entendía bien con las capas medias ilustradas donde se reclutaba la masa del estudiantado y buena parte de los profesores. Durante su gobierno, la universidad creció en términos de matrícula, pero este crecimiento cuantitativo no fue acompañando otras políticas institucionales que las encaminadas a asegurar la neutralización de los opositores al régimen o garantizar algunas plazas fuertes de la derecha católica.

La revolución de 1955 interviene las universidades abriendo una nueva época. No se trata de una restauración del pasado preperonista sino de un proyecto novedoso que une las consignas de la reforma sobre el gobierno universitario al impulso modernizador que tendrá su centro en las facultades de Ciencias Exactas y de Humanidades –en especial de la Universidad de Buenos Aires, y en las estructuras, originales en la Argentina, de las recién creadas universidades del Noreste y del Sur–. El ministro de la revolución libertadora, Atilio Dell'Oro Maini, ejemplifica claramente esta conciencia de que las autoridades no llegan para recuperar ningún pasado sino para aprovechar lúcidamente la oportunidad y sentar las bases de una nueva universidad: "No podemos volver a los moldes caducos, afirma, ni conformarnos con restablecer una normalidad aparente de su funcionamiento docente. Jamás se ha presentado ocasión más propicia para afrontar la tarea de echar las bases de una total restauración de la estructura, de las funciones y de los métodos de la universidad". Pero en la refundación del posperonismo aparece un tema conflictivo que, abierto también por el ministro Dell'Oro Maini, estalla en el primer año del gobierno de Frondizi: se trata, en ambos casos, del célebre artículo 28 que permitía la creación de universidades privadas.

El tercer gran cambio en la institución universitaria se produce con el gol-

pe de estado del general Onganía, que interviene todas las universidades nacionales y reprime las reacciones de estudiantes y profesores que, en varias facultades, renuncian masivamente. Vale la pena recordar que el rector de la UBA, desalojado por la intervención, pertenece a las filas del humanismo. La intervención debía desterrar para siempre a la política de los claustros –los fundamentos de la ley 16.912, afirman que es preciso revisar “Las normas que actualmente rigen a la universidad y elaborarlas nuevamente con el propósito de eliminar las causas de acción subversiva”-. Enfrenta una resistencia estudiantil y las consecuencias a largo plazo de la emigración de equipos científicos y grandes personalidades. Dentro del marco represivo, y con la idea de desterrar la acción estudiantil y la participación de representantes electos por su claustro, las nuevas autoridades siguen líneas diferentes según las universidades que dirijan. Hay planteos eminentemente tecnocráticos que unen, a la expulsión de la política, diseños de modernización de la estructura universitaria. Para la Universidad de Buenos Aires se piensan diversas alternativas de descentralización –el tamaño de la universidad ya empezaba a ser considerado como un problema–, de fraccionamiento en unidades más pequeñas y, sobre todo, de desmantelamiento de las facultades para reorganizar la universidad en departamentos no en función de las carreras sino de áreas disciplinarias. (La organización departamental había sido, por otra parte, uno de los proyectos, no concretados en profundidad, de la universidad posterior a 1955.)<sup>2</sup>

A pesar de las medidas francamente represivas impuestas por la intervención de 1966, se produce, pocos años después, una gigantesca politización del estudiantado –en el marco de procesos más amplios que atraviesan a toda la sociedad-. Suceden cambios no previstos en muchas de las universidades públicas a principios de la década del setenta: el movimiento estudiantil logra, en las carreras humanísticas y algunas otras, como arquitectura, imponer profesores progresistas o peronistas antiimperialistas surgidos de los procesos de radicalización. Se fundan, en Filosofía y Letras de la UBA, las llamadas cátedras nacionales –cuyo personal se inscribía en lo que ellos mismos llamaban la “epistemología terciermundista”– y varias facultades ensayan experiencias de trabajo en villas miserias y barrios obreros.

Quienes participan en estos cambios serán en parte los protagonistas y responsables de la cuarta fundación: la de la “universidad nacional y popular” que trajo tan decidida como fugazmente el gobierno del doctor Cámpora en 1973. La intervención que le sigue casi de inmediato, del doctor Ottalagano, impulsa una restauración pre-1955, oscurecida aún más por desapariciones y atentados que preludian el carácter francamente represivo, sin resquicios, que tendrá la universidad después del golpe de estado de 1976 y hasta la transición democrática de 1983.

La institución universitaria atravesó estas cinco transformaciones institucionales en tres décadas. Y no son menores ni menos acelerados los virajes en las ideologías de los actores implicados. Algunos temas parecen importantes por las modificaciones que impulsaron. En su discusión, por lo menos hasta fines de los años

sesenta, participó el movimiento estudiantil, cuya radicalización posterior hizo que los considerara secundarios porque habrían formado parte de una experiencia insular, aislada de los intereses populares que estaban recorriendo otros caminos. El movimiento estudiantil crecientemente radicalizado llamó, con desprecio, “isla democrática” a la universidad. La fórmula quería decir que las verdaderas luchas pasaban en otros escenarios que los estudiantes debían ocupar tanto o más que el espacio institucional en cuyo gobierno participaban, despejando el engaño de que podía existir algo democrático en un país dirigido ya por la burguesía, ya por sus agentes militares, ya por el imperialismo y los suyos.

## 2. UNIVERSIDAD PÚBLICA VERSUS UNIVERSIDAD PRIVADA

“La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente.”<sup>3</sup> Este artículo del decreto-ley universitario de la revolución de 1955 fue el comienzo de una ola de movilizaciones estudiantiles que provocaron la caída de su primer ministro de educación, Atilio Dell’Oro Maini y la renuncia del primer interventor de la Universidad de Buenos Aires, José Luis Romero –el ministro promovía el artículo 28, al que el rector Romero se oponía-. El artículo no fue reglamentado hasta que, bajo la presidencia de Frondizi, en medio de enfrentamientos profundos, se establece el marco legal de las universidades privadas, llamada “libres”.<sup>4</sup> Las presiones de la Iglesia finalmente habían logrado una normativa que, si no manifestó sus consecuencias de modo inmediato, va a tener efectos a mediano y largo plazo.

Interesa ver cuáles eran las ideas que aparecían en el debate encarnizado de los años inmediatamente posteriores a la revolución de 1955. Por un lado, en el frente político que confluyó en la caída del primer peronismo había sectores preocupados por una reconstrucción universitaria que asegurara principios de autonomía respecto del gobierno, independencia en la administración de los recursos y en el nombramiento de los profesores. Los discursos inaugurales de la intervenciones a las universidades pronunciados por el ministro de educación mencionan estos principios, y el decreto-ley universitario los convierte en normas. Todos coinciden en que la universidad ha pasado por un período de decadencia, causada por la ausencia de libertades –entre ellas la de la libertad de cátedra– y por un relegamiento de la investigación.

Sin embargo, entre los sectores que apoyaron el golpe de estado de 1955, también estaban aquellos que, como la Iglesia, solicitarían se contemplara sus intereses en un área decisiva para la formación de dirigentes y para la expansión de una influencia social que, con razón, se consideraba no representada en el cuerpo de las universidades públicas. El artículo 28, que habilita las universidades privadas en condiciones de competir con las públicas, es una respuesta a esas reivindicaciones.

El gobierno de la revolución intenta satisfacer al mismo tiempo a diferentes sectores enfrentados por sus ideas sobre la organización universitaria. Por un lado, se refuerza el sistema público, se garantiza la autonomía –que no estaba en absoluto garantizada en la vetusta ley Avellaneda–, se establece el concurso como forma de selección de los profesores, se privilegia el vínculo entre enseñanza e investigación. Por el otro, se sostienen los reclamos de abrir el campo universitario a las iniciativas privadas que, en ese momento, son básicamente las de la Iglesia.<sup>5</sup> En efecto, en 1956 y en 1958, es la Iglesia la que se interesa en la creación de universidades libres, que representarán una base simbólica y material de su influencia. Treinta años después, el artículo 28 se revelará como el instrumento por el cual ha quedado modificado profundamente el panorama de la enseñanza superior en Argentina. Las sucesivas leyes universitarias –de dictaduras militares y de gobierno civiles– no retrocedieron en el derecho de organización de universidades públicas no estatales.

El ministro Dell’Oro Maini, en su presentación ante la Junta Consultiva Nacional<sup>6</sup> recuerda que en muchos países de occidente el sistema universitario incluye instituciones públicas estatales y no estatales, subrayando que la cuestión de las universidades no estatales no debe circunscribirse al de las universidades “confesionales”, distinguiendo que las funciones científicas y docentes de la universidad no se agotan en el área de las opciones filosóficas y religiosas, y reafirmando la supervisión estatal en el otorgamiento de títulos habilitantes como un deber indelegable. Dell’Oro Maini –más allá de sus compromisos con sectores del clero– plantea un debate que no fue recogido por todos los sectores en todas sus consecuencias.

En efecto, como le responde Américo Ghioldi en esa misma sesión de la Junta Consultiva, “la calle” –que estaba ocupada por las movilizaciones estudiantiles– realizaba una traducción de esos temas en términos de enseñanza confesional o enseñanza laica, y también en términos de derechos universales a la educación que parecían amenazados no porque se cortara la gratuitud de la universidad pública sino porque no se garantizara universalmente esa gratuitad, en la medida en que se crearían universidades pagadas por sus estudiantes. Como puede leerse en documentos de la FUA, la libertad de enseñar y aprender es inescindible de la gratuitud de la educación y la gratuitud de la educación es una función que el estado debe tomar completamente a su cargo. Las universidades “confesionales” no garantizan ambas libertades constitucionales, por motivos económicos –que dividen al estudiantado en ricos y pobres atentando contra la igualdad de oportunidades– y por motivos filosóficos –en la medida en que la ciencia no podría desarrollarse en un marco confesional–.<sup>7</sup> Esta traducción del problema era ideológica y políticamente inevitable.

Como sea, la intervención del 55 en la cuestión universitaria no fue sólo la de refundar, sobre principios de autarquía y autonomía, las universidades nacionales, sino la de poner las condiciones legales del sistema universitario argentino. De esas condiciones, que no se manifestaron espectacularmente de inmediato, surge el sistema mixto que hoy conocemos. Muy pocos años después de la

gran batalla de 1958 contra las universidades privadas, un miembro de la universidad pública, consejero y joven profesor, hacía su balance: “No hay sin duda motivo para lamentar que la Universidad haya emprendido una lucha a través de la cual reiteraba el testimonio de su fidelidad a las convicciones que dan sentido a su existencia misma”.<sup>8</sup>

En efecto, la tradición educativa argentina –completamente gratuita en la enseñanza elemental y muy bajamente arancelada, en los niveles en que existían aranceles– se había caracterizado por vincular, sensatamente según indicaba la experiencia histórica, la enseñanza gratuita con principios de democracia, extensión de derechos e igualdad de oportunidades. Pero también con principios de neutralidad filosófica y, sobre todo, de neutralidad religiosa. Ambos argumentos se unen para oponerse a la existencia de universidades privadas: “...la escuela verdaderamente abierta a todos, afirma Risieri Frondizi, no puede ser sino la escuela del Estado; si no existieran escuelas oficiales, la cultura sería un privilegio de algunos pocos, sea en razón de su fortuna o como consecuencia de pertenecer a una religión determinada. La escuela del Estado es accesible a todos: materialmente, porque es gratuita, y espiritualmente, porque no está orientada por ninguna creencia filosófica o religión particular”.<sup>9</sup> El debate sintetizado en la fórmula “laica o libre”, cuyas divisas eran los colores morado y verde con los que se identificaron decenas de miles de estudiantes no sólo universitarios, permite a todos los sectores del “reformismo” difundir un programa para la universidad pública y darle a ese programa un significado social más extenso que desbordó a quienes se incluían en la comunidad académica. La universidad examina su pasado más reciente, del que quiere separarse de manera tajante y al que juzga como una etapa oscurantista.

En este examen y en los conflictos de los años cincuenta, ordenados según “esa gran divisoria de aguas que fue el laicismo”,<sup>10</sup> lo que Silvia Sigal ha llamado la “identidad reformista” toma nuevos contenidos: por un lado políticos, que se presentan como actualización del espíritu de la reforma pero que en muchos sentidos son completamente nuevos; por otro lado, específicamente académicos, que se expondrán en los debates de los años sesenta sobre el perfil de universidad, su relación con la sociedad, la ciencia y la cultura. Justamente porque éstos son los grandes temas en discusión, la cuestión universitaria tiene un lado académico que permanece ineluctablemente unido a posiciones políticas. Sólo más tarde el debate político capturó casi todos los espacios, y la cuestión universitaria se convirtió lisa y llanamente en cuestión política. Pero hasta entonces, hay mucha experimentación institucional de ideas. Como sea, todavía en 1976, se oyen voces más o menos solitarias que, habiendo formado parte de esa identidad reformista construida quince años antes, siguen pensando la problemática específicamente universitaria.<sup>11</sup> Pero esas voces ya no tienen casi ninguna escucha y el golpe de estado de 1976 termina finalmente con la universidad refundada en 1955 a la cual Onganía creyó que había venido a transformar.

### 3. HERENCIA DE LA REFORMA Y REFORMA ACADÉMICA

“Todo retorno –sea a la Universidad de 1943, sea a la de 1930 o a la de 1923– es inútil y absurdo, y a la larga el esfuerzo que hiciéramos para lograrlo resultaría estéril. Es necesario, pues, hacerse cargo de todo lo que en el país se ha transformado desde 1930 y tenerlo presente para que la Universidad no defraude sus necesidades y sus exigencias. Para un país que ha crecido, que ha modificado su estructura social, que ha removido ciertos valores tradicionales y que ha sufrido, no lo olvidemos, la extraña seducción del fascismo, es necesario hacer una Universidad profundamente renovada y socialmente eficaz. Si uno de sus objetivos fundamentales debe ser alcanzar el más alto nivel científico, otro no menos importante debe ser dotarla de la sensibilidad suficiente como para que sirva al desarrollo social del país formando minorías que no persigan privilegios y que estén animadas por la convicción de sus deberes frente a la sociedad.”<sup>12</sup> Las palabras de José Luis Romero resumen el proyecto de reforma académica que se impuso –y también se acordó, ya que los rectores humanistas lo continuaron– entre 1956 y 1966.<sup>13</sup>

Por supuesto, ese proyecto estuvo dirigido por el gobierno tripartito, de profesores, graduados y alumnos, que por primera vez funcionó con intensidad y extensión. El gobierno tripartito fue una experiencia institucional para el movimiento estudiantil; permitió hacer un balance del modo en que la representación de los graduados respondía u olvidaba su objetivo de vincular la vida universitaria con la profesional; e impuso un sistema de controles de poder y de balances. Durante varios años fue la escena de alineamientos según ideas que no respondían por completo a los partidos políticos nacionales y que cruzaban, en su sistema de alianzas y en las listas de representantes, las líneas de esos partidos. Silvia Sigal señala que sólo a comienzos de los años sesenta la lógica de la política nacional empezó a disputar con la de la política universitaria y que fue el peronismo el primero que estableció una tendencia estudiantil con explícita referencia a la política nacional.

Aunque cada uno de los grupos de la izquierda tenía su expresión universitaria, ella no se definía abiertamente como brazo político de un partido. Y los comunistas –que protagonizaron en competencia con los radicales los primeros años de este período– defendieron un “movimiento reformista” que se expresaba con diferentes nombres y diferentes siglas en cada una de las facultades. Esta “identidad reformista” compitió, desde fines de los cincuenta, con las diferentes líneas del humanismo cristiano que prevalecieron primero en la derecha para pasar luego muy rápidamente a la franja “progresista”: el enfrentamiento humanismo/reformismo, en sus episodios fundamentales, se ubicó del centro a la izquierda del espectro ideológico –y los integrismos y humanismos de derecha, victoriosos en muchas universidades del interior, se corrieron, en el curso de muy pocos años, hacia la zona radicalizada del pensamiento cristiano–. Cuando el humanismo llegó al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, primero con Olivera y luego con Hilario Fernández Long, cambió el personal de la estructura adminis-

trativa de la universidad pero se mantuvieron las grandes líneas políticas que caracterizan a la década que va entre 1956 y 1966.

La “función social” de la universidad es una de esas líneas. Remitiéndose a ella podían proponerse políticas específicas muy diferenciadas pero la fórmula “función social” fue lo que José Luis Romero llamó una “idea básica”,<sup>14</sup> que implicaba, en primer lugar, la relación entre proyecto universitario y proyecto de sociedad, animada por la convicción de que la universidad debía comprometerse con el desarrollo social y cultural de la Argentina en su conjunto y no sólo de los actores concretos de la comunidad académica. Responder a la pregunta qué hacer *con* la universidad y qué hacer *en* la universidad exigía también responder a qué hacer en el país. La “función social” tenía también un significado más restringido: la universidad debía ser un instrumento para la promoción de los sectores menos favorecidos económica y culturalmente a los que había que apoyar con un sistema de becas y otras políticas específicas.<sup>15</sup> El movimiento estudiantil consideraba que ésta era la única forma concreta de materializar la tensión reformista hacia la sociedad. Se crean, además, las secretarías de extensión universitaria, con el propósito de llevar fuera de la universidad las ideas que se producen en ella mediante actividades que no siempre se limitaron a intervenciones científicas o culturales convencionales sino que se expandieron hacia la acción social, como el legendario proyecto de la Isla Maciel propulsado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA –y considerado una cabecera de puente para la izquierda–; las campañas de alfabetización realizadas junto el movimiento estudiantil; las intervenciones de los estudiantes en villas de emergencia o zonas rurales, etcétera.

En el caso de la Universidad de Buenos Aires, la política de extensión social de los bienes y servicios encontró formas ciertamente espectaculares. Sin duda, la más espectacular fue la Editorial Universitaria de Buenos Aires, creada en 1958, dirigida por Boris Spivacow, que publicó, hasta la intervención de 1966, 802 títulos y casi doce millones de ejemplares.<sup>16</sup> Claramente volcada hacia un público que desbordaba la comunidad académica –como lo prueban algunas de sus líneas editoriales más exitosas: la colección del Siglo y Medio de autores argentinos, el *Martín Fierro* ilustrado por Castagnino, y también sus novedosas modalidades de comercialización a través de kioscos en los barrios de Buenos Aires y otras ciudades–, EUDEBA modificó el mercado del libro, produciendo una ampliación de público en cuyo marco se instalaron las empresas editoriales más pequeñas de la década del sesenta y comienzos de los setenta.

La “idea básica” de la función social de la universidad se expresa, para muchos defensores del ideal reformista, como “servicio público”.<sup>17</sup> Pero, a medida en que se avanza en el período, va sufriendo transformaciones: la “función social” comienza a ser frecuentemente explicada como “universidad abierta al pueblo y al servicio del pueblo”. La extensión hacia la comunidad deja de responder únicamente a una lógica que piensa a la universidad en relación con necesidades sociales, para subordinarla a los conflictos y tensiones de la sociedad. No estaba inscripto en el principio de función social de la universidad que esto

sucediera. Pero estaba inscripto en la dinámica de la lucha política, la radicalización de la izquierda y la izquierdización de los cristianos.

La otra gran idea con que se aborda la refundación universitaria de la década del cincuenta y sesenta es la de una modernización de la enseñanza que tiene como pivote la reforma de los planes de estudio, el vínculo de la investigación con la docencia y el modelo de universidad departamentalizada. Estos fueron ejes de una reforma pedagógica, muchos de cuyos puntos merecieron la oposición del movimiento estudiantil para el que departamentalización de los estudios y científico eran dos caras de una misma maniobra destinada a atomizar la universidad. La departamentalización se experimentó más ampliamente en las dos nuevas universidades del Sur y del Noreste y en las plazas fuertes del nuevo reformismo de la Universidad de Buenos Aires: Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, probablemente junto con Arquitectura, las facultades que más cambiaron en la década de 1956 a 1966, por la introducción de perspectivas teóricas, disciplinas y nuevas carreras.

Si el movimiento estudiantil reformista fue hostil a estas innovaciones se debió tanto a que las desaprobaba como iniciativas pedagógicas cuanto a que sostenía que ellas pasaban por alto los “verdaderos problemas”.<sup>18</sup> Entre ellos, por su repercusión pública, el tema del ingreso a la universidad que comienza a plantearse ya en 1956 cuando los estándares puestos para algunas carreras, como Medicina o Ciencias Exactas, son considerados excesivos y limitacionistas. Los humanistas no esbozan posiciones diferentes en este aspecto. De modo que, frente al consenso de los profesores, se alza el consenso de los estudiantes, trazando las líneas de una perspectiva corporativa que, en nombre del pueblo y creyéndolo honestamente así, plantea la defensa de los intereses más inmediatos de una parte de la comunidad universitaria. Las luchas por el ingreso aunque no tuvieron el mismo desenlace, fueron sólo segundas frente a las grandes movilizaciones por el presupuesto universitario que atraviesan el gobierno de Arturo Illia y rodean el escenario militar de su derrocamiento. Pero en ambos casos, el tema del “limitacionismo” figuraba como palabra de orden y establecía las prioridades del movimiento estudiantil. Como sea, la modernización universitaria probablemente no hubiera sido tan inclusiva, dinámica e interesante sin la presencia de ese movimiento estudiantil reformista primero y luego humanista-reformista que traducía en términos cada vez más radicales los principios de la función social de la universidad.

La extensión y ampliación de estas ideas básicas no siempre fueron valoradas positivamente desde fuera de la vida académica. Los católicos que permanecían –a diferencia de los humanistas universitarios– relativamente al margen de las luchas políticas internas, consideraron a la universidad y, especialmente a la de Buenos Aires, desde el ángulo de la teoría de los “factores de poder” y los “grupos de presión” que avanzaban con reclamos privativos de sus intereses y escindidos del interés general.<sup>19</sup> Fuera del ámbito específico se observan los reclamos estudiantiles con una óptica exactamente invertida a la que caracterizaba la mirada del movimiento reformista; hay reservas también respecto de las ideas

de quienes dirigían, como profesores, la universidad. Desde adentro de la institución, la polémica del reformismo con los cambios organizativos y pedagógicos estaba llena de contradicciones y aristas diferenciadoras. Desde afuera, la extensión universitaria, la modernización pedagógica, las inversiones en investigación y docencia, que los estudiantes criticaban por científico o limitacionismo, son vistas como la operación de un grupo de presión que, pese a fisuras ocasionales, aparece compacto y en expansión.

#### 4. QUÉ CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Bernardo Houssay fue quien más tempranamente planteó la relación entre investigación y recursos públicos por una parte, e investigación y docencia, por la otra. Sus intervenciones de la década del cuarenta y cincuenta –completamente ajenas al clima de la universidad bajo el peronismo– adelantan lo que van a ser las bases fundacionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas creado en 1958,<sup>20</sup> que sistematizará la organización de la investigación, trazará líneas de política científica en lo que tiene que ver con los estándares de calidad y con el establecimiento del juicio de pares sobre la producción académica, y asignará recursos. La creación del CONICET significa la implantación de normas de legitimidad interiores al campo científico, lo cual equivale a su consolidación relativamente independiente de los gobiernos –por lo menos, tal es su funcionamiento ideal, aunque los golpes de estado sucesivos operaron en el CONICET sin ningún tipo de límites–.

En diversas intervenciones de la década del cuarenta, Houssay subraya la idea de que “el poder y la riqueza de un país moderno se basan en grado fundamental en la investigación científica [...] la originalidad e inventiva de sus hombres de ciencia y [...] la capacidad y número de las personas dedicadas a tareas científicas”.<sup>21</sup> Para Houssay la conexión entre desarrollo material y progreso científico era una tesis de verdad autoevidente que desalojaba de la organización científica las cuestiones “políticas” o “ideológicas”. En sus planteos generales, Houssay fue el primer “científico”, tal como se denominarían, años después, las posiciones que cortaban los nexos entre políticas científicas y política reivindicando la autonomía de la investigación. Su preocupación en este aspecto era desvincular a la investigación de la intrusión de los gobiernos que, de todos modos, debían financiarla.<sup>22</sup> También estaba convencido de que la investigación científica debía articularse con la docencia universitaria y esa fue la práctica que ya había establecido en su cátedra de la Facultad de Medicina de la UBA, antes de ser expulsado durante el primer gobierno de Perón.

Las ideas de Houssay expuestas en las décadas anteriores a la fundación del CONICET, eran extrañas al clima de la universidad y la enseñanza pública durante el primer gobierno peronista. Perón, desde el Primer Plan Quinquenal, había explicitado su apoyo a la educación técnica y, en 1948, había fundado la Universidad Obrera Nacional. Pero estas iniciativas no estaban encaminadas al

desarrollo de la investigación aplicada a la tecnología –como podría haber sido el caso– sino a la formación de expertos para la supervisión de procesos de producción, técnicos que modernizaran la fábrica y permitieran un aumento de la productividad –según los objetivos explicitados oficialmente–. La investigación aplicada y la ciencia pura no figuraban dentro de los objetivos primordiales de la ley universitaria ni de las políticas para la universidad, espacios en los que tenía a privilegiarse el disciplinamiento moral, en un sentido nacional y justicialista, que debían acatar todos los niveles de la enseñanza.<sup>23</sup>

En consecuencia, es en la universidad posterior a 1955 donde se discuten las políticas para la investigación científica y las posibilidades materiales e institucionales de implementarlas. Nos encontramos ante la paradoja de que en el curso de unos pocos años se definen criterios, se adjudican recursos y se forma una administración de la ciencia con investigadores a tiempo completo,<sup>24</sup> y, *al mismo tiempo*, comienza el proceso de impugnación de los criterios con que se está construyendo ese espacio: cuestionamiento de las políticas de investigación básica, cuestionamiento de los recursos que provienen del extranjero, cuestionamiento de las relaciones entre la universidad y el país sobre la base de una discusión del gran concepto político de la época, el desarrollo,<sup>25</sup> al que el movimiento estudiantil agrega poco más tarde el de penetración imperialista.

Risieri Frondizi, en un discurso rectoral a fines de la década de 1950, señalaba: “La Universidad debe ser instrumento de transformación de la realidad social, económica e intelectual, un encabezamiento ideológico para lograr la emancipación del país, lo mismo en el orden económico que en el cultural”.<sup>26</sup> La afirmación de Risieri Frondizi saca la cuestión de los términos en que la había planteado Houssay durante la década peronista: la necesidad de realizar investigación científica básica, lograr que se financien investigadores-docentes con dedicación de tiempo completo, y combinar la docencia con la investigación en el marco de las cátedras y los institutos. La de Houssay era una propuesta de política científica que luego merecería el adjetivo de “cientificista”, en la medida en que confiaba en la dinámica de la investigación básica como impulso y dirección del perfil de ciencia para la Argentina, independiente de los avatares que atravesara la sociedad. José Luis Romero, en una tradición progresista, establecía, en cambio, un vínculo “básico” entre la producción de conocimientos y su función social.

Estos temas tuvieron, de parte del movimiento estudiantil crecientemente radicalizado tanto en sus alas reformistas como humanistas, una respuesta cuya fórmula se creía sencilla: una ciencia al servicio del pueblo en una universidad al servicio del pueblo. En verdad, esta fórmula, en lugar de abrirlo, cerraba el debate: ¿qué era “ciencia al servicio del pueblo” sino las formas más inmediatas de servicio a sus necesidades? ¿qué era “universidad al servicio del pueblo” sino una institución que debía reconocer que la tan reclamada autonomía respecto del gobierno debía entregar sus banderas a la dirección obrera y popular que, en cambio, mostraba poco interés por hacerse cargo de esa tarea?

Los años de la década del sesenta asisten a la impugnación de una ciencia que responda a lógicas internas de su propio campo. La investigación básica y la

promoción de investigadores full-time no garantizarían un desarrollo científico que propiciara el desarrollo nacional de un país subordinado económica y culturalmente. Muy tempranamente, la idea de que la Argentina debe encontrar su propio rumbo en la investigación y de que existen temas que son más adecuados para construir una ciencia al servicio del pueblo, ocupa un lugar en el discurso universitario y en el del movimiento estudiantil. Incluso los proyectos impulsados por profesores de cuño irreprochablemente reformista –como los de Ciencias Exactas, presidida por Rolando García, o los de algunas cátedras de la Facultad de Medicina– son examinados desde esta óptica para comprobar si la investigación básica que se propicia en la universidad se acerca a las necesidades nacionales y, sobre todo, a los requerimientos del pueblo en materia de tecnología y de ciencias aplicadas. El movimiento estudiantil agita la consigna de que en lugar del mal de Chagas se investiga –con dinero norteamericano– la caída de la retina padecida por pilotos que vuelan a más de 20.000 metros de altura, subordinando de manera absurda nuestras necesidades a las de Fuerzas Armadas que, como la norteamericana, tenían aviones que hicieran posible ese peligro.

Pero no sólo el movimiento estudiantil adopta este juicio sobre la ciencia que se hace en la universidad. La consigna es recogida por intelectuales radicalizados del ala marxista y católico-humanista. Ciertamente estas ideas no aparecían sólo en las manifestaciones de académicos o estudiantes argentinos. Precisamente uno de ellos sostiene sus denuncias del cientificismo proimperialista en conclusiones extraídas de fuentes norteamericanas de izquierda. La cita, introducida por Conrado Eggers Lan, merece transcribirse porque, independientemente de su enunciador, expresa el clima de esos años: “La Ford y la Rockefeller no pueden contar solamente con sus propios recursos internos con el fin de ejecutar las miles de tareas necesarias para lubricar la maquinaria del Imperio. Ciertamente, trabajan mano a mano con la Central Intelligence Agency (CIA) cuando realizan operaciones de gran importancia en un área delicada. Su red mundial (la Ford tiene seis oficinas en América latina), de apariencia filantrópica o vinculada con la investigación y basada en la clase superior, hace de ellas compañeras naturales de la CIA”.<sup>27</sup>

En las ciencias sociales, existe la idea generalizada entre los militantes de que los resultados de los proyectos realizados con subsidios extranjeros podían ser utilizados –o seguramente eran utilizados– por los organismos de espionaje norteamericanos que influirían sobre las fundaciones otorgantes de los presupuestos de investigación. El debate sobre el proyecto de investigar la marginalidad en las provincias del nordeste fue un ejemplo de esta politización irrefrenable del campo científico; se lo vinculó con las denuncias sobre penetración imperialista en la academia realizadas por Gregorio Selser y desembocó en un escándalo que tocó a la CGT de los Argentinos en 1967, cuando los resultados de esa investigación, obtenidos con financiación norteamericana, fueron denunciados tanto en la CGT como en la Universidad abriendo las puertas de un verdadero juicio público en el que incluso se acusó a destacados militantes y profesionales de la izquierda.

Silvia Sigal cita el caso del matemático Oscar Varsavsky, quien busca una salida, casi imposible, a este dilema: el subsidio extranjero podría ser aceptable en la medida en que se lo usara como arma para combatir una situación de inferioridad frente a un enemigo,<sup>28</sup> que en realidad estaba en el mismo lugar de donde provenía el subsidio. El debate científico se había politizado completamente y todos los caminos, que no pasaran por el rechazo de cualquier forma de cooperación extranjera, se iban cerrando por lo menos en el espacio de la universidad pública.

Podían esbozarse otras alternativas, pero ellas no encontraron en la Universidad su escenario. Desde 1957, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) había empezado a recorrer un camino de relativa autonomía tecnológica. Ese año, por la actividad y la influencia de Jorge Sábato, se da comienzo a la construcción del primer reactor experimental de América latina.<sup>29</sup> Sábato, ideólogo de un desarrollo tecnológico de punta, extiende su actividad desde ese momento y marca profundamente las opciones, caracterizadas por un ideal de independencia tecnológica que la CNEA asume y promueve.

Allí trabajan los más brillantes científicos producidos en la universidad nacional. Con un impulso fuertemente desarrollista e industrialista, Sábato es tanto el teórico como el organizador material de la política nuclear argentina y de las relaciones entre la investigación aplicada y las empresas locales. Sostiene la necesidad de comunicar productivamente lo que él denomina “infraestructura científico-tecnológica” con los diferentes sectores de la economía –públicos y privados– que, en ausencia de una política tecnológica independiente estarían limitados a utilizar tecnología y patentes compradas en el extranjero. La interacción entre la infraestructura tecnológica y los sectores de punta de la economía produciría un desarrollo adecuado a las necesidades y características nacionales y permitiría una mayor inversión en investigación. Naturalmente, el estado tiene una participación esencial en esta red científico-productiva.<sup>30</sup> Sin embargo, las tesis de Sábato –que tuvieron éxito si entra en el balance la construcción de los reactores atómicos durante la década del sesenta: en verdad, la de Sábato es una de las pocas *success-story* de estos años–, no podían ser escuchadas en la Universidad con la atención, y la eficacia de resultados, que obtuvieron en el aparato científico-tecnológico del estado donde el impulso desarrollista subsistía como ideología de sectores modernizantes o, simplemente, de sectores nacionalistas-independientes, tanto civiles como militares.

En la Universidad, en cambio, las cosas se veían con otras luces y sombras que provocaron el aplanamiento de los problemas específicos.

##### 5. FIN DE LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA

La impugnación de la política científica y de la idea de un desarrollo científico relativamente autónomo de los avatares de una Nación dependiente continúan aun después de que la intervención de Onganía a las universidades nacio-

nales, la masiva renuncia de científicos en Ciencias Exactas, Sociología y Psicología, el éxodo de equipos completos al exterior, pusiera a la cuestión bajo luces más impiadosas para cualquier investigación del carácter que fuera. Durante la revolución argentina, las cuestiones de organización de la ciencia en la universidad o fueron pasadas por alto por los sectores reaccionarios y tradicionalistas que se afincaron en muchas facultades de todo el país, o fueron tomadas en consideración desde perspectivas estrechamente tecnocráticas. Después del golpe de 1976, la cuestión ni siquiera tuvo oportunidad de formularse por los actores cuya respuesta interesaba.

Pero, entre la gestión modernizante posterior a 1955 y las reorganizaciones de la universidad propiciadas por la revolución argentina, se debatió la “idea básica” de la función social de la universidad, que obtuvo respuestas diferentes sobre cómo esa universidad se convertiría en una expresión más adecuada a las necesidades del país, de la Nación o del pueblo. En esos diez años, progresivamente irá consolidándose la tendencia a pensar que “no hay reforma universitaria sin reforma social”. La frase, que pertenece a un documento fundacional del humanismo,<sup>31</sup> tiene una función polémica contra el movimiento reformista que, desde la perspectiva del humanismo radicalizado, estaría incurriendo en el error de pensar a la universidad y sus problemas como “isla” dentro de la realidad argentina. El movimiento estudiantil, desde la segunda mitad de los años sesenta, recogerá ese desafío, afirmando, en los hechos y en sus declaraciones, el carácter *no específico* de la cuestión universitaria, lo que equivale a declarar su inexistencia como problema en una Nación donde los verdaderos problemas son los del atraso, la penetración imperialista, las oligarquías asociadas con el capital extranjero, los sectores medios indecisos en su alianza con las clases trabajadoras.

Cuando, en 1968, la FUA conmemoró los cincuenta años de la reforma universitaria, se enfatizó la lectura hiperpolítica del legado reformista, planteando la necesidad de un frente antioligárquico y antiimperialista, la unidad de obreros y estudiantes en la lucha contra la dictadura que, un año después, se desplegaría en el Cordobazo, tal como la izquierda y el movimiento estudiantil leyó y narró los sucesos de mayo de 1969. En esos mismos años, incluso la agrupación reformista dirigida por la UCR, Franja Morada, se inclina por un tono igualmente radicalizado adhiriéndose a un ideario de cambio de estructuras económicas en vistas del agotamiento y la crisis de los principios del capitalismo, donde los hombres son tratados como cosas y el trabajo es considerado una mercancía.<sup>32</sup> En esta adopción, por parte del brazo estudiantil de la UCR, de la jerga marxista podría verse un punto alto de la convergencia discursiva en el camino de la radicalización política: convergían quienes todavía, sin embargo, disputaban por la dirección del movimiento universitario y, aunque las diferencias sectoriales parecían muy fuertes, esta tendencia a la uniformización del discurso prevalece incluso en las alas ligadas a partidos no marxistas de fuerte tradición vernácula como es el caso del radicalismo. Cincuenta años después, el espíritu juvenilista y antimaterialista de la Reforma se ha trasmutado en un temple anticapitalista.

Las dictaduras militares provocan tomas de posiciones cada vez más políti-

cas en términos generales y cada vez menos específicas en lo que se refiere a la universidad. No puede sorprender que, en el marco de la radicalización política de comienzos de los setenta y de la incorporación de capas medias al horizonte del peronismo revolucionario, se coincidiera en la pérdida de especificidad de la cuestión universitaria. Todos los partidos de la nueva izquierda aportan a este diagnóstico, como puede leerse en un documento titulado "Estrategia en la universidad" –preparado por Ramón Alcalde– donde parojojalmente se concluye en que no hay, para la universidad, ni un programa ni una estrategia específica.<sup>33</sup>

En 1973, el cambio radicalizado llega, por breves meses, al rectorado de casi todas las universidades nacionales. Rodolfo Puiggrós, rector de la UBA, en diálogo con Enrique Martínez, interventor en la Facultad de Ingeniería, dan por sentada la necesidad de que tanto los estudiantes como los profesores deben cambiar su mentalidad y que la universidad debe guiar a sus docentes hacia "nuestros objetivos de emancipación nacional y conquista de una sociedad más justa" para lo cual se elaborarán nuevos programas de estudio que reflejen "la doctrina nacional e impidan la infiltración del liberalismo, del positivismo, del historicismo, del utilitarismo, y yo diría hasta del desarrollismo, todas formas con las que se disfraza la penetración ideológica".<sup>34</sup> Puiggrós habla, en 1973, como rector de una universidad a la que se le ha cambiado su nombre por el de Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires.

Allí, como en casi todas las universidades públicas del país, durante unos meses brevísimos que terminan a fines de 1973 o mediados de 1974, se realizan experimentos pedagógicos y políticos de todas especie: funcionamiento asambleístico y plebiscitario para la toma de decisiones académicas, fundación de cátedras dedicadas a la problemática latinoamericana y terceromundista, experimentación con metodologías "liberacionistas" más adecuadas a los sectores populares que a las capas medias universitarias, suspensión de las formas tradicionales de la evaluación. La lista es larga e incluye todo lo que un momento radicalizado podía transferir de sus temas ideológicos al ámbito específico de la Universidad que, por eso mismo, estaba distanciándose de su propia lógica institucional.

Pero, muy pronto, esta épica tocará a su fin, con la restauración peronista *prima maniera* capitaneada por un ministro peronista que responde también al primer estilo del movimiento, Ivanessevich. La comunidad universitaria no volverá a discutir sus objetivos ni sus medios hasta el fin, en 1983, de la siguiente (e incomparablemente terrible) dictadura militar.

#### NOTAS

<sup>1</sup> Sobre las leyes universitarias del primer gobierno peronista, véase: Carlos Mangone y Jorge A. Warley, *Universidad y peronismo (1946-1955)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Argentina, número 83, 1984.

<sup>2</sup> Véanse los discursos, conferencias y proyectos de Raúl Devoto, rector de la UBA en

1968 y 1969, recopilados en *Sobre una nueva universidad*, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, s/f.

<sup>3</sup> Poder Ejecutivo Nacional, art. 28 del Decreto-Ley 6.403, 23 de diciembre de 1955.

<sup>4</sup> En setiembre de 1958, un parlamento rodeado por manifestaciones gigantescas, deroga el art. 28 del decreto-ley de 1955 y establece por la ley 14.557 que "La iniciativa privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será otorgada por el Estado nacional. Los exámenes que habilitan para el ejercicio de las distintas profesiones serán públicos y estarán a cargo de los organismos que designe el Estado nacional. Dichas universidades no podrán recibir recursos estatales y deberán someter sus estatutos, programas y planes de estudio a la aprobación previa de la autoridad administrativa, la que reglamentará las demás condiciones de su funcionamiento. El Poder Ejecutivo no otorgará autorización o la retirará si la hubiese concedido, a las universidades privadas cuya orientación y planes de estudio no aseguren una capacitación técnica, científica y cultural en los graduados, por lo menos equivalente a la que imparten las universidades estatales y/o que no propicien la formación democrática de los estudiantes dentro de los principios que informan la Constitución Nacional".

<sup>5</sup> Una recopilación de los documentos oficiales de la revolución del 55 sobre la cuestión universitaria se encuentra en: Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Educación y Justicia, *La revolución libertadora y la universidad, 1955-1957*, Buenos Aires, 1957.

<sup>6</sup> Junta Consultiva Nacional, 8<sup>a</sup> Reunión Extraordinaria, 29 de febrero de 1956.

<sup>7</sup> Véase el reportaje a O. Patti, presidente de la FUA que acompaña el anteproyecto de ley universitaria, Suplemento número 4 de la *Revista del Mar Dulce*, septiembre de 1958.

<sup>8</sup> Túlio Halperín Donghi, *Historia de la Universidad de Buenos Aires*, EUDEBA, Buenos Aires, 1962, p. 205.

<sup>9</sup> Risieri Frondizi, "La enseñanza libre y la libertad de la cultura" (discurso pronunciado como rector de la UBA, en la Facultad de Ingeniería el 9 de septiembre de 1958).

<sup>10</sup> La frase y algunas ideas presentadas acá siguen la precisa exposición de Silvia Sigal, *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Puntosur, 1991, p. 70.

<sup>11</sup> Véase, por ejemplo, dos intervenciones de 1976, de José Luis Romero, recopiladas en *La experiencia argentina y otros ensayos*, Buenos Aires, Universidad de Belgrano, 1980.

<sup>12</sup> José Luis Romero, "Defensa de la Universidad", publicado originalmente en *La Nación*, 12 de febrero de 1956, republicado en J. L. R., cit., p. 358.

<sup>13</sup> Sobre este período en la Universidad de Buenos Aires, véase: "La Universidad de Buenos Aires, 1955-1966: lecturas de un recuerdo", en AAVV, *Cultura y política en los años 60*, Buenos Aires, Inst. de Investigaciones Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales, Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires, 1997.

<sup>14</sup> Entrevista de la *Revista del Mar Dulce*, número 2, incluida en esta antología.

<sup>15</sup> El centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) propone, en 1956, un "sistema automático de becas o de pre-salarios para los hijos de los obreros" (*Boletín del CEFYL*).

<sup>16</sup> Véase: Víctor Pesce "José Boris Spivacow: aproximación a su trayectoria", en Delia Maunás, *Boris Spivacow; memoria de un sueño argentino*, Buenos Aires, Colihue, 1995 (que incluye un excelente reportaje de Maunás a Spivacow); Jorge B. Rivera, "Apogeo y crisis de la industria del libro: 1955-1970", en *Capítulo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, tomo 4, 1981.

<sup>17</sup> Véase: Florentino Sanguinetti, "La extensión universitaria", en esta antología.

<sup>18</sup> Véase el relato y la interpretación que hace un actor principal del movimiento estudiantil, el dirigente reformista y miembro del Partido Comunista Bernardo Kleiner en *Veinte años de movimiento estudiantil reformista, 1943-1963*, Buenos Aires, Platina, 1964, pp. 179-184.

<sup>19</sup> La revista *Criterio* se refiere a la "hipertrofia" de la universidad que se manifiesta "en

primer lugar por el crecimiento constante, excepto en algunas escuelas, del número de alumnos, a expensas de la calidad de la enseñanza. Esta verdadera inundación no es convenientemente regulada desde la Universidad; por el contrario se encara el problema con argumentos demagógicos y cada Facultad debe defender sin mayor apoyo las pruebas de ingreso [...] Otro aspecto de la cuestión es el aumento –inescante, pero siempre insuficiente– del presupuesto universitario, lo que permite un despliegue no despreciable de poder a través de becas, cargos rentados, y publicaciones, algunas científicas y otras que lo son bastante menos” (“La universidad como grupo de presión”, *Criterio*, año XXXIII, número 1359, julio de 1960).

<sup>20</sup> El CONICET fue creado el 5 de febrero de 1958, por decreto número 1291, del poder ejecutivo a cargo del general P. E. Aramburu. Su primer directorio fue intergado por Houssay (que fue elegido presidente), Fidel Alsina Fuentes, Eduardo Braun Menéndez, Humberto Ciancaglini, Eduardo De Robertis, Venancio Deulofeu, Rolando García, Félix González Bonorino, Luis F. Leloir, Lorenzo Parodi, Ignacio Pirosky, Alberto Sagastume Berra y Alberto Zanetta. Sus atribuciones e incumbencias consistían en el apoyo a la investigación por el otorgamiento de subsidios, becas para la formación en el país y en el extranjero, la carrera del investigador científico con dedicación exclusiva. Véase Informes del CONICET, Buenos Aires, y *Bernardo Houssay; su vida y su obra; 1887-1971* (editores: Virgilio Foglia y Venancio Deulofeu), Buenos Aires, 1981, pp. 119-120.

<sup>21</sup> Bernardo Houssay, “La investigación científica” (conferencia de 1947), *Cursos y Conferencias*, Revista del Colegio Libre de Estudios Superiores, a. XVI, vol. XXXI, n. 181-182-183.

<sup>22</sup> “La libertad académica y la investigación científica en la América latina” (ponencia de 1954), en *Bernardo A. Houssay; su vida y su obra; 1887-1971*, cit.

<sup>23</sup> Véase: Mariano Plotkin, *Mañana es San Perón*, Buenos Aires, Ariel, p. 152 y sig. El discurso nacionalista de la educación peronista convoca a centenares de ejemplos. Véase también: Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, “La educación en el Segundo Plan Quinquenal”, 1952, pp. 12-14: “Terminará en las escuelas la importación de teorías y prácticas extranjeras. Podrán y deberán, sin embargo, introducirse los necesarios conceptos básicos, de la misma manera que la industria nacional importa materia prima, pero sobre esos conceptos se deberá elaborar una didáctica argentina, de una escuela argentina, para un pueblo argentino”. En este mismo documento, cuya afirmación transcrita vale para todo el sistema educativo, se fija como objetivo para la universidad elevar el número de alumnos a 200.000.

<sup>24</sup> Véase Silvia Sigal, “La universidad reformista”, en *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, cit., donde se recogen los Informes del CONICET que marcan la existencia de 297 investigadores de carrera en 1966.

<sup>25</sup> Véase por ejemplo: Analía Payró, “La reforma”, *Correo de CEFYL*, año I, número 2, octubre de 1962.

<sup>26</sup> Risieri Frondizi fue rector de la UBA entre 1958 y 1962. La cita es tomada de: J. O. Inglese, C. L. Yegrós Doria y L. Berdichevsky, *Universidad y estudiantes; Universidad y peronismo*, Buenos Aires, Libera, 1965, p. 66.

<sup>27</sup> NACLA (North American Congress on Latin America), *Ciencia y neocolonialismo*, Buenos Aires, Periferia, 1971 (citado en Conrado Eggers Lan, *Peronismo y liberación nacional*, Buenos Aires, Búsqueda, 1973).

<sup>28</sup> Silvia Sigal, cit., p. 95.

<sup>29</sup> Datos completos de la biografía de Jorge Sábato y de su incidencia en el desarrollo tecnológico aplicado pueden consultarse en: Carlos A. Martínez Vidal, “Esbozo biográfico y bibliografía de Jorge Alberto Sábato (1924-1983)”, Buenos Aires, ADEST, 1993 (mimeo).

<sup>30</sup> Véase: Jorge Sábato, *Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia*, Tucumán, Universidad de Tucumán, 1971, p. 49; A. O. Herrera, Víctor Urquidi, J. Leite Lopes, J. A. Sábato, Natalio Botana, Jacobo Schatán, M. Sadosky, Luis Ratinoff, Darcy Ribeiro, Marcos Kaplan,

*América Latina; ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1970.

<sup>31</sup> “Base y principios del humanismo”, en Luisa Brignardello, *El movimiento estudiantil; corrientes ideológicas y opiniones de sus dirigentes*, Buenos Aires, 1972, p. 182.

<sup>32</sup> “Manifiesto político de la Liga Nacional Reformista Franja Morada”, ibid. Incluido en esta antología.

<sup>33</sup> Ramón Alcalde (con comentarios de L. Rozitchner, Ernesto Popper, Haydée Gurass, Ricardo Scaricabarrozzi e Ismael Viñas), *Estrategia en la universidad*, Buenos Aires, Movimiento de Liberación Nacional, 1964.

<sup>34</sup> “Universidad, peronismo y revolución”, *Ciencia Nueva*, número 25, 1973 (incluido en esta antología).

HISTORIA MÍNIMA DE Argentina

¿Sabe...

- ... desde cuándo existe Argentina?
- ... quiénes fueron sus primeros pobladores?
- ... por qué Buenos Aires se fundó dos veces?
- ... cuál es el origen del conflicto entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país?
- ... a qué se llamó la conquista del desierto?
- ... qué hizo posible que Argentina fuera considerada 'el granero del mundo'?
- ... por qué el país recibió tantos inmigrantes?
- ... cómo explicar el peronismo?
- ... cuántos golpes militares se produjeron durante el siglo XX?
- ... qué es el kirchnerismo?

HISTORIA MÍNIMA DE Argentina

C  
M

T  
TURNER

EL COLEGIO  
DE MÉXICO



9 788415 832256

HISTORIA MÍNIMA DE

# Argentina



Una breve síntesis de los hechos, los personajes y los episodios que han definido la Argentina desde la prehistoria hasta hoy.

esta historia, bajo el primer peronismo: de un lado, un gobierno que lograba una enorme concentración de poder y dejaba fuera del juego a los medios de comunicación independientes y a una oposición desarticulada y con muy escasa gravitación sobre los grupos de interés y las instituciones del Estado; del otro, una economía basada en el aliciente al consumo que permitía satisfacer las necesidades de amplios sectores hasta poco tiempo antes excluidos del disfrute de sus más elementales derechos sociales, corrigiendo en alguna medida la desigualdad instaurada en décadas anteriores, pese a sus evidentes inconsistencias, que se reflejaban en una persistente inflación, en el resurgimiento del déficit público y en problemas serios de pérdida de competitividad y fuga de capitales.

La principal diferencia entre ambos momentos era que, aunque persistía la tentación hegemónica del peronismo, estaban ahora ausentes tanto una movilización polarizada de la sociedad como una amenaza desestabilizadora de origen militar o sectorial contra la legitimidad democrática. Y si bien confusamente, el pluralismo interno que protagonizaban facciones y líderes en competencia en el peronismo, mucho más abierto e institucionalizado que en los años cincuenta o setenta, proveía la energía suficiente para que las instituciones de la república sobrevivieran, incluso a los vicios de quienes eran sus casi monopólicos representantes y por tanto los encargados de hacerlas funcionar.

## INTELECTUALES Y DEBATE CÍVICO EN EL SIGLO XX

*Carlos Altamirano*

### EL FIN DE LA BELLE ÉPOQUE

Hasta la primera guerra mundial, la vida argentina parecía seguir su curso: una marcha ascendente que se remontaba al último tercio del siglo anterior y que a ritmo vertiginoso dejaba atrás la modesta y despoblada nación criolla que había surgido de la independencia. Oleadas de inmigrantes europeos habían multiplicado en pocas décadas el número de habitantes del país y estaban cambiando su fisonomía: la nación se “blanqueaba”, como lo mostraban los censos de población. Los ferrocarriles atravesaban el territorio nacional y las mercancías que simbolizaban la riqueza argentina —la carne y los cereales— salían de los puertos hacia Europa. La certidumbre general era que el país se hallaba en la ruta del progreso y la civilización. Conducía la república una clase dirigente que hundía sus raíces en la historia nacional anterior a la inmigración y que estaba segura de representar no solo la excelencia social, sino también el *savoir-faire* político, la distinción y la garantía del gobierno inteligente. Buenos Aires, con sus tiendas y sus edificios modernos, era la capital de esta versión rioplatense de la *belle époque*.

El lenguaje ideológico dominante en las élites políticas e intelectuales era el del liberalismo —un liberalismo para el cual la civilización había ingresado en la edad de la razón científica y las sociedades civilizadas (entiéndase: Europa y Estados Unidos) en

la época de las multitudes—. Los círculos ilustrados de la clase dirigente, que aprobaban la marcha del progreso, rumian con preocupación sobre algunas de sus consecuencias y querían pensar el mundo con los resguardos de un saber positivo. En una época en que las masas y los conflictos sociales, como lo mostraban las sociedades civilizadas, tenían cada vez mayor gravedad, ¿no debían estar al alcance de gobernantes y dirigentes los recursos de la ciencia social? Desde 1905 se enseñaba sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y pronto las universidades de Córdoba y de La Plata seguirían el ejemplo. Varios libros publicados en la primera década del siglo y concebidos para hacer el diagnóstico de los males del país, sea del presente o del pasado, como *Nuestra América. Ensayo de psicología social* (1903), de Carlos O. Bunge, *La anarquía y el caudillismo en la Argentina* (1904), de Lucas Ayarragaray, o *Rosas y su tiempo* (1907), de José María Ramos Mejía, están animados por el espíritu del científico.

Por cierto, el aval de la ciencia no era reivindicado únicamente por los liberales. También lo hacían los teóricos y dirigentes del socialismo —el ejemplo más obvio es el de Juan B. Justo y su *Teoría y práctica de la historia* (1909)— y publicistas filosocialistas como José Ingenieros, cuya *Sociología argentina* conocerá muchas ediciones. Por su parte, no procedían de otra forma los grupos anarquistas, rivales del socialismo en el movimiento obrero: la literatura de doctrina que se difundía en los medios libertarios reclamaba igualmente para sus postulados la autoridad del conocimiento científico. En otras palabras, las fronteras de la cultura científica no se confundían con las que separaban las ideologías y los alineamientos políticos.

A medida que se avanzaba en el proceso de transformación demográfica, económica y social en que se hallaba embarcado el país, los indicios de diferenciación entre esfera política y esfera cultural se hacían cada vez más perceptibles. Más aún, el universo mismo de las élites intelectuales se volverá crecientemente

diferenciado. En las primeras dos décadas del siglo, en efecto, se asiste a una progresiva especialización de las prácticas culturales, proceso que proseguirá en las décadas siguientes y reforzará las identificaciones vocacionales —ser escritor, filósofo, historiador...—, aunque los medios de vida de quienes ejercían tales ocupaciones intelectuales provinieran de cargos en el Estado, la enseñanza, el periodismo o del ingreso de profesiones liberales como la abogacía y la medicina.

Una preocupación mayor de estas élites intelectuales era la asimilación de la caudalosa inmigración extranjera y su fusión en un tipo nacional o, como se decía también, en una “raza argentina”. Objeto de enfoques y argumentos diferentes, la cuestión fue un tópico del discurso público a lo largo de las primeras dos décadas del siglo xx. Se lo puede encontrar en diversos autores, desde José María Ramos Mejía hasta Ricardo Rojas, de Ernesto Quesada a José Ingenieros, de Rodolfo Rivarola a Manuel Gálvez. Entre 1898 y 1916, las tesis de doctorado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que estaban dedicadas a algún aspecto relativo a la inmigración superaron en número a las consagradas a otros temas. El punto de vista de los intelectuales argentinos solo era coincidente en juzgar negativamente la gravitación psicológica y moral de los componentes no blancos de la Argentina “criolla” (recuérdese que no solo ocupar el desierto, sino alejarse del indio y del negro, asentando en el territorio nacional una población apta para el trabajo y la vida cívica, había sido uno de los objetivos de la política inmigratoria). Para Rodolfo Rivarola o José Ingenieros, la “raza argentina” era un hecho del futuro que tenía su clave en la inmigración; para otros, como Ramos Mejía, el tipo nacional en ciernes tenía su “plasma germinativo” en el núcleo hispánico transmitido a lo largo de la historia.

La acepción cultural antes que biológica de la nueva “raza” era predominante en aquellos para quienes la amenaza que encerraba el presente radicaba en la falta de consistencia de una sociedad que se formaba aluvionalmente, sin lazos con la tradi-

ción. El compendio de ese conglomerado cosmopolita era Buenos Aires, permeable a todas las lenguas y a todas las costumbres. También a todas las ideologías, entre ellas el anarquismo y el socialismo, cuya agitación se señalaba como contraria a la unidad del cuerpo nacional. Para el escritor Manuel Gálvez, el mérito de su generación consistía en haber cobrado conciencia de que el porvenir de la patria no podía ser puramente material, que el progreso debía cobrar alma nacional y, a sus ojos, el fundamento de esa espiritualización se hallaba en Castilla, matriz del pueblo argentino (*El solar de la raza*, 1913). También para Ricardo Rojas la nacionalización cultural era la tarea de la hora. Él había comenzado esa labor ideológica con *La restauración nacionalista*, de 1909, y la coronaría con su *Historia de la literatura argentina*, cuyos volúmenes se publicaron entre 1917 y 1922. Aunque desde puntos de vista divergentes, tanto Rojas como Ingenieros buscaron rescatar lo que juzgaban valioso del acervo intelectual argentino a través de dos colecciones: *La Biblioteca Argentina*, que dirigía el primero, y *La Cultura Argentina*, organizada por el segundo.

No estaba disociada del tema de la nacionalización de los inmigrantes la otra preocupación, la “cuestión social”, que desde los años noventa del siglo XIX estaba en la agenda de los problemas. ¿Qué hizo cristalizar la percepción de que el país había ingresado en la era de los antagonismos propios de las sociedades capitalistas? No un hecho, seguramente, sino varios y de diferente naturaleza, de la crisis económica y política de 1890 a la aflojamiento del discurso y la acción anarquistas, el surgimiento de la prensa socialista y la creación del partido de ese nombre (1896), la encíclica *Rerum Novarum*, la actividad social de la iglesia católica y la lucha de los trabajadores. El sector de los “liberales reformistas”, como los llamó el historiador Eduardo Zimmermann, entre los que sobresalían Joaquín V. González y José Nicolás Matienzo, se empeñaría en que la respuesta del Estado a la agitación obrera no fuera únicamente represiva —como las leyes de Resi-

dencia y de Defensa Social—, sino que fuera también preventiva, que adaptara a las condiciones del país la legislación social que se había desarrollado en las naciones más avanzadas.

#### LA CIUDAD LIBERAL TRASTORNADA

La primera guerra mundial conmovió a la opinión pública argentina y, como en otras partes del mundo, puso en crisis certidumbres arraigadas. El triunfo del radicalismo en las elecciones de 1916, que desplazará del gobierno a la oligarquía liberal, se agregó al estremecimiento de la guerra para consumar el cambio de clima político y cultural en el país.

La contienda bélica mostraba a las naciones europeas, vistas hasta entonces como los territorios de la civilización política, del progreso científico y técnico, de las artes y la literatura —es decir, los territorios del espíritu por excelencia—, entregadas a la aniquilación mutua, a matanzas en escala sin precedentes. Tal como se podía leer apenas comenzada la guerra en el consternado editorial de *Nosotros*, la revista literaria que dirigían Roberto Giusti y Alfredo Bianchi: “Se exterminan los hombres sobre todos los mares y en todas las tierras; millones de soldados solo están en pie para matar y para morir, llueve fuego y acero, se hunden los acorazados enormes, arden las ciudades, son arrasados los campos; por doquier está la matanza, el incendio, la rapina, la violación; única ley es destruir y asesinar; el hombre ha dado paso al gorila lúbrico y feroz...”.

¿Cómo saldría la civilización de esa terrible prueba? El término barbarie cobró rápida circulación para juzgar y condenar tanto los comportamientos que la guerra había hecho surgir en los campos de batalla, como la estrategia de los jefes militares y la visión de los líderes políticos (“El suicidio de los bárbaros” fue el título que José Ingenieros dio a un artículo sobre la guerra apenas desencadenada), aunque se trataba de una barbarie que

no había brotado fuera de la civilización, sino de su propio seno. Rápidamente también se hizo general el diagnóstico de que esa vasta contienda significaba el final trágico de un ciclo histórico e inauguraba otro, de signos inciertos. Tras el sobresalto y la tribulación del comienzo, la opinión ilustrada se dividió y comenzó a tomar partido, sea a favor de una de las dos coaliciones beligerantes, sea a favor de la neutralidad de Argentina frente a la guerra que estaba destrozando Europa. Los diarios de mayor predicamento, como *La Nación* y *La Prensa*, asumieron posición a favor de los aliados y en el mismo sentido se alineó gran parte de los intelectuales. Más reducido era el sector de los germanófilos, que contaban con las páginas del diario *La Unión* y en cuyas filas sobresalían los nombres del político y publicista Estanislao Zevallos y del historiador Ernesto Quesada. Entre las pocas voces neutraлистas del mundo intelectual, se hallaba la de Manuel Ugarte.

Ningún otro escritor argentino disfrutaba por entonces de más prestigio que Leopoldo Lugones, quien puso su pluma al servicio de la causa aliada. Muy lejos ya del fervor socialista de juventud, el gran poeta había hecho suyo un liberalismo de sesgo aristocratizante, desdeñoso tanto de la opinión plebeya como de los políticos profesionales. A sus ojos la guerra en curso constituía una catástrofe para la humanidad, pero no abrigaba ni admitía dudas respecto del papel relativo de las coaliciones contendientes: esa calamidad la había desencadenado el imperio alemán, expresión de un militarismo que había hecho trizas tratados y normas de la política internacional. Del lado “teutón”, que había iniciado la agresión, se hallaba la barbarie; la parte de la justicia y la civilización, en cambio, estaba representada por los “aliados”. De estas naciones (Lugones pensaba obviamente en Inglaterra y sobre todo en Francia) procedían las tradiciones espirituales y políticas de Argentina, tradiciones de libertad que el autoritarismo germano amenazaba. En suma: la neutralidad argentina era insostenible, más todavía después de que dos buques argentinos fueran hundidos por las fuerzas alemanas. La postura del presi-

dente Hipólito Yrigoyen, que se negaba a romper la política de neutralidad e intervenir en la contienda, era para Lugones una prueba de pusilanimidad y de que el gobernante no estaba a la altura de su investidura (*Mi beligerancia*, 1917).

Si en las filas de la *inteligentsia* habían predominado las dudas y el escepticismo sobre la conveniencia de la reforma electoral introducida por Roque Sáenz Peña, el hecho de que la primera prueba del voto honrado llevara a Hipólito Yrigoyen a la primera magistratura no haría más que confirmarles esa previsión respecto de la madurez cívica del pueblo. “¿Garantiza el sufragio universal, honestamente practicado, el triunfo de los mejores?”, se preguntaba Alberto Gerchunoff en su ensayo *El nuevo régimen* (1918), y respondía: “La presencia de los radicales en el gobierno demuestra cabalmente lo contrario. Siempre ocurre y ocurrirá así”. Aun antes de llegar a la presidencia la figura de Hipólito Yrigoyen intrigaba. ¿Quién era ese jefe político adorado por las masas, pero que evitaba las apariciones públicas, no profería alocuciones y que cuando ocasionalmente escribía lo hacía en un lenguaje sibilino y extravagante que se prestaba fácilmente a la burla de los adversarios? “Vale la pena acercarse a esta figura para fijarse en sus rasgos. Es por primera vez que se suscita tal fenómeno en la existencia política nacional. Los correligionarios lo deifican hasta el punto de parecerles blasfemia cuando uno se atreve a preguntarles en la intimidad si es realmente un hombre preparado para la posición que ocupa”, comenta Gerchunoff. Para Alfonso de Laferrere, esa figura deificada era la de “un anormal que parece juzgarse elegido por Dios para la felicidad de la República” (*Literatura y política*, 1928).

Entre los miembros de la élite política e intelectual tradicional se volvieron moneda corriente dos ideas-imágenes: la de que el gobierno radical implicaba una ruptura con la gran tradición argentina —la tradición de los gobiernos ilustrados— y la convicción de que los viejos males de Argentina habían retornado con Yrigoyen, que representaba la reaparición del caudillismo.

Toda la tipología sociopsicológica forjada desde fines del siglo XIX para caracterizar a la gente peligrosa de extramuros o a las personas faltas de distinción (“orilleros”, “comadritos”, “guarangos”), además de estigmatizaciones más viejas, como “chusma” o “mullataje”, fue empleada para transmitir la certeza de que un mundo social y culturalmente bajo había ocupado las funciones públicas de la mano de un jefe mesiánico y demagógico. La comparación con Rosas y su régimen autoritario se volvió un tópico.

El fin de la gran guerra dejó ver en el campo de las ideas la formación de un nuevo paisaje. Si bien la reacción idealista contra el científicismo positivista había surgido mucho antes de la guerra en el pensamiento europeo, en Argentina ese humor antipositivista solo entró de lleno con el estallido de la tormenta y la reflexión que siguió, ya en la posguerra, sobre las causas y las consecuencias de la crisis de la civilización que la contienda había desnudado. Los nombres que ahora contaban eran los de Benedetto Croce, Henri Bergson, José Ortega y Gasset. El filósofo español había visitado el país en 1916 y sus conferencias constituyeron un suceso intelectual. No habló solo para sus colegas, en dissertaciones académicas, sino también para el gran público en varias ciudades del país. Ortega transmitió el mensaje de que un nuevo espíritu filosófico estaba en curso y que la idea de una filosofía fundada en la ciencia pertenecía al siglo XIX. Alejandro Korn, que desempeñaría un papel sobresaliente en la etapa pospositivista de la filosofía universitaria en Argentina, recordaría varios años después la gravitación que tuvo la visita de Ortega y Gasset en esa renovación: “La presencia de Ortega y Gasset en el año 1916 fue para nuestra cultura filosófica un acontecimiento. Autodidactos y *dilettantes* tuvimos ocasión de escuchar la palabra de un maestro; algunos despertaron de su letargo dogmático y muchos advirtieron por primera vez la existencia de una filosofía menos pedestre”.

Los jóvenes universitarios formaron la audiencia más receptiva a las incitaciones intelectuales de Ortega y nociones proce-

dentes de su visión del presente —como “nueva sensibilidad” y “nueva generación”— se incorporaron como consignas de identidad al lenguaje ideológico juvenil.

No fue únicamente este fermento idealista y antipositivista lo que hizo variar el clima ideológico en el país. Como en el resto de Hispanoamérica, la opinión de que un nuevo mundo político y social estaba surgiendo sobre las ruinas de la guerra se extendió por las filas de los intelectuales a partir de 1918. ¿Cuáles eran los signos de ese porvenir en gestación? Los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson para asegurar la paz mundial y la Revolución rusa, vistos en un comienzo como partes de una misma constelación moral. El ejemplo de José Ingenieros da ilustración a la curva que conoce el progresismo en el campo de la *intelligentsia*. En efecto, en las conferencias y artículos que reunió en su libro *Los tiempos nuevos* (1921) puede verse el itinerario que siguió su autor en relación con los grandes sucesos de la política internacional, de la condena de la guerra al wilsonismo y de este al apoyo a la revolución social que encabezaban los bolcheviques en Rusia. El movimiento que derrocó al zarismo había sido saludado por la mayor parte de la opinión ilustrada, pero cuando la revolución pasó a manos de Lenin y su partido, resueltos a apresurar la marcha e implantar el socialismo —el programa “máximo”— esa opinión se dividió entre los que aprobaron el nuevo curso y los que lo condenaban. De todos modos, el aura de la Revolución soviética se mantuvo durante mucho tiempo aun entre quienes no apoyaban todas las medidas de la dirección bolchevique —es decir, se mantendría la idea de que en Rusia, incluso con errores, se estaba experimentando la gestación de una nueva humanidad, libre de los males que había acarreado la guerra—. Por cierto, el eco de la Revolución rusa engendró también, como en todo el mundo, defensores y propagandistas más entusiastas e incondicionales, los militantes socialistas disidentes que se agruparían en el Partido Socialista Internacional, base del futuro Partido Comunista (1920), afiliado a la III Internacional.

EL MOVIMIENTO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA  
Y LOS AVATARES DEL PROGRESISMO

Varios de los elementos ideológicos señalados aparecerán en el discurso de la Reforma Universitaria, un movimiento que tendrá su base en las clases medias, en constante crecimiento desde comienzo de siglo y cuyos hijos comenzaban a acceder a la enseñanza superior. Aunque había antecedentes de protestas y movilizaciones estudiantiles para exigir cambios de índole educativa o administrativa, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, el movimiento universitario como actor de la vida pública nace de la revuelta estudiantil en la Universidad de Córdoba, en 1918. En su origen, el episodio que a fines de 1917 va a desencadenar la activación del estudiantado de esa casa de estudios puede compararse con tantos otros de queja ante ordenanzas de las autoridades universitarias. Pero a los ojos de las autoridades de la conservadora Universidad de Córdoba, de su cuerpo de profesores y de la élite católica que gravitaba en su vida intelectual, la protesta estudiantil en demanda de reformas importaba un desafío inadmisible. La resolución del Consejo Superior de la Universidad de no tomar en consideración ninguna solicitud de los estudiantes desató la reacción de estos, que fueron a la huelga. Un Comité pro Reforma comenzaría a elaborar las demandas de los jóvenes. A partir de la huelga el conflicto se agudizó, los estudiantes le dieron alcance nacional al solicitar la intervención del gobierno de Yrigoyen, los alumnos de otras universidades públicas se solidarizaron con los cordobeses y crearon en abril de 1918 la Federación Universitaria Argentina. Para entonces ya se había generalizado entre los jóvenes la convicción de que no luchaban contra determinadas disposiciones administrativas, sino contra un régimen universitario. La causa de los estudiantes recibirá el apoyo de personalidades públicas, como Alfredo Palacios, José Ingenieros, Juan B. Justo, Alejandro Korn, entre otras.

El primer manifiesto del movimiento reformista de Córdoba —21 de junio de 1918— bosquejó la identidad inicial de la causa estudiantil. Redactado por el joven intelectual cordobés Deodoro Roca, el documento estaba dirigido “A los hombres libres de Sud América” e inscribía la revuelta estudiantil en el marco de una serie de antinomias que se evidenciaban en la vida universitaria —la de la libertad contra la tiranía, del espíritu de rebeldía frente a la mediocridad y la ignorancia, de lo nuevo contra lo anacrónico, del estudiante contra el poder despótico de los profesores insolventes, de la verdad científica contra el dogma—. El manifiesto exigía un gobierno democrático para la universidad, concebida como república, y proclamaba que la soberanía en la república universitaria “radica principalmente en los estudiantes”. El eco del *Ariel*, de José E. Rodó, y de los textos juveniles de Ingenieros podía reconocerse en pasajes del documento: “La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus maestros”. Era la autoridad de maestros que fueran “verdaderos constructores de almas, creadores de verdad, de belleza y de bien”, lo que los jóvenes esperaban y necesitaban.

El programa de renovación del sistema de enseñanza superior que hará suyo el conjunto del movimiento estudiantil, constituido ya a escala nacional, reivindicaba la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades, la renovación de las cátedras por medio de concursos periódicos, la implantación de la docencia libre. Desde el comienzo el reformismo albergó visiones diferentes respecto de la significación del movimiento y muy pronto se afirmará la interpretación de que el sentido de la revuelta de 1918 no se agotaba en los cambios relativos al gobierno y la enseñanza universitarios. Más aun: que el combate por la reforma de la universidad era solidario con el combate por la reforma social. Este enfoque, que era el de la izquierda del reformismo universitario y que terminará por ser predominante, fue

desarrollado por intelectuales de la joven promoción como el citado Deodoro Roca, Julio V. González y Carlos Sánchez Viamonte (estos últimos se afiliarán más tarde al Partido Socialista). Ellos insertaban el significado del movimiento en el cuadro de la crisis general provocada por la guerra, el final del régimen oligárquico que representaba el triunfo del radicalismo y las esperanzas de redención social antiburguesa que sobrevinieron al fin de la contienda y que la Revolución rusa alimentaba. La Reforma Universitaria daba expresión a una “nueva generación”, como dirían con lenguaje orteguiano, generación investida de la misión de traer y llevar adelante el mensaje redentor que correspondía a los tiempos nuevos. A los ojos de los jóvenes ideólogos, la cuestión universitaria se insertaba en la cuestión social. Aunque el gobierno de Yrigoyen había obrado como un aliado en los comienzos del reformismo universitario, el radicalismo “personalista”, como se llamaba al de Yrigoyen, no tendrá las simpatías de los pensadores de la “nueva generación” reformista. Puede considerarse representativo, en este sentido, *El último caudillo* (1930), de Carlos Sánchez Viamonte, cuyo retrato del jefe radical y del movimiento redentorista que tenía en él a su hombre providencial será elogiado por Deodoro Roca y Aníbal Ponce. Yrigoyen, según la tesis de Sánchez Viamonte, era el caudillo de un medio social y político que cobró fisonomía propia en las últimas décadas del siglo XIX: el suburbio cosmopolita, zona de mezcla étnica de criollos y recién llegados, poco diferenciada en términos de clase. La “causa” radical formaba parte del mismo ciclo histórico del “régimen” al que combatía y el final político de Yrigoyen que se avecinaba iba a marcar el ingreso del país en la era de su adultez.

El antiimperialismo se introdujo tempranamente en el ideario del reformismo universitario y, conectada con el antiimperialismo, la afirmación de los lazos que integraban Argentina en la comunidad de los pueblos latinoamericanos. Hasta fines de la segunda década del siglo XX, antiimperialismo y latinoamericanismo habían sido tema de la prédica casi solitaria del escritor

socialista Manuel Ugarte, que tenía poco eco en la *inteligentsia* argentina.

A mediados de los años veinte la matrícula de estudiantes seguía en ascenso y el reformismo contaba con varios focos activos —en las universidades de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, del Litoral—. El relato reformista había cristalizado en sus rasgos fundamentales y su difusión no hallaba eco únicamente en el medio estudiantil, sino en una parte del cuerpo de profesores, que se había renovado precisamente por obra del movimiento de la Reforma. De acuerdo con ese relato, la revuelta de la juventud universitaria de Córdoba se inscribía en una saga histórica nacional cuyas líneas maestras había fijado Ingenieros en el prefacio a *La evolución de las ideas argentinas*. Para este la clave del proceso ideológico argentino se resumía en la lucha entre dos partidos, “el uno propicio al Absolutismo, al Privilegio y al Error, amigo el otro de la Libertad, la Justicia y la Verdad” (1918). La universidad no podía hallarse al margen de este combate. Más aun, debía ser baluarte, si no vanguardia, de las causas progresistas, fueran sociales o políticas. En la década siguiente, convertido ya en uno de los cauces del progresismo argentino, el movimiento de la Reforma Universitaria ampliará su agenda de temas y de acción, incorporando en ella la lucha contra el fascismo internacional y sus expresiones locales. No solo los socialistas y los comunistas, sino también gran parte de los radicales daban apoyo a esta idea militante de la universidad. Cuando en 1945 los estudiantes enfrenten a Juan Domingo Perón, el coronel nacionalista que reclutaba adherentes entre los obreros, lo harán en nombre de esta tradición intelectual.

#### FORMACIONES ANTILIBERALES

Yrigoyen concluyó su primer mandato presidencial en 1922. La mezcla de irritación y alarma que su administración había pro-

vocado en las élites del “viejo régimen” hizo crecer en ellas la opinión de que la reforma electoral había sido prematura, cuando no simplemente un error, aunque de inspiración generosa. Se culpaba al gobierno de Yrigoyen de personalista y autocrático, de haber asaltado la administración pública para repartir puestos entre sus adeptos, de gestión improvisada, sin programa, de abusar de la intervención federal para colocar bajo su órbita el poder en las provincias, de desprecio a los otros poderes de la república, el del Congreso, en primer lugar. Más aún: a juicio de varios de sus críticos, el paternalismo obrerista del jefe radical había sido cómplice de la agitación social extremista que tras el fin de la gran guerra había hecho su ingreso en el país.

En las filas de la alta *intelligentsia* el cuestionamiento a la tiranía del número y el electoralismo ya no se detuvo. Será Lugones quien radicalice la crítica de la “paparrucha democrática”, como la llamará en una de las conferencias que dictó en el Teatro Coliseo (*Acción*, 1923). Afirmó en esas conferencias la necesidad de que los patriotas se agruparan ante la doble amenaza que se cernía sobre el país: la amenaza exterior, representada por la política de “paz armada” en que se hallaban embarcados Brasil y Chile, y la interior, que provenía de “una masa extranjera disconforme y hostil”, incitada a la discordia de la lucha de clases por agentes confesos o encubiertos del “maximalismo ruso”, lo cual obligaba alistarse y luchar por imponer la “disciplina nacional”. Al año siguiente, el mensaje de Lugones fue más rotundo. En Hispanoamérica había sonado “la hora de la espada”, proclamó en el discurso de celebración de la batalla de Ayacucho: con la espada se había conquistado la independencia y con ella se lograría restablecer el orden y la jerarquía arruinados por la democracia, que llevaba a la demagogia o al socialismo. Comenzó así a cobrar forma la elaboración lugoniana de la doctrina del ejército como “clase salvadora”, de la revolución nacional que imponían las circunstancias y del gobierno fuerte, a su juicio el más representativo de la tradición hispanoamericana. *La grande*

*Argentina*, el libro donde expondrá en 1930 el programa de la revolución que anhelaba, será una de las obras rectoras del pensamiento nacionalista argentino.

En torno de la crítica al sufragio universal y a la democracia irá tomando cuerpo una derecha antiliberal. Su primer órgano de expresión fue *La Nueva República*, que comenzó a publicarse a fines de 1927. Base del futuro nacionalismo, esta nueva derecha, pequeña numéricamente pero activa, militante, hallaba alimento espiritual en la furiosa polémica antidemocrática de la Action Française —Charles Maurras era un maestro de pensamiento para la naciente familia de los nacionalistas argentinos— y alimento político en los sucesos y en los personajes públicos de la vida nacional. Integraban la redacción de *La Nueva República* escritores jóvenes, como los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta y Ernesto Palacio, ligado a la vanguardia literaria de la revista *Martín Fierro*. El propósito de la publicación era combatir la politiquería y el estado de desorientación espiritual en que se hallaba sumido el país, según destacaba el periódico en la presentación de su programa. Aunque algunos de los temas ideológicos de *La Nueva República* coincidían con los de la predica de Lugones, este no comulgaba con el maurrasianismo y era férreamente crítico del catolicismo. Los jóvenes neorrepUBLICANOS, en cambio, se proponían luchar por devolver a la iglesia y la religión católicas su papel de sustento de la unidad nacional y defender a la familia de los ataques de que era objeto por obra del anticlericalismo. Para estos, como se podía leer en el artículo “Organicemos la contrarrevolución”, de Ernesto Palacio, también publicado en el primer número, el combate contra el “dogma” de la soberanía del pueblo, error funesto que procedía del siglo XIX, era inseparable de la lucha contra la negación de la jerarquía sobrenatural de la iglesia de Cristo y de la jerarquía natural del Estado.

Juan Carullas, uno de los redactores de *La Nueva República*, consigna en sus memorias que si bien el periódico nunca alcanzó gran tirada, era leído en los círculos cultos, en el medio cató-

lico y en el ejército (*Al filo del medio siglo*, 1951). Dentro de este selecto cuerpo de lectores se hallaba el próximo jefe del golpe de Estado que derrocó a Yrigoyen, el general José F. Uriburu, quien acompañó a los jóvenes en la cena en que celebraron el primer aniversario del periódico.

Otro foco de la prédica contra el mal democrático y el liberalismo apareció en 1928, la revista *Criterio*. La creación de esta revista fue iniciativa de un grupo de intelectuales católicos y tuvo el patrocinio de las autoridades eclesiásticas, que veían con beneplácito la idea de que los católicos contaran con un órgano propio en el terreno de la cultura. Desde el comienzo hubo contactos y entendimientos entre el grupo de *La Nueva República* y el que dirigía el semanario católico (personalidades católicas escribieron en la hoja política y redactores de esta lo hicieron en el segundo). Las dos publicaciones, en resumen, fueron órganos clave de una nueva cultura de derecha en Argentina. Tenían los mismos enemigos —el comunismo, el socialismo, la modernidad liberal— y compartían la misma convicción de que la unidad de la nación no podía tener otro cimiento espiritual que la fe católica.

*Criterio* no puede disociarse del pensamiento y las preocupaciones de los Cursos de Cultura Católica, un centro de altos estudios creado en 1922 y destinado a la formación doctrinaria de los católicos con vocación intelectual. Los Cursos habían nacido para corregir la situación de desventaja en que se hallaban los católicos en el debate de ideas, situación en que estos veían un fruto de la larga hegemonía liberal, a la que se debía la disociación entre saber y fe religiosa. Las universidades eran vistas como bastiones de la cultura adversaria, laica y positivista, y los Cursos fueron pensados para contrarrestar las consecuencias de ese hecho. Muchos miembros de la élite del nacionalismo católico que cobraron reputación en los años treinta y cuarenta pasaron por la enseñanza de los Cursos: de Mario Amadeo a Marcelo Sánchez Sorondo, además de Julio Meinvielle, Leonardo Castellani, Nimio de Anquín, Ignacio Anzoátegui y Máximo Etchecopar.

Los maurrasianos argentinos vieron en el general Uriburu al jefe de la revolución nacional y pusieron su pluma al servicio de la demolición del segundo gobierno de Yrigoyen. Confiaban en que el derrocamiento del radicalismo abriría paso a reformas políticas y sociales de tipo corporativo que dejarían atrás la república liberal, el desorden y, junto con el sufragio universal, los vicios de la politiquería. Fue también la apuesta de Lugones. Los hechos, sin embargo, decepcionarán las expectativas de los nacionalistas. Por un lado, el general Uriburu no fue el jefe revolucionario energético que esperaban y, por el otro, el levantamiento militar que lo llevó al poder en septiembre de 1930 contenía desde su origen tendencias en pugna. Después de mostrar que oscilaba entre diferentes cursos de acción, Uriburu terminará por devolver su papel rector a la Constitución de 1853 y llamar a elecciones con la proscripción del radicalismo. Heredero del interregno uriburista fue su rival en el ejército, el general Agustín P. Justo, quien alcanzó la primera magistratura en 1932, apoyado en una coalición de partidos. Justo dio inicio entonces a un experimento conservador basado en el fraude electoral sistemático.

#### UNA GALAXIA EN EXPANSIÓN

El traspie político no detuvo el movimiento intelectual nacionalista. Por el contrario, entre 1930 y 1943 fue una galaxia en expansión, que se diseminaba en grupos y círculos, aunque no lograba unirse en una sola fuerza política. A comienzos de los años cuarenta el nacionalismo seguía siendo una minoría, pero ya no era el exiguo contingente que había hecho sus primeras armas políticas en 1930. Los años no habían pasado en vano: los grupos identificados con el nacionalismo habían proliferado, al igual que sus hojas políticas, sus revistas y sus editoriales. El conjunto englobaba una amplia gama de posiciones, de aquellas tradicionalistas y contrarrevolucionarias a las directamente fascistas, y

constituían un activo sector del medio ideológico argentino. A partir de la segunda mitad de los años treinta una nueva generación de intelectuales y militantes, formados en los Cursos de Cultura Católica, le dio supremacía al ala católica del conglomerado, que contaba con aliados y directores espirituales en el clero y simpatizantes en la oficialidad del ejército. En los días en que la guerra civil española movilice en favor de la república a los partidos de la izquierda y a las expresiones de la cultura antifascista, los nacionalistas tomarán partido por la España eterna, defendida por el general Franco, a quien se juzgaba un cruzado católico.

En 1934 los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta publicaron un ensayo llamado a convertirse en un clásico del pensamiento político e histórico nacionalista, *La Argentina y el imperialismo británico*. El ensayo tenía un objetivo político inmediato: criticar el tratado firmado por el gobierno argentino con Gran Bretaña en 1933 y, por medio de la crítica del llamado Pacto Roca-Runciman, censurar al régimen que presidía el general Justo. Los finos caballeros que representaron a Argentina en la negociación del tratado, advirtían los Irazusta, habían actuado con arreglo a una mentalidad difundida en el país que llevaba a subordinar la política del Estado a la economía. ¿De dónde provenía esa concepción que terminaba por producir resultados adversos a los intereses nacionales? Al analizar este acuerdo que reforzaba con nuevos lazos la dependencia económica de Argentina respecto del imperio británico, los autores encontraban que el suceso no podía aclararse sino con la historia. Los autores consagraron la tercera parte del ensayo a esbozar una semblanza histórica de la oligarquía. Antes que una clase social o una minoría política, la oligarquía había sido una élite cultural que se erigió en clase dirigente. Los héroes de la tradición liberal, como Rivadavia o Sarmiento, eran, a juicio de los Irazusta, emanaciones de la mentalidad oligárquica. En dos palabras se resumía esa mentalidad: comercialismo y progresismo. Ellos no querían una gran nación sino un país civilizado y próspero, un programa que apartó al país de su verdadera tradición.

El pueblo, que era criollo, católico y tradicionalista había resistido siempre el dominio de esa élite ilustrada.

En esas pocas páginas asomaba el punto de partida del revisionismo histórico nacionalista, cuyo desarrollo posterior completaría el proceso entablado a la Argentina liberal. Afloraba allí también otra tesis que hará fortuna en debates venideros: la del divorcio entre intelectuales y pueblo en la historia nacional. El complemento de la crítica a esa desunión que se remontaba al siglo XIX serían las fórmulas ideológicas y políticas para superar el hiato.

“Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre”. Esta consigna encabezaba el manifiesto con el que se haría conocer en 1935 un agrupamiento político-ideológico, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), destinado a tener resonancia posterior antes que inmediata. La posición de los jóvenes de FORJA era también antiliberal, pero no antidemocrática. Por el contrario, la lucha por la soberanía nacional de un país al que juzgaban sometido a los intereses del imperialismo británico, resultaba para ellos indisociable de la soberanía del pueblo. No era este, sin embargo, el único rasgo que separaba este grupo nacionalista de los otros. Los forjistas procedían del radicalismo y se proponían librar batalla dentro de ese partido para devolverlo a su cauce de fuerza popular reivindicando el nombre y el legado de Yrigoyen, el jefe político en contra de cuyo gobierno había militado el resto de los círculos nacionalistas. En el antiimperialismo del forjismo obraban la lectura de los análisis del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre sobre América Latina y las conversaciones con dirigentes del APRA (la Alianza Popular Revolucionaria Americana). La predica de estos jóvenes, que en verdad reinventaban el yrigoyenismo al conferirle una coherencia ideológica que en vida del caudillo nunca tuvo, no contenía ninguna afinidad con la defensa del catolicismo y el tradicionalismo. Por otra parte, el populismo de los forjistas, que no se alineaban en la derecha, los colocaba en las antípodas del nacionalismo de Lugones.

De los animadores de FORJA, solo Raúl Scalabrini Ortiz, que no pertenecía a las filas del radicalismo, contaba con cierta notoriedad intelectual, debida, sobre todo, a su ensayo *El hombre que está solo y espera* (1931). Pero no sería en el terreno de la creación literaria donde se cimentaría la fama de Scalabrini Ortiz, sino en los trabajos que consagrará a la gravitación de Gran Bretaña en la economía argentina. El primero de los *Cuadernos de FORJA* llevará un trabajo de su firma: *Política británica en el Río de la Plata* (1936). La otra figura del forjismo, Arturo Jauretche, subordinó en esa etapa juvenil la labor de escribir a la acción política. Sólo después de 1955 cobrará celebridad por artículos y ensayos que harán de él la mejor pluma del nacionalismo populista. Nadie llevaría más lejos que Jauretche la crítica a lo que llamaba la “colonización pedagógica” de los intelectuales y a su divorcio del pueblo, fueran de izquierda o de derecha.

En fin, aunque los separaban muchos motivos tanto políticos como ideológicos, habría contactos y préstamos entre forjistas y otras familias del nacionalismo argentino, pues coincidían en la denuncia del imperialismo británico y en la reprobación del papel político del liberalismo.

#### LOS INTELECTUALES Y LA REVOLUCIÓN DE LOS DESCAMISADOS

El surgimiento del peronismo a mediados de la década de 1940 cambió definitivamente el juego político conocido hasta ese momento, cuando los candidatos a gobernar eran los radicales, que contaban con la mayoría de los votantes, o los conservadores, mediante alguna coalición y la práctica del fraude electoral. A partir de 1946, cuando el general Perón llegó a la presidencia por medio del sufragio, ya no sería así. Pero la mutación que el líder de los descamisados y su primer gobierno produjeron no fue únicamente política, sino también cultural y social. Aunque los opositores al peronismo lo descubrirían solo poco a poco, el país ya no sería el

mismo después del decenio justicialista. ¿Qué es esto? fue el título que el escritor Ezequiel Martínez Estrada dio a su ensayo sobre el peronismo, publicado en 1956. Podría decirse que este interrogante comenzó a abrirse paso en los medios antiperonistas tiempo antes, cuando los esquemas de referencia con que se había clasificado al líder surgido de la revolución militar nacionalista del 4 de junio de 1943, a su movimiento y a su gobierno, comenzaron a revelarse como insuficientes o inadecuados.

En efecto, en el comienzo la identidad del peronismo no fue un problema para sus adversarios, que interpretaron los sucesos del país de acuerdo con las claves que proporcionaba la segunda guerra mundial, que estaba llegando a su fin. Ocurría, según esta clave, que el enfrentamiento que se había dirimido en los campos de batalla entre libertad y totalitarismo, democracia y fascismo, proseguía en Argentina, donde un régimen autoritario, implantado en 1943 y espoleado por una fracción de coroneles nacionistas y anticomunistas, había disuelto a los partidos políticos, implantado la enseñanza religiosa en las escuelas y mantenía al país en la neutralidad frente a la guerra. Para el establishment liberal, que tenía de su lado a los diarios más prestigiosos —*La Nación* y *La Prensa*—, como para la dirección del radicalismo y los partidos Socialista y Comunista, el designio de Perón, surgido de esa élite de coroneles, era instalar en Argentina una versión del fascismo. La izquierda, que fue muy activa en la construcción de la dicotomía fascismo/antifascismo como disyuntiva de la vida nacional, vio en cada hecho los signos que confirmaban su diagnóstico. Así con la política a favor de los asalariados que el militar llevaba a cabo desde que asumió la Secretaría de Trabajo en 1943, en la que se identificaba la demagogia que también había caracterizado en sus comienzos a Mussolini y al nacionalsocialismo, o en ocasión del 17 de octubre de 1945, cuando una vasta movilización popular vuelque a favor de Perón la lucha que se verificaba en el seno del régimen militar, un episodio en que se vería la manipulación de un séquito políticamente atrasado.

El grueso de la *intelligentsia* argentina formó fila con el antiperonismo y en el año 1945, cuando el país se polarizó en dos frentes, la juventud universitaria fue el gran actor en las movilizaciones contra el régimen militar y el candidato a heredarlo, el general Perón. En nombre de lo que se autodenominaba “Resistencia” se activó la idea de la universidad militante, inscrita en la tradición del reformismo universitario, aunque otra aspiración reformista, la de la unidad obrero-estudiantil, acaso nunca estuvo más lejos de realizarse que entonces. Los trabajadores no se movían en dirección a los partidos de izquierda, sino que eran atraídos por el jefe militar antiliberal y antisocialista que los apoyaba en sus reivindicaciones y los incitaba a luchar por ellas. La política de Perón alarmaba, en cambio, a los patrones.

El 1 de febrero de 1946 apareció en la prensa una declaración que daba apoyo a la Unión Democrática, la coalición antiperonista, y que suscribían casi todos los escritores y escritoras que contaban en la literatura argentina. “En las próximas elecciones —decía el manifiesto— habrá que optar entre una tendencia que proscribe y escarnece la libertad de expresión y de pensamiento y otra que la hace posible. Nada menos que eso es lo que va a decidirse en esta hora terrible de nuestra historia”.

No solo en los sectores del universo progresista se interpretó lo que estaba en juego con criterios asociados con el conflicto internacional. También para los nacionalistas era importante la posición de neutralidad en que el régimen militar mantuvo al país hasta marzo de 1945, cuando el curso que había tomado la guerra llevó al grupo gobernante a romper las relaciones diplomáticas con el Eje. Muchos políticos e ideólogos del nacionalismo habían participado del experimento autoritario puesto en marcha en 1943 y, por supuesto, vieron con beneplácito la implantación de la enseñanza religiosa en las escuelas, la disolución de los partidos y la persecución de la izquierda. Sin embargo, aunque de esa familia ideológica provino el principal apoyo intelectual que obtuvo Perón —como lo atestiguan el respaldo a su candidatura

de nombres como el de Manuel Gálvez, Ernesto Palacio, Leopoldo Marechal, entre otros—, una parte de los nacionalistas se alejó del militar después de la ruptura de la neutralidad argentina y juzgó negativamente la política obrera y el trato con políticos tradicionales que emprendió cuando el régimen militar buscó el camino de las elecciones. “En lugar de la revolución que queríamos nacional, sobrevino la revolución social”, dirá años después Rodolfo Irazusta, disgustado con la orientación del César tan esperado. Solo el núcleo de FORJA se adheriría sin retaceos al movimiento que se unificaba en torno de la figura de Perón. En diciembre de 1945 anunciaría su disolución, proclamando la identificación de la mayoría de sus miembros con “el pensamiento y la acción popular en marcha”, al que se incorporaban.

En los 10 años de gobierno peronista, los intelectuales que se habían alineado en contra de Perón estuvieron excluidos de la universidad y de los cargos públicos (Jorge Luis Borges, que fue destituido de su puesto en la Biblioteca Municipal y designado inspector de mercado, fue el más celebre de los excluidos). Esa *intelligentsia* se retrajo en la actividad editorial, en foros como el Colegio Libre de Estudios Superiores y en las revistas culturales —*Realidad, Expresión, Liberalis, Imago Mundi*, además, por supuesto, de *Sur*—. Paralelamente al país peronista y sus instituciones, se articuló así una Argentina intelectual cuyos integrantes se comunicaban en espacios como los nombrados, en la redacción del suplemento cultural de *La Nación* y en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Ese mundo prolongó entre 1946 y 1955 la idea de “Resistencia”, esforzándose por evitar el trato con la Argentina peronista, cuyo curso se volvía cada vez más autoritario.

Es verdad que el peronismo contó también con el apoyo de escritores e ideólogos, la mayoría de los cuales, aunque no todos, procedían del nacionalismo católico. Los intelectuales del peronismo buscarán crear en esos años instituciones propias, como la Asociación de Escritores Argentinos (ADEA). Pero esta y otras iniciativas, que a veces contaron con el estímulo de Perón, no

lograron modificar el dato de que las figuras de mayor prestigio intelectual estaban en el otro polo, el de los antiperonistas.

#### LA CUESTIÓN PERONISTA

En 1955 una coalición de liberales, socialistas y nacionalistas católicos se unió a una fracción de las fuerzas armadas para derrocar a Perón. La mayoría de la “clase cultural” celebró la caída del líder, que se produjo en septiembre de ese año tras varios días de combate, como resultado del levantamiento militar-civil que se dio el nombre de Revolución Libertadora. Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que habían sido una activa base de agitación contra el gobierno peronista, ocuparon las dependencias de esa casa de estudios y presionaron para ser escuchados en la designación de las nuevas autoridades universitarias. La presión dio resultado: fue designado rector un destacado intelectual identificado con el socialismo liberal, el historiador José Luis Romero, cuya gestión fue decisiva para que la reestructuración de la enseñanza superior no solo adoptara los principios del reformismo universitario, sino que hiciera de la investigación una tarea indisociable de la vida académica. La universidad argentina del decenio 1956-1966 quedaría en la memoria como la universidad reformista por excelencia. La editorial Eudeba fue uno de sus símbolos públicos.

En las filas de los triunfadores el consenso de los primeros días no duró mucho. Estaba en debate el rumbo político, económico e institucional de la Argentina posperonista, un debate sobre el porvenir que no podía eludir, entre otras cosas, la cuestión de cómo asimilar al nuevo cuadro de la vida nacional a esas masas sindicalmente organizadas que habían ingresado en la escena de la mano de Perón. Ahora bien, ¿cómo liquidar esa etapa y cómo recomendar un curso de acción sin dar paso a una discusión sobre qué había sido el peronismo? Las disidencias se dejarían ver muy pron-

to, tanto en lo relativo a cómo debía procederse frente a esas masas, como en lo referente a la explicación del hecho peronista. Las divergencias entre las fuerzas del conglomerado antiperonista se reflejaron también en las filas de la *inteligentsia*. La breve pero agria polémica que sostuvieron en 1956 Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato en las páginas de las revistas *Sur* y *Ficción* da ilustración del agrietamiento que experimentaba el frente unido de un año atrás.

A juicio de Borges, que expresaba el punto de vista del antiperonismo más recalcitrante, en toda la literatura reciente de los que llama “comentadores del peronismo” se hablaba de abstracciones deterministas —como “necesidades históricas”, “males necesarios” y “procesos irreversibles”— que servían para no hablar del “evidente Perón” y su abominable régimen. Frente a estos “manipuladores de abstracciones” prefería el lenguaje elemental del hombre de la calle, que llamaba a las cosas por su nombre y reconocía la realidad de la culpa y el libre albedrío. Sábato, que poco antes había escrito *El otro rostro del peronismo*, un ensayo en que intentaba un ejercicio de comprensión del fenómeno peronista, sin circunscribirlo a la figura de su líder, tomó la palabra. En un pasado más fácil y feliz de Argentina, dirá en su réplica, Borges podía entregarse a juegos literarios refinados en que Judas podía reflejarse en Jesús. Pero, tras más de una década de violencias y humillaciones que habían sacudido el espíritu, “todos hemos descubierto nuestro ser político; también Borges, a su manera”. El refinado escritor de ayer dejaba ahora de lado sus filosofías sobre la identidad de los contrarios para hacer suyo el dualismo más vulgar: de un lado, el Bien; del otro, el Mal. Del lado del Mal, proseguía Sábato, estaba “la masa obrera, la chusma, la roña, las alpargatas”; del lado del Bien, “los antiperonistas, Borges, Adolfito Bioy”. El corolario político de esta visión maniquea era evidente: nada de explicaciones y justificaciones, reprimir debía ser la respuesta. Sin embargo, había un aspecto de verdad en el peronismo, la verdad de una larga exclusión social y política de la que todos eran culpables. Ella

emergió a la vida pública a través de Perón, pero no se confundía con este. Respondió Borges y después nuevamente Sábato, pero solo desarrollarían variantes de los argumentos ya expuestos.

La división que introdujo la cuestión peronista se hará más visible en la fractura entre jóvenes y adultos del mundo intelectual, entre los establecidos y los recién llegados a ese mundo. *Contorno*, la revista de los “parricidas”, como los llamó el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, encabezó el desafío generacional que no tardará en propagarse. El grupo de *Contorno*, en el que sobresaldrían David Viñas, Noé Jitrik, Adolfo Prieto, León Rozitchner y Juan José Sebreli, representaría en la ficción, el ensayo y la crítica los “años Sartre” en la vida de la izquierda intelectual argentina. Desde su aparición en 1953, la revista había ido trazando número tras número y de manera polémica la frontera entre “ellos” y “nosotros”, entre quienes debieron haber sido los “maestros”, pero no lo fueron, y los jóvenes que deseaban más verdad en la literatura, que esta asumiera el “contorno”, por desagradable que fuera. Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Láinez, Adolfo Bioy Casares, simbolizaban la literatura que no se quería practicar. Cuando en 1956 el grupo redactor consagró un número a la interpretación del peronismo se verá que no era únicamente magisterio literario el que esperaban de sus mayores. De estos reclamaban también mayor lucidez crítica respecto de la vida pública nacional. Para *Contorno*, al igual que para Sábato, el peronismo había sido un proceso contradictorio y querían hacer distinciones o, como dirá el texto editorial, se habían “propuesto enfrentar el riesgo de decir esto del peronismo sí; esto del peronismo, no”.

Hacer distinciones, no confundir a las masas con sus dirigentes, diferenciar el fascismo de las metrópolis del nacionalismo de los países dependientes: la revisión del pasado inmediato, en suma, ya no se detuvo. Esta revisión alimentó, sobre todo en las filas de los jóvenes de la izquierda, que eran predominantemente universitarios, el sentimiento de una culpa por haber en-

frentado al peronismo, sin haberlo comprendido. ¿Cómo mantener la conciencia tranquila cuando se había jugado a favor de los enemigos del pueblo? Atraídos por el presidente Arturo Frondizi muchos de ellos, en quien veían la posibilidad de reunir a clases medias ilustradas con la clase obrera peronista, se desilusionarán de su gobierno y durante los años siguientes, desde fines de los cincuenta hasta la primera mitad de los sesenta, integrarán el universo flotante de la “nueva izquierda” argentina. Esta nueva izquierda, reunida en pequeños grupos políticos y en revistas efímeras, no se quería meramente progresista: era crítica de la tradición antiliberal y más radical que la reformista izquierda socialista y comunista. Fue en este medio social e ideológico donde hallaron su público los expositores del nacionalismo marxista, algunas de cuyas obras —por ejemplo, *Historia crítica de los partidos políticos argentinos*, de Rodolfo Puiggrós, y *Revolución y contrarrevolución en la Argentina*, de Jorge Abelardo Ramos— conocerán más de una edición. Algunas luchas anticoloniales y, sobre todo, el ejemplo de la Cuba de Fidel y del Che, que había pasado a ser desde 1960 la piedra de toque del compromiso revolucionario, daban aliento a la idea de que el combate por el cambio social debía ligar socialismo y nacionalismo.

La interrogación sociológica también puso la atención en el peronismo. Como recordará años después Juan Carlos Torre, los estudios sociales, “hicieron su ingreso en los medios universitarios a partir de una reflexión sobre este hecho capital de nuestra experiencia contemporánea”. En efecto, Gino Germani, que creó la carrera de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue también quien inició la interpretación del peronismo en el marco de los temas y las preocupaciones de una sociología de la modernización. En un artículo de 1956, “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, Germani había rebatido, comparando la experiencia argentina con la europea, la clasificación del peronismo en la familia de los fascismos. La clave explicativa del peronismo se

hallaba a su juicio en el proceso acelerado de industrialización y la urbanización masiva que había conocido el país entre los años treinta y cuarenta; como consecuencia de la rapidez de la transformación, la clase obrera era de formación reciente, procedía del mundo rural y carecía de experiencia sindical. Esta nueva clase obrera en constante aumento había sido integrada a la vida política por el peronismo. En trabajos posteriores Germani siguió refinando sus análisis y forjó el concepto de movimiento nacional-popular para dar cuenta del peronismo y otras formaciones semejantes en América Latina.

En la vía abierta por Germani debe situarse el estudio que Torcuato Di Tella publicó en 1965, "Populismo y reforma en América Latina". El propósito del trabajo de Di Tella, que provenía del socialismo, era establecer cómo se hacía posible la formación de partidos o movimientos aptos para las reformas sociales en países que no se modernizaban de acuerdo con el modelo europeo, como era el caso de los latinoamericanos. La respuesta a la cuestión se hallaba para el autor en el populismo, nombre singular para una pluralidad de casos que clasificaba en diferentes subtipos. El peronismo había sido un caso de coalición populista en el gobierno que tenía en su haber importantes reformas sociales. Desalojado del poder, sin embargo, había perdido una parte de sus componentes originarios (militares nacionalistas, clero, fracciones burguesas) y se sostenía casi exclusivamente en los sindicatos de trabajadores. Según Di Tella, allí se encontraba la base obrera para una nueva coalición populista, en cuya composición debían tomar parte los intelectuales y las clases medias, dos sectores que en el pasado se habían alineado con el antiperonismo.

Poco a poco la cuestión peronista se volvió un objeto magnético para los intelectuales de izquierda y en la investigación social la cultura universitaria se imbricó con los nuevos marxismos y con la intención política. A comienzos de los setenta, dos sociólogos de esa filiación, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, expusieron en *Estudios sobre el peronismo* (1971) un análisis

de los orígenes de ese movimiento que ponía en cuestión la explicación germaniana, que giraba en torno del papel de la nueva clase obrera, sin cultura gremial, en esa génesis. Marxismo gramsciano e investigación empírica se unían en el trabajo de Murmis y Portantiero, que mostraba el papel de la vieja élite sindical en la alianza con Perón.

#### EL RETORNO DE LA IDEA DEMOCRÁTICA

La radicalización de los sectores medios ilustrados, que se verificó en el país entre fines de los sesenta y la primera mitad de la década siguiente, combinó los elementos que rápidamente hemos consignado de formas que sería imposible resumir en pocas líneas. Digamos únicamente que dos nuevos ingredientes se añadieron a ese curso de efervescencia ideológica: en segmentos de la izquierda se pasará de las armas de la crítica a la crítica de las armas y algunos partidos armados actuarán en nombre del pueblo proscrito, el pueblo peronista. Aunque el peronismo volvió al gobierno en 1973, en las primeras elecciones sin proscripciones después de 18 años, la marcha ya no se detuvo. Lo que había animado la imaginación y el voluntarismo de los jóvenes, en particular del sector que tomó el camino de las armas, no era la meta de la democratización política. Tampoco el retorno de Perón, aunque su vuelta fuera vista como etapa de una lucha destinada a llevar al peronismo más allá de sí mismo. Lo que movilizaba era la idea de un poder de nuevo tipo, popular, que surgiría de los fusiles y que permitiría edificar la sociedad del hombre nuevo.

Todo terminó catastróficamente cuando las fuerzas armadas volvieron al poder en 1976 e implantaron en nombre de la guerra contra la subversión el terrorismo de Estado. La larga inestabilidad política que caracterizaba la historia argentina del siglo xx, con antagonismos que pusieron al país al borde la guerra civil más de una vez, culminó así con una dictadura que le costaría la

vida a varios miles de personas de todas las edades. Cuando seis años después, el fracaso de una aventura militar, la guerra de las Malvinas, derrumbó al régimen y reabrió nuevamente la posibilidad de una vuelta al Estado de derecho, la idea democrática se había instalado en una amplia franja de las élites intelectuales.

El nombre de Raúl Alfonsín, dirigente del ala progresista del radicalismo, se halla indisolublemente ligado a la transición política que llevó del colapso de la dictadura a los años que presidió el país como jefe del primer gobierno democrático. En la acelerada marcha que llevó a las elecciones del 30 de octubre de 1983, Alfonsín se adelantó a sus rivales dentro del partido en la carrera por la candidatura a presidente de la nación y el dilema que propuso a los votantes —democracia o autoritarismo— captó mejor el estado de la mayoría de la opinión pública que la disyuntiva entre liberación o dependencia, que levantó su principal oponente, el candidato peronista.

En los cuatro primeros años del gobierno alfonsinista el foco del debate y de la reflexión intelectual estuvo en la política, las reglas del juego democrático y el sistema de partidos. También sobre la sociabilidad política argentina, en busca de una matriz en la cultura cívica que explicara la inestabilidad crónica y la ferocidad de la última dictadura. El ensayo de Guillermo O'Donnell, *¿Y a mí qué me importa?* (1984), fue lo mejor que se escribió en esa vena interpretativa. La primera edición de *Autoritarismo y democracia* (1955-1983), de Marcelo Cavarozzi, fue uno de los títulos iniciales de la colección más expresiva del espíritu de aquel tiempo, la Biblioteca Política, que publicaba el Centro Editor de América Latina bajo la dirección del socialista Oscar Troncoso.

En el exilio, franjas de la izquierda intelectual habían repensado las condiciones de una política socialista a la luz del fracaso del izquierdismo de los primeros setenta. Los nombres más notorios por su prestigio como pensadores de izquierda son los de José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ipólita y Oscar Téran, que habían pasado su exilio en México. A su vuelta, todos

ellos confluieron en la creación del Club de Cultura Socialista, que funcionaría en Buenos Aires durante más de dos décadas, y en las revistas *Punto de Vista*, que dirigía Beatriz Sarlo, y *La Ciudad Futura*, fundada por Jorge Tula con Aricó y Portantiero. Emilio de Ipólita y Portantiero integraron también uno de los grupos de asesores con que contó Alfonsín durante su gobierno y colaboraron en la redacción del célebre “Discurso de Parque Norte”.

Los intelectuales de la izquierda peronista no se mantuvieron inactivos. Sus mejores espadas se reunieron en la revista *Unidos*, que dirigía Carlos Álvarez, para librar combate contra el predominio cultural y político del progresismo alfonsinista. En efecto, *Unidos* logró atraer la colaboración de Horacio González, José Pablo Feinmann, Alcira Argumendo y Oscar Landi, entre otras plumas identificadas con la tradición nacional-popular. Ellos se aplicarían a denunciar los límites liberales del democrátismo alfonsinista y a mostrar que en el acervo peronista había más energía y resolución que en el radicalismo para dar carnicería social a la democracia.

Los amotinamientos de los oficiales “carapintadas” en abril de 1987, alzados ante la amenaza de los juicios por violación de los derechos humanos, marcaron el comienzo del fin del ciclo alfonsinista. Por temor al golpe de Estado, Alfonsín cedió al apremio militar y dañó irreversiblemente a su gobierno. La hiperinflación de 1989 completó la demolición. Por otro lado, el triunfo de Carlos Menem como candidato del peronismo fue igualmente fatal para las esperanzas del reformismo nacional-popular de la revista *Unidos*.

#### EPÍLOGO

No quisiéramos concluir este recorrido por algunos de los tramos del debate intelectual argentino en el siglo xx sin hacer referencia, aunque sea sumaria, a la polarización que han producido

los gobiernos de Néstor y, sobre todo, de Cristina F. de Kirchner en el campo de la *inteliénguentsia*. El término usual para designar el ciclo que comenzó en 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner es, precisamente, el de “kirchnerismo”, que evoca tanto una coalición gobernante como un estilo de gestión, un movimiento político y la jefatura de ese movimiento. El ascenso del kirchnerismo al poder es indisociable de la gran crisis que conoció Argentina en 2001, crisis que puso fin a una década de hegemonía del “partido del mercado” y que arrastró también al sistema de partidos existentes. Néstor Kirchner arribó al gobierno cuando el país iniciaba un nuevo e inesperado ciclo de crecimiento, pero aún permanecían los enormes daños sociales que habían producido las políticas neoliberales y la quiebra de 2001. Ambos, Néstor y Cristina, que hasta la muerte del ex presidente constituyeron el núcleo de la coalición gobernante, provenían de las filas del peronismo de izquierda. Aunque no habían hecho oposición al gobierno de Carlos Menem, identificado con las políticas neoliberales, desde su llegada al gobierno los Kirchner hicieron del pasado juvenil un signo de identidad del kirchnerismo. La política kirchnerista en el terreno de los derechos humanos y el impulso que dio a los juicios a militares le ganarían amplio apoyo en la opinión progresista. Reforzarón ese respaldo los enfrentamientos con el *establishment* empresarial y las disputas con la jerarquía eclesiástica. El estímulo al mercado interno redujo fuertemente el desempleo y los salarios mejoraron en el marco de una administración que le devolvió al Estado un papel activo en la economía, junto con una política social reparadora de los daños producidos en los años noventa, dominados por el neoliberalismo.

El kirchnerismo atrajo la colaboración de muchos intelectuales de izquierda, algunos de los cuales se incorporarían al elenco de funcionarios —Torcuato Di Tella, José Nun, Horacio González—. Otros asumirían la defensa pública de la empresa kirchnerista en libros y columnas periodísticas, sin ocupar car-

gos en el Estado, como José Pablo Feinmann. En 2008, el conflicto entre el gobierno y el conjunto de las organizaciones rurales precipitó la cristalización de un vasto cuerpo de intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Sus miembros creyeron percibir en el conflicto una maniobra desestabilizadora. Se movilizaron y se constituyeron en un movimiento, “Carta Abierta”, que dará respaldo al gobierno de Cristina F. de Kirchner, titular del ejecutivo para entonces. En el primero de sus documentos, o “cartas”, denunciarán que el gobierno democrático se veía jaqueado por una confluencia de intereses que reunía a las clases dominantes con el poder mediático.

El debate sobre el kirchnerismo en el medio intelectual, que ya estaba entablado, se volvió más enconado. Los críticos pondrán el acento en el autoritarismo del gobierno y en su aversión al pluralismo, en la manipulación clientelista de sus políticas sociales, en la falsificación de la información estadística, en su desprecio por la deliberación democrática, en el carácter arcaico de su nacionalismo.

La discordia recuerda líneas de fractura ya existentes, pero no es solo una prolongación del pasado. Su desenlace está abierto.



Este trabajo aspira a llenar un vacío en la historiografía argentina contemporánea: la ausencia de una síntesis integral de la evolución de las instituciones universitarias y su papel en la política, la sociedad y la cultura del país. Para ello, aborda la historia de las universidades argentinas, desde la fundación de la de Córdoba, a principios del siglo XVII, hasta las reformas de la década de 1990. Su enfoque privilegia la inserción de esta historia en los procesos más amplios de evolución de la vida cultural y política rioplatense, luego argentina, procurando no limitarse a una historia centrada en las propias instituciones. Las universidades constituyeron el principal espacio de formación de los profesionales liberales, conformaron el lugar por excelencia de socialización de las élites políticas y se convirtieron también en una instancia central para el ascenso social de gran parte de los hijos de inmigrantes que llegaron a la Argentina desde fines del siglo XIX. Estas variables son objeto de análisis en el presente libro. Pero también el mismo explora el papel activo que los universitarios desempeñaron en los complejos procesos políticos y sociales de la Argentina contemporánea.

Pablo Buchbinder es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia. Se desempeña actualmente como profesor en las universidades de General Sarmiento y de Buenos Aires y es investigador del Conicet con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Emilio Ravignani" de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido becario del Servicio Exterior de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt. Es autor, entre otros trabajos, de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (1997) y Caudillos de pluma y hombres de acción (2004). Ha participado en numerosas obras colectivas y publicado artículos sobre la historia de la historiografía, de la vida universitaria y del Estado, en la Argentina de los siglos XIX y XX.

Impreso en la Argentina

ISBN 950-07-2677-7



9 789500 726771

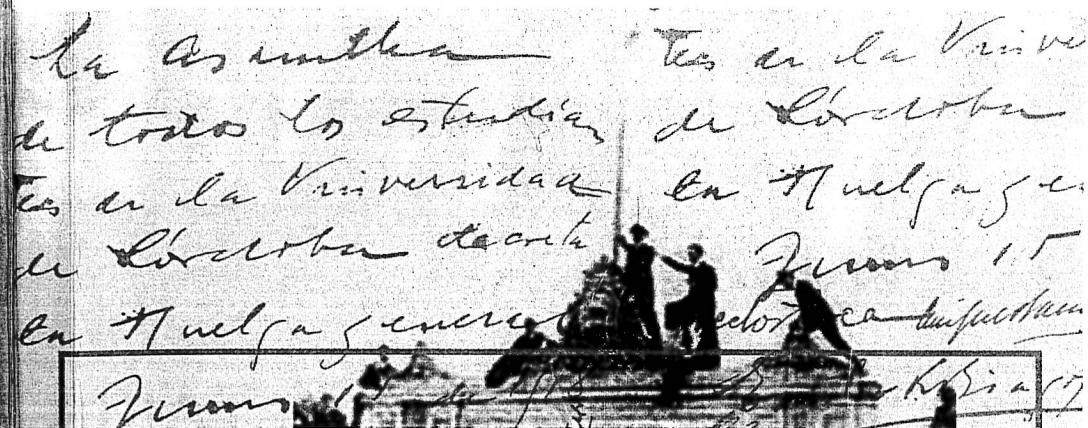
[www.edsdamericana.com.ar](http://www.edsdamericana.com.ar)

Pablo Buchbinder

HISTORIA DE LAS  
UNIVERSIDADES ARGENTINAS



Pablo Buchbinder



## HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS

Editorial Sudamericana

vinculados con distintas vertientes cercanas a la Iglesia católica, no se concebían a sí mismos como una agrupación confesional, pero rechazaban el anticlericalismo propio de los reformistas. La aparición de los humanistas contribuyó a otorgar un carácter cada vez más diverso y heterogéneo al movimiento estudiantil y restó fuerzas al reformismo tradicional. Durante los últimos años del gobierno de Perón, las tensiones con la Iglesia se acentuaron y en mayo de 1955 se estableció la derogación de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Aunque conservando sus propios matices, también los humanistas se incorporaron a la coalición que se oponía a la política del régimen en la Universidad. El giro anticlerical de los últimos tiempos del primer peronismo no hizo sino consolidar la heterogénea alianza que se alzaría con el control de las instituciones en septiembre de 1955.

## CAPÍTULO 8

### LA RENOVACIÓN UNIVERSITARIA: 1955-1966

#### LA DESPERONIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Con el ascenso del peronismo la comunidad académica argentina quedó fragmentada en dos sectores irreconciliables. Las líneas de separación no remitían en principio a posturas con respecto al perfil o funciones de la Universidad o a proyectos académicos sino a su posicionamiento frente a la política nacional y al partido gobernante desde 1946. La negación del reconocimiento de cualquier tipo de legitimidad académica al enemigo político iba a signar la vida universitaria de varias generaciones. Esta situación se hizo evidente también durante el gobierno de la Revolución Libertadora.

Pocos días después del golpe de septiembre de 1955, las universidades fueron ocupadas por agrupaciones estudiantiles que habían militado en la oposición al peronismo. En la gran mayoría de los casos se impidió a las autoridades nombradas por el gobierno derrocado acceder a las dependencias de las casas de estudios. Pero los ocupantes no encontraron prácticamente ninguna resistencia. Durante los últimos días de septiembre y principios de octubre de 1955, las universidades fueron intervenidas y se designaron nuevas autoridades al frente de cada una de ellas.

La coalición que asumió el poder en 1955 estaba conformada por fracciones políticas e intelectuales de origen muy diverso. Liberales de derecha y de izquierda, socialistas, viejos militantes católicos y humanistas se encontraban unidos por la común animadversión frente al “régimen depuesto”. En sus inicios el gobierno de la Revo-

lución Libertadora procuró sostenerse en una alianza relativamente amplia. En la Universidad otorgó un rol central como interlocutor a la dirigencia estudiantil de tonalidad claramente reformista y caracterizada por una sensibilidad política predominantemente de izquierda. El ministro de Educación de la Revolución fue un antiguo militante conservador y católico, Atilio Dell’Oro Maini. Pero el nuevo gobierno reconoció implícitamente y en forma simultánea un lugar de privilegio a sus interlocutores estudiantiles cuando aceptó designar al interventor en la Universidad de Buenos Aires a partir de una terna presentada por la FUBA. Estaba integrada por José Babini, Vicente Fatone y José Luis Romero. Este último, un distinguido historiador, además de reconocido militante socialista, fue el elegido. Como ya señalamos, Romero había permanecido al margen de la vida universitaria oficial durante el período peronista. Para Dell’Oro Maini, venía a ocupar el cargo de rector “en un retorno simbólico del exilio intelectual sufrido por la inteligencia argentina”. También habían permanecido fuera de la vida universitaria los otros interventores como José María Manuel Fernández, en la Universidad Nacional del Litoral, Benjamín Villegas Basavilbaso, en La Plata, o Juan Adolfo Vázquez, en Tucumán.

La política universitaria de la Revolución Libertadora se basó en una serie de principios que, de alguna manera, quedaron plasmados en el discurso con que Dell’Oro Maini puso en funciones a José Luis Romero como interventor. Para el ministro de Educación, las universidades debían reorganizarse sobre la base del respeto de la autonomía, “fundamento de la estructura y el cumplimiento de las funciones de la Universidad”. El personal docente de las casas de estudios debía ser declarado en comisión y reemplazado, en su totalidad, a partir de la convocatoria de nuevos concursos de títulos y antecedentes. Una vez constituido el claustro profesoral, las universidades debían sancionar los nuevos estatutos y elegir a las nuevas autoridades.

El gobierno revolucionario otorgó amplias facultades a los interventores para que éstos pudiesen comenzar la reorganización de las casas de estudios. Utilizando dichas atribuciones, procedieron a desperonizar las instituciones académicas. De esta manera tuvo lugar un nuevo proceso de cesantías masivas de profesores, auxiliares docentes y personal administrativo comprometidos de una manera u

otra con el “régimen depuesto”. La decisión de quienes debían ser cesanteados obedecía a exigencias y reclamos de las agrupaciones estudiantiles pero, en muchos casos, derivaba del criterio impuesto por los interventores tanto de las universidades como de las facultades que gozaron de un importante grado de discrecionalidad para llevar a cabo este proceso. Las apelaciones y los recursos jerárquicos presentados por gran parte de los involucrados fueron rechazados por las autoridades del gobierno de facto.

Muchos de los cesanteados entonces habían participado activamente en el régimen peronista. Pero otros fueron desplazados sobre la base de estimaciones y criterios puramente arbitrarios. El apoyo a la reelección o el respaldo a la concesión del doctorado Honoris Causa a Perón fueron los motivos esgrimidos con mayor frecuencia para justificar la expulsión. Como había ocurrido en 1946, a los cesanteados se sumó un número importante de docentes que decidieron alejarse en muestra de solidaridad. Simultáneamente, el gobierno de facto resolvió reintegrar a las cátedras a todos los docentes renunciantes entre 1943 y 1946. Los criterios políticos imperaron también en el masivo llamado a concursos que se implementó durante los años 1956 y 1957. En la incorporación o separación de docentes era, además de sus conocimientos, la “conducta”, el factor central por considerar. La “honradez” del profesor pasó a ser condición prioritaria para evaluar una trayectoria académica y la “moralidad” era un título indispensable para acceder a la cátedra. Carlos Malagarriga, un conocido jurista expulsado de la Universidad de Buenos Aires en 1946 y reincorporado en 1955 como interventor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, iba a sostener, ante una consulta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en relación con el profesorado, que la ciencia era sin duda también necesaria “pero sólo en un segundo término”. Enfáticamente afirmaba que “es preferible un profesor honesto y de sólo mediana preparación a otro sapientísimo pero deshonesto”. Estas expresiones concernientes a la honestidad y la conducta remitían, por lo general, en forma directa a la relación con el régimen peronista. Para cumplir con estos objetivos, las agrupaciones de estudiantes y graduados vigilaron las presentaciones a concursos e impugnaron en repetidas oportunidades a diferentes candidatos.

El peronismo había avanzado en un proceso de fuerte centralización del sistema universitario. Las leyes y las normativas impuestas a partir de 1947 habían procurado uniformar rasgos centrales de la vida universitaria como los mecanismos de ingreso, la forma de designación de los profesores y los procedimientos de gobierno y administración interna. Más allá de los evidentes intentos de *desperonizar* las instituciones académicas, el gobierno de la Revolución Libertadora procuró avanzar en la dirección opuesta. Así, las autoridades del gobierno de facto reimplantaron poco tiempo después de asumir la Ley Avellaneda, pero días más tarde la reemplazaron por un nuevo decreto, el 6.403, que puso las bases definitivas para la reconstrucción del conjunto del sistema. Este decreto amplió y fortaleció la autonomía universitaria. En este sentido otorgó a las casas de estudios un grado de independencia del que no habían gozado durante todo el período reformista comprendido entre 1918 y 1943. Concedió a las autoridades universitarias la potestad para administrar su patrimonio y darse su estructura y planes de estudios. Les otorgó además libertad para organizar sus formas de gobierno y, por supuesto, dictar sus estatutos siempre que asegurasen la “responsabilidad directiva de los representantes del claustro de profesores”. El decreto dedicaba todo un capítulo a las formas de designación de los profesores. Allí se explicitaba la limitación impuesta a todos aquéllos “que hubiesen realizado actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura”. La expresión tenía como principales destinatarios a todos los vinculados, de una forma u otra, con el gobierno derrocado en 1955. Pero se extendió a militantes de otras agrupaciones políticas, como los afiliados al Partido Comunista. Progresivamente también la aprobación de los planes de estudios y la designación de los profesores quedaron en forma definitiva en manos de las mismas autoridades de la Universidad. Esta última medida constituyó una innovación particularmente relevante, ya que dejó sin efecto el antiguo sistema de presentación de ternas ante el Poder Ejecutivo.

Sobre estos fundamentos tuvo lugar un acelerado proceso de transformación del profesorado universitario que afectó, de manera desigual, a las diferentes casas de estudios y tuvo un impacto más profundo en algunas facultades que en otras. Fue particularmente intenso en Buenos Aires, La Plata y Córdoba y menos pro-

fundo en Tucumán y Cuyo. Por otro lado, involucró más a las facultades de Derecho y Humanidades que a las de Ingeniería, Ciencias Exactas o Medicina. A partir de mediados de 1957 las universidades dictaron nuevos estatutos. En la mayor parte de las casas de estudios, éstos reconocieron un peso más relevante a la representación estudiantil que la que habían contemplado los estatutos reformistas sancionados desde 1918. En la Universidad de Buenos Aires, los consejos directivos estarían integrados ahora por ocho representantes del claustro de profesores, cuatro del de estudiantes y cuatro del de graduados. Una vez realizadas las elecciones y completado el proceso de normalización, se eligieron nuevas autoridades. En la casa de estudios porteña fue designado, por la Asamblea Universitaria, en noviembre de 1957, Risieri Frondizi, un prestigioso filósofo, cesanteado en 1946 en la Universidad de Tucumán y profesor regular de Ética y Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad porteña. Un año después, Frondizi fue reelegido por un período que se completaría en 1962.

#### LAICA O LIBRE

La Revolución Libertadora se encontró con un sistema universitario que se hallaba en una etapa de expansión. El acelerado crecimiento de la matrícula secundaria y universitaria iniciada durante el peronismo se prolongó durante los últimos años de la década de 1950. Sin embargo, el número de instituciones oficiales no se incrementó de manera significativa. Sólo dos nuevas universidades fueron creadas sobre la base de institutos ya existentes. En enero de 1956 fue fundada la Universidad Nacional del Sur a partir del Instituto Tecnológico del Sur, asentado en la ciudad de Bahía Blanca, y en diciembre de ese mismo año la Universidad Nacional del Nordeste sobre la base de dependencias de las universidades nacionales del Litoral y Tucumán, existentes en Chaco y Corrientes.

Pero la Revolución Libertadora sentó las bases para una transformación sustancial del sistema universitario ya que abrió la posibilidad de la creación de universidades privadas. En este sentido, el

gobierno de la Revolución se propuso como objetivo construir sobre nuevas bases la relación entre el Estado y la enseñanza superior. En su intento de reestructurar el vínculo entre ambas esferas, el decreto 6.403 incluyó un artículo, el 28, que establecía la posibilidad de la creación, por parte de la iniciativa privada, de *universidades libres* con capacidad para expedir diplomas y títulos habilitantes. El decreto colocaba así el punto de partida para independizar a las universidades de la tutela del Estado. La inclusión de este artículo provocó la primera ruptura en la coalición que controlaba las universidades que se tradujo, tiempo después, en las renuncias de Dell’Oro Maini y José Luis Romero a sus respectivos cargos. Un grupo importante de académicos e intelectuales rompió filas con el gobierno e inició una campaña que iba a continuar durante el gobierno constitucional de Arturo Frondizi procurando evitar la transformación de dicho artículo en ley o su reglamentación. La Junta Consultiva Nacional, que funcionaba como órgano asesor del gobierno, debatió con intensidad el artículo 28 en presencia del ministro de Educación. La oposición más vehemente fue asumida por los socialistas Américo Ghioldi y Alicia Moreau de Justo, que se erigieron en fervorosos defensores de la tradición de la enseñanza laica durante las discusiones pero terminaron aceptando los criterios sugeridos por las autoridades. En dicha reunión ambos objetaron el derecho del gobierno de facto a avanzar en la reglamentación del tema y manifestaron además su preocupación por la posibilidad de que la iniciativa ahondase las diferencias culturales en el seno de la sociedad. El hecho de que las universidades privadas pudiesen usufructuar fondos públicos y, sobre todo, la posibilidad de que emitiesen títulos habilitantes para el ejercicio profesional sin supervisión de la autoridad estatal, constituyeron los puntos centrales del debate.

Pero la discusión dio cuenta también de la presencia dominante que los católicos de orientación liberal tenían en el régimen militar. Éstos expresaron con claridad la oposición al monopolio estatal laicista en el ámbito educativo. Respaldaron sus argumentos, además, en una corriente sostenida por intelectuales destacados como Julio V. González o Eduardo Braun Menéndez, que habían percibido durante las décadas del cuarenta y el cincuenta a la Universidad privada como una alternativa al intento del Estado de imponer ideologías *totalitarias* a través del sistema educativo.

La iniciativa privada aparecía así como la contracara de las tendencias autoritarias impuestas en la enseñanza formal desde principios de los años cuarenta.

Con el artículo 28 culminaban exitosamente los intentos de sectores vinculados con la Iglesia católica por instaurar universidades confesionales con capacidad para otorgar títulos habilitantes. En este sentido cabe destacar que las iniciativas con este objetivo databan de los primeros años del siglo XX. En 1909 se habían creado en Buenos Aires los Centros de Estudiantes Católicos. En 1910 se había fundado la Universidad Católica de Buenos Aires, que debió cerrar sus puertas en 1920 por la negativa del Estado nacional a otorgar reconocimiento legal a los títulos que otorgaba a sus egresados. Proyectos de instauración de universidades privadas se iban a presentar en el Parlamento, sin éxito, a principios de la década del veinte y de la del cuarenta.

Pero las iniciativas para otorgar una formación confesional que complementaba a la impartida a los profesionales en las universidades públicas siguieron desarrollándose en la primera mitad del siglo. En 1922, con la iniciativa de Tomás Casares, que sería interventor en la Universidad de Buenos Aires, surgieron los Cursos de Cultura Católica. Éstos contaron, desde sus orígenes, con el apoyo del Episcopado. Diversos especialistas han destacado que funcionaron como una suerte de Universidad católica de élite que se proponía cubrir las insuficiencias que, en materia formativa, presentaba la Universidad reformista. Aquí se dictaron cursos de historia y filosofía en los que predominaba la impronta neotomista. En 1944 se fundó el Instituto Superior de Filosofía, que se transformó en 1956 en la Facultad Universitaria de Filosofía. Esta institución tenía su sede en el Colegio del Salvador y la mayor parte de sus docentes pertenecía a la orden de los jesuitas.

En cierta medida, el artículo 28 y la posibilidad de la conformación de un sistema privado de enseñanza superior chocaban con valores muy arraigados en la tradición educativa de la Argentina, basada en el predominio de la instrucción laica. Por un lado, como hemos señalado, se acusaba al gobierno de fomentar la división de la sociedad sobre parámetros culturales. Por otra parte, la implantación de las universidades privadas parecía atentar no sólo contra la tradición laica sino también contra la impronta gratuita e igual-

litaria del sistema educativo. Se creía que la creación de las universidades libres iba a fragmentar al estudiantado en pobres y ricos y a terminar con un sistema que, a pesar del arancelamiento de la educación superior, había procurado siempre asegurar la igualdad de oportunidades. Por supuesto, los episodios revelaban también la influencia creciente adquirida por la Iglesia en la esfera pública desde 1930 y la mayor debilidad del consenso a favor de la vigencia del sistema de enseñanza laica monopolizada por el Estado.

Arturo Frondizi, siendo ya presidente constitucional, decidió avanzar en la reglamentación del artículo 28 en septiembre de 1958. Los factores que llevaron al líder del desarrollismo a impulsar el proyecto son objeto de controversia. Pero ya había adelantado su posición a favor de la libertad de enseñanza en su campaña electoral. Aparentemente decidió implementar el proyecto, entre otras razones, para dividir a la oposición, que se estaba movilizando con fuerza, por ese entonces, contra su política petrolera. Por otro lado, es probable también que tratase de asegurarse el apoyo de la comunidad católica y la Iglesia procurando de este modo superar su situación de extrema debilidad política. A fines de agosto de 1958, siete rectores de universidades nacionales solicitaron al presidente que no reglamentase el artículo. No obstante, Frondizi envió el proyecto al Parlamento y se inició entonces una activa campaña de huelgas y movilizaciones. En Buenos Aires, el propio rector de la Universidad y hermano del entonces presidente, Risieri Frondizi, se puso al frente de aquéllas. El 4 y el 19 de septiembre se realizaron actos multitudinarios para oponerse a los proyectos del gobierno. Pero también los partidarios de la enseñanza libre llegaron a reunir una verdadera multitud en un acto en el Congreso Nacional. El proyecto del gobierno fue rechazado en la Cámara de Diputados, pero la de Senadores aceptó finalmente un dictamen en minoría de la Comisión de Educación de Diputados elaborado por Horacio Domingorena. Éste dejaba, de todas formas, en manos del Estado la habilitación para el ejercicio profesional y excluía la posibilidad de que éste subsidiara a la enseñanza privada. Finalmente, en febrero de 1959, la ley fue reglamentada y se creó la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada, que debía supervisar el funcionamiento de las casas de estudios.

Como era previsible, las primeras universidades autorizadas fueron de origen confesional. En noviembre de 1959 fue creada la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, y en diciembre de ese mismo año la del Salvador, vinculada con la antigua institución educativa conducida por los jesuitas. Posteriormente surgieron otras universidades similares en las provincias. En agosto, también de 1959, fue fundada la Universidad Católica de Córdoba y, meses más tarde, la Católica de Santa Fe. Un año después de la sanción de la ley que permitió su creación, las instituciones privadas contaban ya con 895 estudiantes y 351 docentes. Estas casas de estudios se unieron en 1962 y fundaron el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas. Durante los primeros años de la década del sesenta el número de universidades privadas aumentó, aunque algunas debieron cerrar sus puertas poco tiempo después de creadas, y aparecieron progresivamente las primeras casas de estudios que no tenían un origen confesional. En distintos barrios de Buenos Aires se crearon universidades, y por entonces tomó impulso un movimiento de privatización de la enseñanza que trascendió al ámbito de la enseñanza superior y que se expresó en la proliferación de escuelas primarias y secundarias. En 1960 se creó la Universidad de Morón y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en 1962 la Universidad Argentina de la Empresa y, dos años más tarde, la de Belgrano, entre otras instituciones.

En 1984 las universidades privadas contaban ya con 88.000 estudiantes, 8.200 profesores y habían emitido desde su creación más de 90.000 títulos. Una disposición tomada a mediados de los años setenta las liberó de la supervisión estatal en la emisión de los títulos profesionales. No es sencillo, de todos modos, llevar a cabo un balance de su contribución al desarrollo del sistema. Numerosas casas de estudios fundadas desde 1958 tenían como propósito principal disputar con el Estado la formación de profesionales y crear un mercado para aprovechar la demanda de sectores de altos ingresos que no querían estudiar en la Universidad pública, ahora masiva y fuertemente politizada. Pero también es cierto que, en el marco de la permanente inestabilidad institucional y persecución política que afectó en gran medida a la comunidad académica, muchas funcionaron como refugio para quienes eran expulsados

del sistema público. Fueron muchos los docentes apartados de la Universidad pública en 1955 que continuaron sus carreras en las universidades privadas. En 1966 algunos de los renunciantes luego de la Noche de los Bastones Largos también encontraron en ellas un nuevo ámbito de trabajo. Durante los años setenta muchos estudiantes y profesionales hallaron allí un espacio para seguir sus carreras y gozaron, en casos muy especiales, de un grado más amplio de libertad que en las instituciones del sistema público. En cierta medida también esto fue posible por la extrema heterogeneidad del sistema universitario privado, en el que convivieron instituciones de élite con otras mucho más abiertas.

#### LA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

El sistema universitario quedó a partir de 1955 en manos de un heterogéneo grupo que aglutinaba a los excluidos del ámbito de la enseñanza superior durante el peronismo. En esta coalición convivían grupos formados en el molde de la Universidad reformista y que buscaban reconstruir el sistema con las mismas bases con las que había funcionado durante las décadas del veinte y del treinta con otro que propiciaba cambios sustanciales en las estructuras universitarias. El impulso de este último sector se hizo notar con particular intensidad en los primeros años de la segunda mitad de los cincuenta. El período comprendido entre 1955 y 1966 ha sido recordado, a menudo, por la impronta que los académicos renovadores le otorgaron a la vida universitaria. En el caso de la Universidad de Buenos Aires se recuerda aquella etapa como una verdadera "edad de oro", caracterizada por la transformación de las estructuras curriculares y el prestigio adquirido por sus docentes e investigadores. Pero también se ha insistido en los últimos años en señalar los límites de ese mismo proceso. Aunque el espíritu modernizador era evidente entre cierto núcleo de las autoridades de la Universidad, la transformación permaneció limitada a algunas facultades, y, a veces dentro de ellas, a algunas áreas disciplinares. El impacto de la moderni-

zación fue ciertamente limitado en universidades del interior como Tucumán o Cuyo o incluso en la mayor parte de las unidades académicas de la Universidad de Córdoba.

El proyecto renovador procuraba afrontar diversos desafíos que se planteaban al sistema universitario argentino del posperonismo. En primer término debía resolver el problema derivado del aumento sustancial en el número de estudiantes que, además, optaban mayoritariamente por las carreras tradicionales, sobre todo Derecho y Medicina. Por otro lado, era necesario renovar las estructuras curriculares, los planes de estudios y los métodos de enseñanza, que provenían, en la mayor parte de los casos, de finales de la década del 10 y principios de la del 20. No obstante, muchos de los renovadores ansiaban también fortalecer el perfil científico de la Universidad. Esta aspiración databa de comienzos de siglo pero nunca había sido perseguida de manera sistemática. En el mundo de la posguerra la ciencia cumplía un papel central y las iniciativas que en este sentido se habían desarrollado durante el primer peronismo habían logrado resultados por demás modestos. El atraso en materia científica era particularmente evidente en el ámbito de las ciencias sociales. En 1955 la enseñanza universitaria de la historia seguía conservando el molde impuesto a principios de siglo por los historiadores de la llamada Nueva Escuela Histórica. Por otra parte, la sociología científica desarrollada en Francia y en los Estados Unidos tenía un lugar absolutamente marginal en el mundo académico local, y esta disciplina se constreñía más bien a un estudio de la evolución de las ideas sobre la sociedad. También se insistía en la necesidad de asegurar el pluralismo ideológico y político en la vida académica revirtiendo años de autoritarismo. Durante el período en que Arturo Frondizi ocupó la presidencia de la Nación, el proyecto universitario coincidió con algunas facetas sustanciales de la política gubernamental que reconocía en el desarrollo de la ciencia un instrumento fundamental para asegurar el progreso y la independencia económica. Esto se verificaba en un contexto internacional signado por la idea de que el conocimiento científico cumplía un papel estratégico en el desenvolvimiento económico de los Estados. La investigación pasó a ocupar un lugar central en la agenda de los gobiernos y se produjo un aumento notable de los recursos otorgados para el desarrollo cien-

tífico y tecnológico. En este marco nació, en 1958, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad fue percibida como uno de los ámbitos privilegiados para la creación intelectual y científica.

El análisis de la evolución histórica de la Universidad de Buenos Aires permite percibir que las bases del proyecto modernizador se sentaron, efectivamente, antes de la normalización que culminó en diciembre de 1957. La renovación se llevó a cabo siguiendo diferentes vertientes. Uno de sus pilares fue la transformación del cuerpo de profesores, posibilitada por la puesta en comisión del personal docente ordenada por el gobierno de la Revolución Libertadora. El inicio de un proceso de concursos dio paso a una auténtica renovación generacional del profesorado de la institución universitaria, sobre todo en Buenos Aires y La Plata, que aglutinaban por entonces a un 60% de todos los estudiantes universitarios. La elección de los jurados de los concursos generó controversias en todas las universidades, pero varios de ellos estuvieron integrados por reconocidos especialistas extranjeros. También participaron intelectuales y científicos de prestigio que habían permanecido fuera del sistema universitario durante el peronismo, como Osvaldo Loudet, Eduardo Braun Menéndez, Eduardo de Robertis, Alfredo Lanari o Ezequiel Martínez Estrada. Otros, como el historiador del arte Julio Payró, debieron ser sustituidos porque aspiraban ellos mismos a los cargos en disputa. Muchos de quienes ganaron los concursos también habían estado fuera de la Universidad durante el período peronista y algunos habían seguido sus estudios en el exterior. Los criterios que operaron en estos concursos fueron en muchos casos también novedosos. Eran las publicaciones en revistas internacionales con arbitraje o la capacidad para formar discípulos más que la mera antigüedad docente los elementos que tomaron en cuenta la mayoría de estos jurados.

Cuando Risieri Frondizi asumió el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la renovación tomó un nuevo impulso. Durante su gestión promovió el desarrollo de las facultades y de las secciones asociadas al desarrollo de un perfil más científico que profesional. Fueron las facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras los núcleos esenciales donde cristalizó el proyecto de con-

vertir a la Universidad en un centro privilegiado para la investigación, pero la renovación afectó también a institutos de orientación tradicionalmente profesional como la Facultad de Medicina, donde se constituyó un ciclo básico cuyos docentes, en su gran mayoría, gozaban de dedicación exclusiva y se consagraban prioritariamente a la investigación. Precisamente, la intención de unir la docencia con la investigación se expresó a partir de la expansión del sistema de dedicación exclusiva. En 1958 había nueve profesores con esa dedicación en la Universidad de Buenos Aires. En 1962 ya sumaban casi 500, y alrededor de 700 cuatro años después. La dedicación presuponía que el profesor consagraba la mayor parte de su tiempo a la investigación original. El Conicet apoyó fuertemente la conformación de este régimen a partir de la concesión de subsidios para la investigación y el equipamiento y a través de una activa política de concesión de becas para graduados que permitió el perfeccionamiento de jóvenes científicos en el exterior y la formación de grupos de investigadores. La creación de la carrera de investigador significó un paso más en este proceso de profesionalización académica y de surgimiento de un nuevo perfil de profesor universitario, definido ahora por la vinculación entre investigación y docencia. En este proceso fue central el papel jugado por algunas figuras como Manuel Sadosky y, sobre todo, Rolando García, decano de la Facultad de Ciencias Exactas desde 1957. Se trataba de un físico prestigioso que fue, simultáneamente, vicepresidente del Conicet y que contribuyó, de manera decisiva, a que esta institución apoyara la investigación en la Universidad. Su papel en los inicios de los estudios de computación, durante este mismo período en el ámbito académico, fue también fundamental.

Los recursos económicos dispuestos a apoyar la tarea científica en la Universidad también se incrementaron de manera considerable y se diversificó además su origen. Durante los años 57 y 58 se creó el Consejo Interuniversitario, integrado por los rectores de todas las universidades, y se constituyó además un fondo conformado por el remanente de los presupuestos de las distintas universidades. A principios de la década del sesenta, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó préstamos para el reequipamiento de las universidades nacionales. Finalmente, algunos de los centros más renovadores de la Universidad de Buenos Aires reci-

bieron fondos en calidad de subsidios de fundaciones extranjeras como la Fundación Ford, que, entre otros aspectos, apoyó diferentes actividades del Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Otros centros menos conocidos, como la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, también se beneficiaron con fondos externos, en este caso de la Fundación Rockefeller. Asimismo, otorgaron estas organizaciones recursos para financiar becas en el exterior. De todas formas, el grueso de los aportes que sostuvieron la renovación universitaria eran de origen público. Estos recursos permitieron la modernización de las bibliotecas, la creación de nuevas carreras, el surgimiento de organismos como la Escuela de Salud Pública y el Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires o el Instituto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la misma casa de estudios.

Estos procesos fueron acompañados por otros cambios en la organización institucional de la Universidad. Uno de ellos, concretado en la Universidad Nacional del Sur, y parcialmente en otras casas de estudios, fue el reemplazo de la estructura basada en facultades por otra conformada a partir de departamentos. El objetivo era unir, por medio de éstos, a las mismas especialidades dentro de cada Universidad o Facultad y articular en ellos, en forma estrecha, a la docencia con la investigación. Por otro lado, también se avanzó sobre la organización de la estructura curricular. Surgieron nuevas carreras y los planes de estudios de las antiguas fueron reformados tratando de actualizarlos. La renovación de la enseñanza universitaria de las ciencias sociales se inició en la Universidad de Buenos Aires poco tiempo después del golpe militar de 1955. En noviembre de 1957 fueron creadas las carreras de Psicología y Sociología. En mayo de 1957 se aprobó el plan de la carrera de Ciencias de la Educación, que reemplazaba a la antigua de Pedagogía. En septiembre de 1958 fue fundada la carrera de Ciencias Antropológicas. Durante ese último año, en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Universidad se creó la carrera de Economía, cuyo perfil era menos profesional que la de Contador Público, dominante por entonces en dicha institución. Apareció una nueva preocupación por los aspectos didácticos y varias

universidades instalaron departamentos de Pedagogía. En este contexto se intentó avanzar en cambios en las modalidades y organización de los cursos. En las facultades más renovadoras, como Filosofía y Letras, se reemplazaron los cursos anuales por otros cuatrimestrales. La modalidad del curso anual era considerada, en parte, causa de la excesiva duración de las carreras. La gran mayoría de los planes de estudios sufrió fuertes modificaciones que tendieron a volverlos más flexibles y a permitir su actualización. En este marco también se trató de lograr que los alumnos dejases de cursar usando apuntes y utilizasen libros de manera sistemática.

La modernización edilicia no quedó al margen. En 1962 comenzó la construcción del primer pabellón de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. En esta misma Universidad se afrontó, además, la tarea de reorientar la matrícula e incrementar el porcentaje de graduados. También se obtuvieron resultados positivos en este sentido. Entre 1959 y 1964, la Facultad de Ciencias Exactas incrementó su población estudiantil en un 60% y Filosofía y Letras en un 146%, sobre todo por la expansión de la carrera de Psicología. Mientras tanto, la de Medicina se redujo en un 9,1%. Con este propósito se impulsó además el desarrollo del Departamento de Orientación Vocacional, que cumplió un papel fundamental en los cambios en la composición de la matrícula, ya que trató, con cierto éxito, de promover en el estudiantado la conciencia de la importancia de la elección de la carrera. El Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires fue creado en 1956, después de un período de asesoramiento en el cual colaboró la UNESCO. El impulso que se otorgó a su creación estaba motivado por la idea de que la desorientación en materia vocacional desempeñaba un papel central en las deserciones y en el fracaso universitario. Desde finales de la década de 1950 este departamento ofreció, en forma sistemática, asistencia en su materia a estudiantes secundarios.

La extensión también estuvo involucrada en los intentos de conformar un nuevo sistema universitario. A principios de 1956, cuando era rector José Luis Romero, se creó en la Universidad de Buenos Aires el Departamento de Extensión. Entre otros proyectos encaró uno de desarrollo integral en una zona marginal del Gran Buenos Aires, en Isla Maciel. El proyecto asumía la inten-

ción de llevar a cabo una investigación integral sobre la condición social de sus habitantes y su organización para tomar medidas que permitiesen mejorar su nivel de vida. En este contexto se desarrollaron distintas iniciativas. Una de las más significativas estaba vinculada con los cambios en la vivienda. La extensión, como en épocas anteriores, era concebida aquí como un instrumento privilegiado para canalizar hacia el exterior las ideas que se producían en la Universidad. La creación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), en 1958, fue, en este contexto, también fundamental. La editorial, dirigida por el prestigioso científico y editor Boris Spivacow, publicó en sus primeros ocho años de existencia 802 títulos y distribuyó casi 12 millones de ejemplares.

Sin embargo, los efectos de la modernización no debieran exagerarse. El proceso de transformación fue intenso en Buenos Aires, pero su impacto debe diferenciarse de acuerdo con las carreras, las facultades y los ámbitos académicos. Fuera de Buenos Aires los cambios no fueron tan profundos pero revelaban hasta cierto punto la existencia de un nuevo clima y la necesidad de responder a nuevas exigencias. El panorama era, en este contexto, sin duda muy complejo. En La Plata, el proceso fue paralelo al de Buenos Aires e incluso muchos de sus protagonistas fueron los mismos. Además, allí los cambios se articulaban con una tradición propia de la casa de estudios fundada por Joaquín V. González que, desde sus orígenes, había enfatizado la relevancia de la investigación científica para el desenvolvimiento de la institución. Pero en sedes como las de Córdoba, el Litoral o Cuyo la renovación quedó restringida a unos pocos núcleos. Allí dependía solamente de algunas iniciativas individuales. El antiguo modelo de los años veinte seguía reproduciéndose en la mayor parte de las casas de estudios del interior de la Argentina.

#### LOS LÍMITES DE LOS PROYECTOS MODERNIZADORES

Para muchos estudiosos de la vida universitaria argentina, el golpe de 1966 y la intervención a las universidades que le siguió cerraron el período de renovación y modernización universitaria abierto en

septiembre de 1955. Pero un análisis más detallado obliga a relativizar estos juicios, que, por otro lado, están condicionados por la visión de lo acontecido, nuevamente, en algunas unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires.

Los proyectos modernizadores fueron perdiendo fuerza e intensidad durante los primeros años de la década de 1960. El impulso había sido sin duda muy fuerte durante los años de la intervención y los primeros tiempos de la normalización. Pero en todas las universidades comenzaron a generarse, tempranamente, tensiones de diferente origen. En principio, en las casas de estudios convivían sectores de distinta orientación académica y científica. Risieri Frondizi, recordando su gestión como rector, señalaría tiempo más tarde que “la presencia en la Universidad de un grupo de ‘tradicionalistas’ constituyó un lastre que tuvimos que arrastrar con gran esfuerzo”. Las tensiones entre ambos grupos condicionaron el funcionamiento de las instituciones y sin duda limitaron la renovación ya que, en muchos casos, la conformación de un nuevo escenario político para las universidades operó a partir de un acuerdo tácito de división de áreas, carreras, institutos de investigación o cátedras entre sectores de diferente orientación. El caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires muestra con claridad esta tensión. Mientras la renovación operó a partir de la creación de nuevas carreras, sobre todo Psicología y Sociología, en las más antiguas como Historia o Filosofía, seguían dominando los criterios científicos y pedagógicos de los años veinte y treinta. La oposición al cambio estaba concentrada también dentro de las universidades. Los dirigentes de las principales facultades profesionales de la Universidad de Buenos Aires, como Medicina y sobre todo Derecho, cuestionaron muchos aspectos del rumbo que tomaban las instituciones más renovadoras.

A los conflictos originados en criterios de orientación curricular, pedagógica y científica o relativos al papel y las funciones de la Universidad, se sumaron las disputas políticas. La comunidad académica se fragmentó a raíz de la radicalización política de una parte importante de sus integrantes, y este factor restó también fuerzas a los proyectos renovadores. La radicalización involucró a vastos sectores de la clase media y se profundizó particularmente con la Revolución Cubana. Gran parte de la

juventud universitaria comenzó a participar entonces en forma entusiasta de un proceso de acelerada politización. El impacto de la Revolución en Cuba provocó que creciera entre los universitarios el consenso a favor de las soluciones revolucionarias. El subdesarrollo y la pobreza aparecieron por entonces vinculados con la vigencia de un orden internacional y local profundamente injusto. Era cada vez más evidente para muchos de estos universitarios que los males de la sociedad argentina no iban a poder resolverse a partir de la aplicación de políticas desarrollistas. Así lo revelaba el fracaso de la experiencia de Arturo Frondizi, expresado en su destitución en 1962.

En cierta medida la forma en que la institución y sus actividades se vinculaban con dimensiones más generales de la vida política de la Argentina se encontraba en el centro de las controversias de los actores universitarios. Durante aquellos años fue cada vez más difícil construir un esfera o un ámbito autónomo para el debate académico. Fue imposible preservar un espacio para la problemática universitaria ajena a la lógica de la política nacional. El espacio académico estaba cruzado permanentemente por las tensiones derivadas de aquella. En este contexto, una parte relevante de los núcleos que sostenían la experiencia renovadora insistía en convertir a la Universidad en un agente de la transformación social. El dilema que se planteaba con urgencia entonces era cómo encauzar la actividad política en el seno de las instituciones y cómo articular la relación entre la vida política nacional y el funcionamiento de aquéllas. Fue en esta imposibilidad de separar la esfera política de la académica donde el proyecto renovador surgido en 1955 encontró muy pronto sus límites.

Los debates y las controversias entre los miembros de la comunidad universitaria se volvieron cada vez más difíciles, sobre todo en las instituciones más identificadas con la renovación académica. Había consenso en torno a la necesidad de avanzar en la departamentalización, pero a la hora de determinar las atribuciones de los departamentos, sus márgenes de autonomía y la forma de designación de los directores resultó extremadamente complicado llegar a acuerdos. Lo mismo sucedió con los criterios para instrumentar cátedras paralelas o a la hora de aprobar dictámenes de concursos docentes. El modelo académico consolidado desde

1958 fue cuestionado por su carácter *científicista*. Una parte relevante de los académicos y, sobre todo de los estudiantes, rechazaba la idea de que la ciencia pudiese contribuir en forma decisiva a modificar la realidad social y elevar los niveles de vida de la población. Estas transformaciones sólo podían provenir ahora de un cambio radical de las estructuras sociales. En este contexto se cuestionó también la posibilidad de la autonomía de la ciencia. Numerosos académicos y, sobre todo, dirigentes estudiantiles procuraron comprometer a la institución universitaria en ese mismo proceso de cambios revolucionarios. La lógica de la vida académica pasaba a estar determinada, cada vez más, por la de la lucha política.

La relación entre los estudiantes y la dirigencia universitaria se complicó a lo largo de la década del sesenta. Los estudiantes se movilizaron contra los exámenes de ingreso, considerados limitacionistas, contra el aumento de los aranceles de los comedores universitarios y contra las restricciones presupuestarias, sobre todo en los años 64 y 65. Estas restricciones se agravaron por el crecimiento de la matrícula, que siguió en ascenso durante aquellos años. Los estudiantes universitarios, de 138.000 en 1955, pasaron a 220.000 diez años más tarde. También cuestionaron con fuerza la recepción de subsidios externos considerados formas de *penetración imperialista*. Como ya señalamos, muchos grupos de investigación, sobre todo en el ámbito de las facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, habían recibido subsidios de fundaciones norteamericanas. En este contexto generó un agudo conflicto la concesión por parte de la Fundación Ford de recursos al Departamento de Sociología de la segunda de las instituciones mencionadas. Entre un sector del estudiantado creció la idea de que los resultados de las investigaciones llevadas a cabo con dichos subsidios eran utilizados por organismos de espionaje vinculados con el gobierno norteamericano y que, además, por lo general beneficiaban a las grandes empresas de ese origen. Esto constituyó un factor que dividió a la comunidad académica y ocupó gran parte de los debates y discusiones a mediados de la década del sesenta. Las fracturas, originadas en disidencias políticas, afectaron el funcionamiento de los consejos directivos y superiores de las universidades. Las sesiones se prolonga-

ban hasta altas horas de la madrugada y el tiempo se consumía en el debate sobre problemas relativos a la política nacional e internacional y sobre la posición de la Universidad ante éstos, relegando a un segundo plano los aspectos puramente académicos. La creciente radicalización política de vastos sectores de la juventud argentina durante los sesenta fue un factor que incidió en la división de la comunidad académica, en la disolución de las solidaridades que habían permitido iniciar el proceso de 1955 y en el debilitamiento del proyecto transformador.

Pero la Universidad era además atacada permanentemente por fuerzas identificadas con la derecha política. Durante los primeros años de la década del sesenta adquirió un peso cada vez mayor entre los miembros de las Fuerzas Armadas la llamada doctrina de la seguridad nacional. Esto los llevó a visualizar a la Universidad, y sobre todo a algunas facultades, como centros de *infiltración revolucionaria*, lo que propició incluso ataques armados de grupos de ultraderecha y violentos incidentes. En 1964, un alto funcionario militar sostenía, luego de un operativo antiguerrillero en la provincia de Salta, precisamente que la primera etapa de la guerra revolucionaria contemplaba la *infiltración* en las universidades. En junio de ese mismo año un comandante de la Gendarmería Nacional afirmó, refiriéndose al posible surgimiento de nuevos grupos guerrilleros, que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires era el centro de enlace y conexión de dichos grupos. Esta institución recibió durante todos estos años un embate permanente de la prensa que denunciaba la politización de los claustros y señalaba la presencia de grupos armados afines a las primeras expresiones insurreccionales que caracterizaron a la política argentina de fines de los sesenta y principios de los setenta. Desde organismos del Estado, como la Secretaría de Informaciones o el mismo Ejército, hubo presiones para evitar el nombramiento de algunos profesores o para lograr la expulsión de estudiantes sindicados por su afinidad con grupos revolucionarios. La campaña que se llevó a cabo desde la prensa contra el gobierno de Arturo Illia, y que culminó con el golpe de Estado que lo desalojó de la presidencia de la Nación, tenía en la situación universitaria uno de sus blancos preferidos. Pero esta campaña encontraba también aliados en las propias universidades, sobre todo en las facul-

tades de Derecho. El decano de dicha Facultad en la Universidad de Buenos Aires, designado luego por el gobierno *de facto* del general Onganía miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sumó a dicha campaña.

En el conflictivo contexto político de principios de los sesenta, la comunidad universitaria, particularmente la porteña, era mirada con desconfianza por distintos factores de poder político. En abril de 1965 se produjo la invasión de tropas de los Estados Unidos a la República Dominicana. El gobierno norteamericano solicitó a los países miembros de la OEA que colaboraran a través del envío de soldados. Esto provocó una serie de reacciones negativas de distintos sectores de la sociedad argentina. La comunidad universitaria se pronunció mayoritariamente contra el pedido norteamericano, lo que generó cierto grado de tensión con las Fuerzas Armadas. En octubre de 1965 se produjo un incidente durante un homenaje al ex presidente Julio A. Roca, cuyo monumento se encontraba frente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Desde el edificio de esta última se arrojaron piedras y monedas y se insultó a los asistentes al acto, entre los que se hallaban varios altos jefes militares.

El 28 de junio de 1966 un movimiento militar derrocó al gobierno constitucional encabezado por Arturo Illia. El golpe gozó de un importante consenso en diferentes sectores de la sociedad. Pero la Universidad de Buenos Aires, a través de su Consejo Superior, se pronunció institucionalmente en su contra. Durante julio las nuevas autoridades del gobierno nacional discutieron la estrategia por tomar frente a la Universidad. El 29 de julio fue sancionado el decreto ley 16.912, firmado por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. Este decreto suprimía el gobierno tripartito, disolvía los consejos superiores y obligaba a los rectores y decanos a transformarse en interventores sometidos a las autoridades del Ministerio de Educación. Los rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste y del Sur aceptaron transformarse en interventores. Los de las de Tucumán, Litoral, La Plata, Córdoba y Buenos Aires, en cambio, rechazaron la disposición. El de esta última abandonó definitivamente su cargo. En algunas facultades de la institución, como Filosofía y Letras, Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Exactas, fueron tomados los

edificios por grupos de estudiantes y docentes. La respuesta de las autoridades militares no se hizo esperar y aquéllos fueron desalojados violentamente. Los episodios más graves se vivieron en la Facultad de Ciencias Exactas. Allí la Guardia de Infantería ingresó al edificio de la institución y agredió físicamente a quienes permanecían en él. Más de ciento cincuenta personas, entre estudiantes y profesores, fueron detenidas y encarceladas, aunque se las liberó horas más tarde. Hechos similares se vivieron en las instalaciones de Filosofía y Letras y Arquitectura. El acontecimiento, un hito en la historia de la Universidad argentina, es conocido con el nombre de La Noche de los Bastones Largos.

La intervención y los episodios de violencia desataron una ola de renuncias en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Se calcula que, en esta última, 1.378 docentes abandonaron sus cargos. Pero las renuncias en la Universidad de Buenos Aires afectaron sobre todo a sus áreas más dinámicas y modernas. Particularmente grave fue el efecto de estos procesos en las facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, donde grupos completos de investigadores fueron desmantelados. Alrededor de trescientos investigadores y docentes optaron por el exilio y se incorporaron a universidades e institutos de investigación del exterior. La experiencia renovadora terminó herida de muerte con la intervención.

Sin embargo, ya por entonces su impulso estaba bastante debilitado, y algunos de sus principales protagonistas, como Gino Germani y José Luis Romero, se habían retirado tiempo antes rechazando la extrema faccionalización que signaba la vida académica. Finalmente, también aquí sería importante no proyectar el impacto de los sucesos que tuvieron lugar en la Universidad de Buenos Aires a otras casas de estudios. Las renuncias que signaron a la Universidad de la Capital Federal no se reprodujeron en otras instituciones también comprometidas con la renovación universitaria, como la de La Plata, donde incluso siguieron su carrera algunos de los renunciantes en Buenos Aires. La relación con los interventores fue aquí, en algunos casos, relativamente cordial y la mencionada faccionalización de la vida universitaria hizo sentir su impacto con fuerza recién a principios de la década de 1970.

## CAPÍTULO 9

### LA UNIVERSIDAD ENTRE LA POLITIZACIÓN, LA MASIFICACIÓN Y LAS DICTADURAS

#### LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

La intervención de 1966 cerró la etapa de renovación universitaria iniciada en 1955. De esta forma terminó uno de los ciclos más dinámicos e innovadores de la historia de la Universidad argentina. La política universitaria del nuevo gobierno afectó, particularmente, a aquellas instituciones en las que los proyectos renovadores tenían mayor peso. Como señalamos, un número relevante de docentes e investigadores abandonó la actividad académica y muchos de ellos partieron hacia un exilio que, en ciertos casos, fue definitivo. De todos modos, la reacción frente a la nueva coyuntura no fue uniforme entre los miembros más destacados de la comunidad universitaria, como se subrayó en el capítulo anterior. En algunas casas de estudios, como la de La Plata e incluso en las facultades más profesionalistas de la Universidad de Buenos Aires, núcleos relevantes de docentes e investigadores permanecieron en sus cargos. En algunos casos hubo una adaptación "pasiva" al nuevo estado de cosas existente en las universidades. En otros se trataba de resistir a la situación "desde adentro". Pero es indudable que varios de los más calificados equipos de investigación fueron desmantelados. La pérdida de investigadores impactó sobre todo en aquellas áreas donde el reemplazo de los grupos era más difícil ya que representaban el trabajo colectivo de muchos años. Particularmente graves fueron las consecuencias en las áreas más vinculadas con la investigación científica independiente, como en Cien-

Este trabajo aspira a llenar un vacío en la historiografía argentina contemporánea: la ausencia de una síntesis integral de la evolución de las instituciones universitarias y su papel en la política, la sociedad y la cultura del país. Para ello, aborda la historia de las universidades argentinas, desde la fundación de la de Córdoba, a principios del siglo XVII, hasta las reformas de la década de 1990. Su enfoque privilegia la inserción de esta historia en los procesos más amplios de evolución de la vida cultural y política rioplatense, luego argentina, procurando no limitarse a una historia centrada en las propias instituciones. Las universidades constituyeron el principal espacio de formación de los profesionales liberales, conformaron el lugar por excelencia de socialización de las élites políticas y se convirtieron también en una instancia central para el ascenso social de gran parte de los hijos de inmigrantes que llegaron a la Argentina desde fines del siglo XIX. Estas variables son objeto de análisis en el presente libro. Pero también el mismo explora el papel activo que los universitarios desempeñaron en los complejos procesos políticos y sociales de la Argentina contemporánea.

Pablo Buchbinder es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia. Se desempeña actualmente como profesor en las universidades de General Sarmiento y de Buenos Aires y es investigador del Conicet con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Emilio Ravignani" de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido becario del Servicio Exterior de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt. Es autor, entre otros trabajos, de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (1997) y Caudillos de pluma y hombres de acción (2004). Ha participado en numerosas obras colectivas y publicado artículos sobre la historia de la historiografía, de la vida universitaria y del Estado, en la Argentina de los siglos XIX y XX.

Impreso en la Argentina

ISBN 950-07-2677-7



9 789500 726771

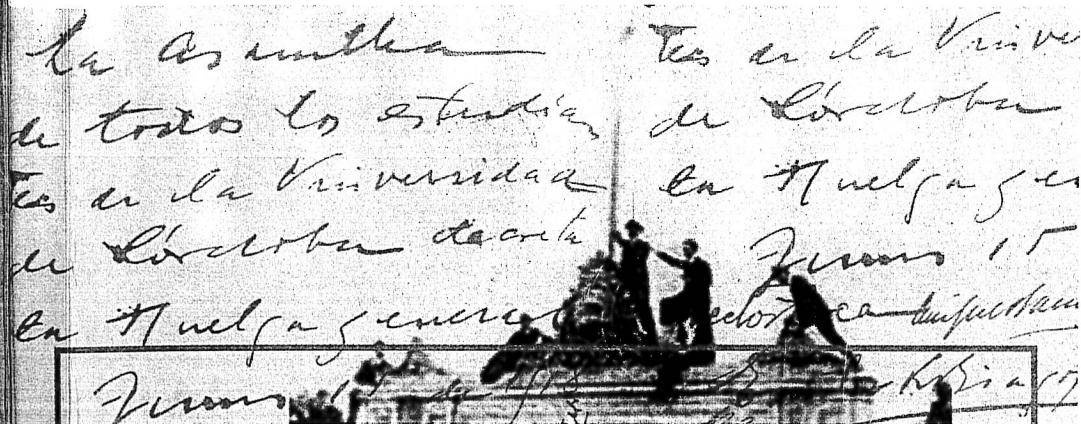
[www.edsdamerica.com.ar](http://www.edsdamerica.com.ar)

Pablo Buchbinder

HISTORIA DE LAS  
UNIVERSIDADES ARGENTINAS



Pablo Buchbinder



## HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS

Editorial Sudamericana

edificios por grupos de estudiantes y docentes. La respuesta de las autoridades militares no se hizo esperar y aquéllos fueron desalojados violentamente. Los episodios más graves se vivieron en la Facultad de Ciencias Exactas. Allí la Guardia de Infantería ingresó al edificio de la institución y agredió físicamente a quienes permanecían en él. Más de ciento cincuenta personas, entre estudiantes y profesores, fueron detenidas y encarceladas, aunque se las liberó horas más tarde. Hechos similares se vivieron en las instalaciones de Filosofía y Letras y Arquitectura. El acontecimiento, un hito en la historia de la Universidad argentina, es conocido con el nombre de La Noche de los Bastones Largos.

La intervención y los episodios de violencia desataron una ola de renuncias en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Se calcula que, en esta última, 1.378 docentes abandonaron sus cargos. Pero las renuncias en la Universidad de Buenos Aires afectaron sobre todo a sus áreas más dinámicas y modernas. Particularmente grave fue el efecto de estos procesos en las facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, donde grupos completos de investigadores fueron desmantelados. Alrededor de trescientos investigadores y docentes optaron por el exilio y se incorporaron a universidades e institutos de investigación del exterior. La experiencia renovadora terminó herida de muerte con la intervención.

Sin embargo, ya por entonces su impulso estaba bastante debilitado, y algunos de sus principales protagonistas, como Gino Germani y José Luis Romero, se habían retirado tiempo antes rechazando la extrema faccionalización que signaba la vida académica. Finalmente, también aquí sería importante no proyectar el impacto de los sucesos que tuvieron lugar en la Universidad de Buenos Aires a otras casas de estudios. Las renuncias que signaron a la Universidad de la Capital Federal no se reprodujeron en otras instituciones también comprometidas con la renovación universitaria, como la de La Plata, donde incluso siguieron su carrera algunos de los renunciantes en Buenos Aires. La relación con los interventores fue aquí, en algunos casos, relativamente cordial y la mencionada faccionalización de la vida universitaria hizo sentir su impacto con fuerza recién a principios de la década de 1970.

## CAPÍTULO 9

### LA UNIVERSIDAD ENTRE LA POLITIZACIÓN, LA MASIFICACIÓN Y LAS DICTADURAS

#### LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

La intervención de 1966 cerró la etapa de renovación universitaria iniciada en 1955. De esta forma terminó uno de los ciclos más dinámicos e innovadores de la historia de la Universidad argentina. La política universitaria del nuevo gobierno afectó, particularmente, a aquellas instituciones en las que los proyectos renovadores tenían mayor peso. Como señalamos, un número relevante de docentes e investigadores abandonó la actividad académica y muchos de ellos partieron hacia un exilio que, en ciertos casos, fue definitivo. De todos modos, la reacción frente a la nueva coyuntura no fue uniforme entre los miembros más destacados de la comunidad universitaria, como se subrayó en el capítulo anterior. En algunas casas de estudios, como la de La Plata e incluso en las facultades más profesionalistas de la Universidad de Buenos Aires, núcleos relevantes de docentes e investigadores permanecieron en sus cargos. En algunos casos hubo una adaptación "pasiva" al nuevo estado de cosas existente en las universidades. En otros se trataba de resistir a la situación "desde adentro". Pero es indudable que varios de los más calificados equipos de investigación fueron desmantelados. La pérdida de investigadores impactó sobre todo en aquellas áreas donde el reemplazo de los grupos era más difícil ya que representaban el trabajo colectivo de muchos años. Particularmente graves fueron las consecuencias en las áreas más vinculadas con la investigación científica independiente, como en Cien-

cias Exactas y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchos de los renunciantes adoptaron esta medida como señal de protesta y actitud ética y procurando también llevar una señal al conjunto de la sociedad. Quienes pensaban que la decisión podía provocar el cese de la intervención y la modificación de la política universitaria se vieron rápidamente decepcionados.

La dictadura presidida por el general Juan Carlos Onganía impuso sobre los claustros universitarios su sello autoritario. Procuró sujetar las universidades al poder político, construyó la libertad académica y limitó la autonomía. No obstante, era evidente hacia finales de la década, y hasta reconocido por los mismos funcionarios, que la intervención del 66 no había logrado alcanzar ninguno de sus principales objetivos. El régimen fracasó en su intento de reconfigurar la Universidad y llevar a cabo un proceso de normalización. En 1967 se promulgó una nueva ley para las casas de estudios, la 17.245. A través de ella se trató de construir un régimen universitario basado en el gobierno de los profesores. Pero, a pesar de que el gobierno militar proclamaba insistente mente la necesidad de normalizar las instituciones, los avances en ese sentido fueron escasos. Las autoridades trataron de cooptar a un sector del profesorado y construir una base genuina de apoyo en las casas de estudios, pero no tuvieron éxito. En Buenos Aires, el rector designado por el Poder Ejecutivo, Raúl Devoto, mantuvo un conflicto permanente con los decanos de las facultades. Por otro lado, los concursos que trataron de implementar y que debían permitir el proceso de normalización fueron fuertemente cuestionados.

Además, el régimen de Onganía no logró limitar la politización creciente de la vida académica. Éste constituía uno de sus objetivos centrales y había motivado la intervención de julio de 1966. Desde ese entonces las fuerzas policiales se instalaron en las facultades, sobre todo en Buenos Aires. Pero la resistencia de los estudiantes fue aumentando progresivamente y se inició con el mismo rechazo a las intervenciones. Los estudiantes se movilizaban cuestionando las nuevas leyes y estatutos que las autoridades de la llamada Revolución Argentina pretendían imponer. Protestaban contra la presencia policial en las casas de estudios e impugnaban las medidas *limitacionistas* que, a través de nuevas

condiciones de regularidad o mecanismos de ingreso, se pretendían imponer. El aumento en los costos de los comedores universitarios impulsó las movilizaciones de 1967 y 1968 en universidades del interior, como las de Córdoba y del Nordeste. Los enfrentamientos entre la Policía y los estudiantes adquirieron ribetes cada vez más violentos durante toda la segunda mitad de la década de 1960. Las manifestaciones terminaban con disturbios en los que numerosos grupos de estudiantes eran detenidos y encarcelados. En septiembre de 1966, durante una manifestación en Córdoba, Santiago Pampillón, estudiante de Ingeniería Aeronáutica, fue herido en un enfrentamiento con la Policía y falleció días más tarde. El 15 de mayo de 1969 murió en Corrientes el estudiante de medicina Juan José Cabral en el transcurso de una protesta contra el aumento de los aranceles del comedor. Como consecuencia de este hecho una ola de protestas se extendió por las principales ciudades universitarias de la Argentina y en Rosario se produjeron nuevos incidentes con estudiantes que culminaron con el asesinato de un adolescente por parte de la Policía. Días después los estudiantes participaron activamente en los acontecimientos conocidos como el *Cordobazo* que provocó, tiempo más tarde, la caída de Onganía. A fines de 1971, en el transcurso de una asamblea estudiantil, fue muerta Silvia Filler, estudiante de arquitectura de la Universidad Provincial de Mar del Plata. En junio de 1972, como consecuencia de un golpe provocado por una granada, murió el estudiante salteño Víctor Villalba en la ciudad de Tucumán. Casos de estas características eran habituales durante todos aquellos años y revelaban la instalación de un clima de creciente violencia política en la Argentina, circunstancia que se expresaba también en la vida universitaria.

Las organizaciones gremiales estudiantiles se fortalecieron en un marco de creciente politización. Los universitarios participaron en forma entusiasta en los movimientos que propiciaban cambios profundos en las estructuras de poder de la Argentina y que cobraron inusitado vigor a finales de los sesenta y principios de los setenta. El compromiso político y la militancia se convirtieron en elementos distintivos de las generaciones que accedían a la enseñanza superior durante aquellos años. Una parte relevante de los

jóvenes universitarios también compartía la idea de que el cambio debía construirse sobre la vía revolucionaria. La comunidad estudiantil identificó así rápidamente a sus adversarios políticos. Eran las fuerzas del Estado, la Policía, el Ejército y, sobre todo, el imperialismo. El orden universitario era ahora cuestionado no sólo ni tanto por sus falencias académicas sino por no ser el adecuado en función de las características del país y las necesidades de sus clases populares. La institución era acusada de ser funcional a los sectores dominantes y por esa razón era necesario transformarla de manera radical. De este modo, las casas de estudios se convirtieron, a finales de los años sesenta, en el escenario para la elaboración de un nuevo proyecto de país y de enseñanza superior congruente con el primero. Incluso para sectores provenientes del humanismo de raíz católica, la Universidad constituyía una "institución del régimen" que promovía "una mentalidad acorde con los intereses de las clases dominantes". De acuerdo con estos criterios era necesario que las casas de estudios dejaren de proporcionar ideólogos y técnicos a un sistema que legalizaba la explotación del hombre por el hombre.

En la reconstrucción de este clima de creciente insatisfacción en relación con el papel de las universidades y de hostilidad hacia el sistema político oficial, en términos generales, hay también elementos de la propia vida universitaria que deben ser observados. En primer término, una vez más, los derivados de las propias consecuencias de la masificación de la enseñanza superior. Entre 1960 y 1972 la matrícula universitaria nacional pasó de ciento cincuenta y nueve mil a trescientos treinta y tres mil estudiantes. Las instituciones tuvieron notables dificultades para absorber este crecimiento ya que no aumentaron en proporción similar sus recursos presupuestarios. Esto se tradujo en un deterioro importante de las condiciones materiales en las que se llevaban a cabo los estudios. La reivindicación por mayor presupuesto, en este contexto, siguió siendo un factor central de la movilización estudiantil de los sesenta. Paralelamente comenzó una devaluación de los títulos universitarios. Éstos dejaron, en muchos casos, de garantizar un acceso exitoso al mercado de trabajo y de asegurar un rápido ascenso social, poniendo en cuestión nociones profundamente arraigadas en el imaginario popu-

lar argentino. El aumento en el número de universitarios y, sobre todo, las recurrentes crisis económicas en las que se sumió el país desde fines de los cuarenta, llevaron a una nueva evaluación de la situación universitaria. Para muchos miembros de la comunidad académica, revertir esta situación exigía una vez más modificar sustancialmente las condiciones estructurales, tanto económicas como sociales, que la hacían posible.

Las opciones de gran parte de los universitarios, de un sector de los docentes y, sobre todo, de los estudiantes fueron; en este contexto fuertemente radicalizado, diversas, pero privilegiaban nuevamente el compromiso revolucionario. La situación universitaria dependía, en última instancia, de la estructura social y los males del país radicaban en su situación dependiente. Revertir la situación universitaria requería previamente la transformación de esa estructura dependiente de una manera sustancial y de raíz. El proceso de politización incidía así en las formas de entender la relación entre la Universidad y la realidad social y política. La Universidad debía integrarse en el proceso de liberación y reconstrucción nacional y la autonomía de la institución debía fundarse en la autonomía cultural del pueblo.

El panorama gremial y político estudiantil se fue volviendo, durante estos meses, más complejo e incorporó nuevos actores. La politización del estudiantado se acentuó, pero el movimiento estudiantil adquirió nuevas tonalidades políticas. Un sector minoritario optó por el marxismo tradicional. Por otro lado, prolongando una tendencia que venía de finales de los años cincuenta, el peso de los grupos de raigambre católica se fue fortaleciendo, sobre todo en las universidades del interior. Desde mediados de los sesenta el movimiento estudiantil reformista venía cediendo posiciones ante agrupaciones católicas y nacionalistas de diferente signo. Durante aquellos años los universitarios católicos eran ya hegemónicos en Córdoba, en Santa Fe y en la Universidad Nacional del Nordeste. Ya en 1962 los reformistas habían perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Universitaria de Buenos Aires. Esto posibilitó la elección ese mismo año del economista Julio Olivera y, en 1965, del ingeniero, vinculado con el movimiento humanista, Hilario Fernández Long, como rectores de la Universidad de Buenos Aires.

Un grupo importante de los universitarios, particularmente en el interior del país, se fue inscribiendo así en las diferentes expresiones de los movimientos cristianos. Surgieron en las provincias ateneos universitarios de clara raigambre católica que experimentaron el impacto de la predica y los cambios provocados en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y las conferencias de Medellín y Puebla. Los grupos juveniles católicos insistían en la necesidad de fortalecer el compromiso social de los universitarios y su opción por los pobres. Muchos de ellos realizaban, simultáneamente con sus estudios, tareas de asistencia social en regiones o barrios marginales de las grandes urbes. En las universidades del interior, y sobre todo en las ciudades en las que residían grandes contingentes de estudiantes, como Córdoba o La Plata, la militancia social y política era favorecida por la existencia de un conjunto de ámbitos de sociabilidad específicamente estudiantil como los comedores o las residencias universitarias. Estas casas, muchas de ellas pertenecientes a la Iglesia o a órdenes religiosas, se administraban de acuerdo con una estructura democrática y participativa. En ellas debía proporcionarse también formación cristiana a los estudiantes y se organizaban charlas y cursos. Estas residencias fueron afectadas por el proceso de radicalización de sectores de la propia Iglesia católica y, fundamentalmente, por el desarrollo del Movimiento de los Sacerdotes por el Tercer Mundo. En este contexto se fortaleció en Córdoba el llamado movimiento integralista, que expresaba a un sector importante del estudiantado católico y que se diferenciaba además del catolicismo más conservador. Las agrupaciones de filiación católica jugaron un rol central en los acontecimientos que culminaron con la muerte de Santiago Pampillón y también en los sucesos del Cordobazo. Estos últimos brindaron una muestra muy clara de los efectos políticos que era capaz de provocar la articulación del activismo obrero con el estudiantil.

Por otro lado, entre gran parte de la intelectualidad argentina tuvo lugar en aquellos años una revisión del papel del movimiento liderado por Juan Domingo Perón. Muchos miembros del movimiento integralista se sumaron tiempo más tarde al peronismo e incluso aportaron algunos de sus cuadros a las organizaciones armadas de ese signo político. A fines de los sesenta ya aparecieron en la mayoría de las universidades agrupaciones políticas de estu-

diantes y profesores que se reconocían y definían abiertamente como peronistas. De esta forma los acontecimientos de 1966 en las universidades nacionales pasaron a convertirse en el comienzo, en realidad, de un proceso en el que la hegemonía de las antiguas tradiciones reformistas fue reemplazada por otra vinculada directamente con el peronismo. En este contexto aparecieron, sobre todo en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, las llamadas cátedras nacionales, que llevaban a cabo fuertes cuestionamientos a la forma en la que se habían desarrollado las ciencias sociales en el período reformista abierto en 1955. Fueron sobre todo docentes de la carrera de Sociología, designados por el mismo rector de la Universidad de Buenos Aires, los que organizaron dichas cátedras. Las cátedras nacionales reconocen así su origen en la decisión de reemplazar a los docentes *científicistas* renunciantes en 1966 con jóvenes sociólogos, muchos de ellos vinculados con el peronismo o con vertientes conservadoras del catolicismo. Este movimiento alcanzó su auge entre 1967 y 1970. Se trataba de incorporar nuevos principios al sistema de enseñanza entonces vigente. Se cuestionaba desde aquí el discurso *científicista* de la sociología de principios de los sesenta y se procuraba crear nuevos enunciados y categorías teóricas que permitiesen generar propuestas no sólo para comprender sino, sobre todo, para transformar la realidad nacional.

Estas cátedras se constituyeron así a partir de una visión crítica de las ciencias sociales desarrollada durante los primeros sesenta, pero también a partir de una polémica con las orientaciones más cercanas al marxismo europeo cuestionadas por subestimar la importancia de las identidades culturales y tradiciones nacionales. Estos sociólogos situaban, además, en primer plano, su vinculación con el *movimiento nacional*. El conocimiento social debía promover una mejor comprensión de la realidad local y debía insertarse en el proyecto de *liberación nacional*. Las nuevas ciencias sociales tenían que caracterizarse por su grado de compromiso con los problemas nacionales pero también era necesario que se comprometiesen sus cultores en los procesos de transformación social que se avecinaban en la Argentina. Los responsables de estas cátedras buscaron fundamentar teóricamente sus ideas en el análisis de la historia latinoamericana. Contribuyeron, finalmente, también de manera decisiva al proceso de transformación político-ideológico.

co de los años sesenta y a la construcción de una nueva cultura académica signada por su compromiso con el movimiento antidi-tatorial primero y con el peronismo después.

Las agrupaciones estudiantiles dejaron de definirse por entonces en función de su adhesión a los principios de la Reforma o a partir de una identidad que remitía a principios generales como el humanismo, para hacerlo en función de su vínculo con una definida agrupación política. Los últimos años de la década del sesenta asistieron a un proceso de consolidación y de fortalecimiento de las agrupaciones juveniles y estudiantiles que remitían directamente a la relación con los partidos políticos. Entre gran parte de la juventud de origen católico, como ya señalamos, el compromiso con los desposeídos se articuló estrechamente con la adhesión a los principios políticos enarbolados por el peronismo. En el ámbito de los estudiantes secundarios experimentaron un notable crecimiento la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), vinculada a la agrupación Montoneros, la Juventud Radical Revolucionaria y la Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria. La Juventud Universitaria Peronista, la agrupación Franja Morada, vinculada directamente con la Unión Cívica Radical, y las distintas vertientes universitarias de los partidos de izquierda pasaron a dominar el panorama político del movimiento estudiantil.

Finalmente, la violencia apareció como una opción más en el contexto de finales de los sesenta. Se llegó entonces a legitimar su ejercicio como forma de resolución de los conflictos políticos. La fascinación por la violencia constituyó un elemento central de la cultura política de muchos grupos juveniles en la América latina de los años sesenta. El ejemplo cubano, la falta de canales institucionales de participación en la Argentina provocada por los golpes militares, los ejemplos de las rebeliones estudiantiles en Europa y Estados Unidos, acentuaron la radicalización de gran parte de los universitarios. Las organizaciones guerrilleras contaron con nutridos contingentes de estudiantes y profesionales entre sus militantes y algunas facultades conformaron también ámbitos de reclutamiento para dichas agrupaciones. Como ya señalamos, para los militantes, la Universidad debía constituir uno de los baluartes del proceso de transformación política y social que se avécinaba. Las

universidades, para gran parte de la dirigencia política que asumiría el poder con el peronismo en 1973, debían conformar el centro de una auténtica revolución cultural.

La movilización de los universitarios se acentuó al comenzar la década del setenta. Los grupos vinculados con la izquierda peronista, de gran peso entre cierto sector del profesorado y sobre todo entre los estudiantes, impusieron entonces los temas de la agenda académica. A partir del cuestionamiento al orden universitario se conformaron cursos y cátedras paralelas a las oficiales y se presionó para lograr la remoción de profesores y autoridades. Los estudiantes se opusieron con fuerza a las prácticas limitacionistas que el régimen de Onganía trató de imponer en las universidades a partir del ya mencionado manejo de las correlatividades y los exámenes de ingreso. Muchas de estas prácticas, como ya señalamos, fueron las que dieron origen a las huelgas y los disturbios en las casas de estudios. En este contexto, y para revertir los efectos de la politización y la movilización estudiantiles, se implementó a principios de los setenta un proyecto de diversificación del sistema universitario.

#### LAS NUEVAS UNIVERSIDADES Y LOS PROYECTOS DE DIVERSIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

La diversificación del sistema universitario constituyó uno de los principales instrumentos con el que el régimen militar procuró frenar los efectos políticos de la movilización estudiantil. Durante los últimos años de la década de 1960 y los primeros de la de 1970 se llevó a cabo un ambicioso plan de transformación del conjunto del sistema que culminó con la creación de doce nuevas universidades en el ámbito público, tanto nacional como provincial. Esto posibilitó la expansión de la enseñanza universitaria en el interior del país. En sus orígenes este proyecto tenía como objetivo principal descentralizar el sistema y crear instituciones más pequeñas. Las motivaciones más profundas que se encontraban detrás de este plan reconocían, seguramente, orígenes diversos. Por un lado, estaban vinculadas con una lectura particular de la experiencia renovadora del período 1955-1966. La incompatibilidad entre la Universidad de masas y la Univer-

sidad científica conformaba, en este sentido, uno de los factores que impulsaban la descentralización del sistema. Pero sin duda también la preocupación por el impacto político de la concentración de grandes masas de estudiantes fue un factor que dio impulso a la creación de nuevas universidades. La experiencia de los incidentes con estudiantes que, como acabamos de destacar, se producían cotidianamente en Buenos Aires y en las grandes capitales de provincia, sumada al impacto causado por las rebeliones juveniles que tuvieron su epicentro en 1968 en París, impulsaron la puesta en marcha de este proyecto, que se basó en el programa diseñado por Alberto Taquini, por entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

Es preciso tener en cuenta aquí, una vez más, que el gobierno de Onganía se había propuesto despolitizar a las universidades y redimensionarlas incentivando mecanismos selectivos de admisión. Episodios como el Cordobazo de mayo de 1969, en el que las agrupaciones estudiantiles tuvieron una activa participación, mostraron el fracaso de estos planes. En este contexto surgió el plan Taquini. Se trataba entonces de un proyecto que procuraba compatibilizar el proceso de expansión de la matrícula universitaria, la conformación de una Universidad científica, las necesidades derivadas del desarrollo regional y la despolitización. En este mismo sentido, este plan procuraba incidir en la distribución geográfica del estudiantado, concentrado en las grandes ciudades, y también en la de la matrícula estimulando el desarrollo de las ciencias exactas y la tecnología, que agrupaban, por entonces, a sólo un 15% delumnado universitario.

Debe tenerse presente aquí que la ley que permitió en 1958 la creación de las universidades privadas había posibilitado además la conformación de universidades provinciales. Se crearon así en 1959 la Universidad Provincial de La Pampa, en 1962 la de Mar del Plata, en 1964 la de Neuquén, en 1965 la de San Juan y en 1968 la de Tandil, entre otras. Por otro lado, en muchos centros del interior del país eran diferentes organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, agrupaciones de estudiantes secundarios las que presionaban por la conformación de nuevas universidades que les posibilitasen seguir sus estudios en su lugar de residencia. Este proyecto estaba fundado, por otra parte, en un análisis cuidadoso

no sólo de la composición de la matrícula universitaria, sino también de su origen. La idea era crear universidades cercanas a centros urbanos de mediana dimensión, pero en cierta medida aisladas de éstos y organizadas sobre campus al estilo norteamericano. Se preveía que las nuevas casas de estudios contaríaan con importantes recursos y conservarían un perfil de excelencia desde el punto de vista académico y científico. Además, no debían superar los veinte mil estudiantes. Estos planes contemplaban también que se organizarían sobre la base de departamentos, no incluirían, en lo posible, a las carreras tradicionales y otorgarían títulos intermedios.

En el proyecto original se preveía la creación de entre cuatro a cinco universidades, entre ellas las de Luján, Lomas de Zamora, Río Cuarto y Salta. Pero una vez puestos en marcha los planes de fundación, se inició un movimiento en distintas regiones del país para crear nuevas casas de estudios. En diferentes localidades se generaron iniciativas impulsadas por asociaciones locales que reclamaron la conformación de universidades. Posteriormente, estas mismas organizaciones, particularmente las asociaciones profesionales, presionaron para generar nuevas carreras que posibilitasen a sus miembros ocupar posiciones en las instituciones recientemente creadas. Esto hizo que, en muchos casos, las universidades fueran abandonando su perfil original y desarrollaran estructuras dominadas por carreras tradicionales y facultades profesionalizadas al estilo de las casas de estudios más antiguas. Por otro lado, tampoco estas iniciativas resolvieron el problema de la politización ya que muchas de estas casas de estudios terminaron conducidas, casi desde su fundación, por los grupos que participaban de los mismos procesos de radicalización política y social de fines de los sesenta.

De todos modos, al finalizar el período militar, el mapa universitario de la Argentina se había modificado en forma sustancial por la aparición de un conjunto de nuevas instituciones. Ya en 1968 se había creado la Universidad Nacional de Rosario a partir de una serie de organismos pertenecientes a la Universidad Nacional del Litoral existentes en dicha ciudad. En 1971 fueron creadas las universidades del Comahue y Río Cuarto, en 1972 las de Catamarca, Lomas de Zamora, Luján y Salta. En 1973 se fundaron las universidades nacionales de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, de la

Patagonia, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. En 1974 se creó la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con sede en Tandil, y en 1975 la Universidad Nacional de Mar del Plata. En algunos casos, estas universidades absorbieron institutos provinciales preexistentes como en las de Comahue, Jujuy, Mar del Plata y Centro de la Provincia de Buenos Aires. Paralelamente se produjo durante estos años una notable expansión del sistema terciario no universitario. Casi doscientos institutos superiores de profesorado fueron creados entre 1970 y 1972.

### LA UNIVERSIDAD DEL 73

La dictadura, jaqueada por la movilización popular y la presión de las organizaciones armadas, debió abandonar el poder en 1973 y el breve período democrático que se inició ese año estuvo acompañado por un agitado proceso de debate y movilización universitarios. La Juventud Universitaria Peronista, que expresaba a los sectores más radicalizados de ese movimiento político, llegó a ocupar la gobernación de varias provincias, algunos ministerios y gozó de una influencia decisiva en la conducción de las universidades más importantes. Poco después de asumir la presidencia de la Nación, Héctor J. Cámpora decretó la intervención a las universidades nacionales, que ya unos días antes habían sido tomadas por grupos vinculados con la Juventud Peronista. En el decreto de intervención se señalaba que la Universidad argentina atravesaba una crisis que reflejaba "en el plano cultural, la dependencia económica y política". La liberación nacional exigía entonces "poner definitivamente a las universidades nacionales al servicio del pueblo". La mayor parte de los nuevos delegados interventores en las universidades nacionales era afín a los sectores de la tendencia revolucionaria de la Juventud Peronista y de la agrupación Montoneros. En la de Buenos Aires, rebautizada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, fue designado el historiador Rodolfo Puiggrós; en la de La Plata, Rodolfo Agoglia, quien había sido decano de su Facultad de Humanidades durante el primer peronismo; y en la Universidad Nacional del Sur, Víctor Bennano, antiguo militante de la CGU. A fines de ese año, la Juventud Universitaria Peronista ganó las elecciones en casi todos los

centros estudiantiles del país. En marzo de 1974 se sancionó, finalmente, una nueva Ley Universitaria que procuraba compatibilizar las ideas de las agrupaciones peronistas hegemónicas en el ámbito académico con elementos de la tradición reformista como la autonomía. Pero, en definitiva, la ley reflejaba algunos de los principios más importantes madurados por los intelectuales cercanos al peronismo desde finales de los sesenta. Explícitamente se señalaba que la Universidad estaba obligada a hacer "aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional". En relación con la orientación que debían mantener la enseñanza y la investigación se destacaba que "será nacional y tendiente a establecer la independencia tecnológica y económica". La Universidad debía también contribuir a la elaboración de la cultura "en particular la de carácter autóctono, nacional y popular". En esta misma disposición se establecía la incompatibilidad de la docencia universitaria con "el desempeño de funciones jerárquicas o no al servicio de empresas multinacionales o extranjeras".

Los sectores que en el interior se hicieron cargo de las universidades compartían también los principios revolucionarios del gobierno encabezado por Héctor J. Cámpora. Muchos sacerdotes que adherían a los enunciados de las conferencias de Puebla y Medellín y que incluso estaban vinculados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo ocuparon cargos directivos en las casas de estudios, tales los casos de Justino O'Farrel, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, o el padre Juan Moreno, en el rectorado de la de Jujuy. Algunos de ellos eran también activos militantes de la izquierda peronista. La Universidad fue visualizada, una vez más, por un sector relevante de la comunidad académica como uno de los baluartes del proceso revolucionario que se avecinaba. Se intentó entonces llevar a cabo una transformación de sus estructuras administrativas y curriculares.

Para gran parte de la nueva dirigencia universitaria, la hegemonía de las clases dominantes se ejercía a través de los contenidos de la enseñanza y de las formas de transmisión. Se impugnaron así los planes de estudios y las formas de evaluación. Se instauraron los exámenes grupales y los planes de estudios y los programas de las materias se adaptaron al nuevo clima revolucionario que se vivía en las instituciones académicas. Se avanzó en la modificación

de la estructura de enseñanza procurando transformar la tradicional modalidad de clases teóricas y prácticas sustituyéndola por "reuniones y encuentros" y se intentó avanzar en la supresión de las diferencias jerárquicas de los miembros del cuerpo docente. Surgieron en las universidades nuevos organismos e institutos para cumplir con los objetivos fijados por la política del gobierno. En varias casas de estudios fueron creados departamentos de planificación. En las universidades de La Plata y Buenos Aires se crearon materias dedicadas al estudio de la realidad social argentina e institutos abocados a la investigación de la problemática del Tercer Mundo.

Durante los primeros meses de 1973 fueron expulsados los docentes más abiertamente identificados con la dictadura de Onganía y, en una polémica disposición, todos aquellos que, además de ejercer su docencia en la Universidad, trabajaban como empleados de empresas multinacionales. Por otra parte, los universitarios que conducían este proceso procuraron llevar a cabo sus ideas sobre la relación entre la Universidad y la sociedad mediante una activa política de extensión que recuperaba aspectos de experiencias previas, pero introducía también elementos novedosos. Los estudiantes de Arquitectura encararon amplios programas de construcción de viviendas populares, mientras que los de Derecho instalaron consultorios de atención jurídica gratuita en barriadas obreras. La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires armó un laboratorio de medicamentos para apoyar el desarrollo de la industria farmacéutica nacional. Finalmente, un pilar fundamental de la nueva política universitaria fue la supresión de las trabas al acceso a la Universidad simbolizadas en el examen de ingreso. Volvió entonces a producirse un acelerado crecimiento de la matrícula universitaria. Mientras en 1973 ésta abarcaba a 377.000 personas, en 1975 ya superaba el medio millón. Solamente la Universidad de Buenos Aires recibió, en 1974, cuarenta mil nuevos estudiantes.

La Universidad del 73 estuvo fuertemente signada por un clima de efervescencia política y por el peso de las utopías de los sesenta. El proyecto universitario de aquellos años estaba fundamentado en la idea de que era posible imaginar un futuro diferente. Contaba además, en sus inicios, con un apoyo indu-

dable en gran parte de la comunidad académica. Pero, simultáneamente, estaba sostenido en una visión dicotómica, simplista y hasta ingenua de la realidad. No existía detrás de este proyecto una evaluación adecuada de las estructuras de poder, ni siquiera del vigente en las propias instituciones académicas. Muchos universitarios se limitaban a los aspectos declarativos y esto se traducía en una provocación sistemática que alejaba a diferentes sectores de las clases medias de la Universidad pública. Además, el proyecto del 73 se debilitó también por las propias divisiones de los grupos dirigentes peronistas. A finales de ese año se produjo una fractura que dejó enfrentada a la conducción de Montoneros, hegemónica en la mayoría de las grandes universidades, con una agrupación denominada Lealtad, críticos de los primeros, que se aproximaron, además, a los sectores de la ortodoxia peronista. En más de una oportunidad, ambos dirimieron sus diferencias en enfrentamientos armados dentro de los recintos universitarios. No faltaron, además, los oportunistas que abandonaron rápidamente el proyecto cuando éste comenzó a desintegrarse. Pero también es preciso señalar que la experiencia universitaria de aquellos años sufrió el ataque permanente de la derecha política y, sobre todo, de la prensa más conservadora, que se convirtió en vocera de muchos de los desplazados por las intervenciones. A éstos se sumó la derecha peronista.

A partir de julio de 1974 el giro conservador y autoritario del gobierno conducido por la viuda del general Perón forzó cambios sustanciales en los cuerpos directivos de las casas de estudios. Pero en algunas de ellas aquéllos se habían producido meses antes. Rodolfo Puiggrós había sido obligado a renunciar a su cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires sólo cuatro meses después de asumir. Lo reemplazaron por un breve período Vicente Solano Lima y después Raúl Laguzzi. Este último debió afrontar un atentado que costó la vida de su hijo de un año de edad. Varias de las autoridades universitarias de distintas regiones del país fueron amenazadas y sufrieron, incluso, intentos de secuestro. El 14 de agosto de 1974, Oscar Ivanissevich, identificado con los sectores más conservadores del peronismo, asumió el Ministerio de Educación y dispuso, pocos días más tarde, la intervención de varias

universidades. Como señalaría Emilio Mignone, en ese entonces rector de la Universidad Nacional de Luján, estos interventores eran "personajes desconocidos, mediocres y sobre todo profundamente reaccionarios". Algunos de ellos asumieron sus cargos acompañados por grupos paramilitares y parapoliciales. En la Universidad de Buenos Aires provenían de la extrema derecha peronista, como Alberto Ottalagano, que se ufanaba de ser un admirador del fascismo. En las universidades del Sur y del Comahue fue designado Remus Tetu, un exiliado rumano que había militado en la organización filofascista Guardia de Hierro de ese país. Los rectores identificados con las tendencias más revolucionarias del peronismo cayeron, en muchos casos, por la falta de sostén político. Algunos de ellos debieron exiliarse por las amenazas que recibieron de la tristemente célebre Triple A o de otras organizaciones parapoliciales. El pase a la clandestinidad, por lo general forzado, de gran parte de los militantes que habían sostenido el proyecto universitario de marzo de 1973 llevó a un nuevo vaciamiento de la Universidad. Algunos de ellos abandonaron en forma definitiva la militancia. Mientras tanto, los grupos universitarios vinculados con las agrupaciones armadas trataron de extraer medios y recursos de las casas de estudios para sostener a sus propias organizaciones, lo que incentivó una nueva ola de violencia en las instituciones.

La violencia política que se apoderó entonces de la Argentina encontró uno de sus principales escenarios en la Universidad. La gran mayoría de los locales de las facultades permaneció cerrada por decisión de los interventores durante varios meses. Casi todos los centros de estudiantes experimentaron durante esos días la clausura y hasta la destrucción física de sus instalaciones. Cuando las universidades reabrieron, un extenso aparato represivo estaba sólidamente instalado. En la mayor parte de las instituciones académicas de la Universidad de Buenos Aires se nombraron *celadores*. Por lo general se trataba de policías o integrantes de las fuerzas armadas que concurrían a las clases y que tenían por tarea principal vigilar la actividad política de los estudiantes. Muchos alumnos fueron denunciados por su militancia y obligados a abandonar sus carreras. Por ley se les prohibió luego realizar tareas de proselitismo en las facultades. Las elecciones estudiantiles de diciembre de 1975 reflejaron el temor de los estudiantes, que participaron

sólo en un porcentaje de un 20% en dichos comicios. Estas elecciones marcaron el desplazamiento de las agrupaciones estudiantiles vinculadas con el peronismo revolucionario ya que fueron ganadas por sectores afines a la Unión Cívica Radical, que asumió el control de la Federación Universitaria Argentina.

Durante todo 1975 se llevaron a cabo cesantías masivas de docentes y expulsiones de alumnos. Delegados estudiantiles y prestigiosos docentes fueron secuestrados, en algunos casos en los mismos recintos de las casas de estudios. Muchos aparecieron después asesinados. Un grupo comando conocido con el nombre de Libertadores de América secuestró a principios de diciembre de 1975 a nueve estudiantes de la Universidad de Córdoba, que aparecieron días más tarde asesinados. Poco tiempo después fueron tres estudiantes de la Universidad Nacional del Sur los que corrieron el mismo destino. Suerte similar experimentaron varios destacados profesores universitarios. Rodolfo Ortega Peña, abogado y profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue asesinado el 31 de julio de 1974 en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El 17 de septiembre de ese mismo año fue muerto Silvio Frondizi. Abogado y defensor de presos políticos como Ortega Peña, Frondizi era profesor de Sociología Política en la misma Facultad. En el atentado que le costó la vida fue asesinado su yerno, Luis Angel Mendiburu, docente de la Universidad Tecnológica Nacional. En un aula de esa institución fueron velados los restos de ambos. En enero de 1976 fue asesinado Guillermo Savloff, profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Los casos que afectarían a distintos miembros de la comunidad universitaria se multiplicarían a partir de marzo de 1976.

#### LA DICTADURA TERRORISTA

La represión en la Universidad iniciada en 1974 se acentuó en marzo de 1976, cuando un nuevo régimen dictatorial procuró acallar los reclamos populares y aniquilar a todos los movimientos de protesta social a través de una feroz política represiva. Una parte importante de las víctimas de la dictadura terrorista eran

miembros de la comunidad universitaria. Según el informe elevado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), un 21% de los desaparecidos eran estudiantes. Algunos de ellos fueron secuestrados en el mismo ámbito en el que estudiaban. La acción represiva ilegal se ejerció como en otros ámbitos sin límites ni controles. La gran mayoría de los estudiantes secuestrados fue asesinada en centros clandestinos de detención. Lo mismo ocurrió con algunas de las autoridades universitarias designadas en los primeros tiempos del tercer peronismo, como el ex rector normalizador de la Universidad Nacional de San Luis, el filósofo Mauricio López, secuestrado en enero de 1977 y asesinado mientras era sometido a torturas.

Pocos días después del golpe militar se dictó una nueva ley, la 21.276, que dispuso que las universidades quedasen bajo el control del Poder Ejecutivo. Se suprimieron los órganos de gobierno colegiados y se prohibieron las actividades gremiales y políticas explícitamente en el ámbito universitario. Para la inmensa mayoría de los dirigentes del nuevo régimen dictatorial, las universidades habían conformado uno de los principales organismos de "adoctrinamiento de los subversivos". Las casas de estudios fueron distribuidas entre las distintas fuerzas militares. Los primeros interventores fueron oficiales de las Fuerzas Armadas que ejercieron el gobierno de las instituciones por algunos meses, siendo reemplazados luego por civiles de extrema derecha.

La dictadura militar se propuso llevar a cabo una profunda reestructuración del conjunto del sistema universitario que, como en otros ámbitos de la política y la cultura argentina, sólo era posible mediante la represión y desarticulación de las organizaciones políticas y gremiales. A las desapariciones y asesinatos de estudiantes y profesores se sumaron las cesantías masivas. Sólo en mayo de 1976 fueron separados de sus cargos más de cien docentes de la Universidad Nacional del Litoral, trescientos profesionales entre docentes y no docentes en la de Córdoba y doscientos en la Universidad Nacional del Sur. Más de cien estudiantes fueron expulsados también en la Universidad mediterránea. A la gran mayoría de los docentes cesanteados se les prohibió el ejercicio de su profesión en cualquier ámbito educativo.

El proyecto de transformación universitaria contemplaba

diferentes aspectos. Suponía, en primer término, un control estricto desde el punto de vista político e ideológico pero también incluía un plan para reducir en términos generales las dimensiones del sistema, redistribuir la matrícula y canalizar hacia ámbitos extrauniversitarios las actividades de investigación científica. La política universitaria de la dictadura incluyó también, con estos objetivos, la modificación de los planes de estudios de casi todas las carreras pero afectó especialmente a algunas disciplinas que los militares identificaban como lugares de "penetración ideológica subversiva". En particular esta política involucró a carreras del ámbito de las ciencias sociales como Psicología, Sociología y Antropología. Carreras completas fueron suprimidas: la de Cinematografía en la Universidad Nacional de La Plata o los profesorados de Humanidades, Matemática, Física y Química en la Universidad Nacional del Sur. Las carreras de Psicología fueron suspendidas en las universidades de La Plata, Tucumán y Mar del Plata. Finalmente, en 1979, fue suprimida la Universidad Nacional de Luján.

Con el pretexto de desterrar a la actividad política de la Universidad, considerada como un elemento altamente corruptor de la vida académica, se eliminaron el debate y la confrontación de ideas. El terror se adueñó entonces de los claustros. Como acabamos de señalar, el principio que orientaba la estrategia hacia la Universidad partía de la necesidad no sólo de controlar estrictamente la actividad de los universitarios sino también de achicar las universidades. El ministro de Educación de la dictadura, Ricardo Bruera, sostuvo en septiembre de 1976 que el sistema universitario estaba sobredimensionado en relación con la enseñanza primaria y secundaria y que era necesario "invertir la pirámide".

El instrumento privilegiado para llevar a cabo este objetivo fue, primero, la política de admisión, y luego la aplicación de los aranceles. Un sistema de exámenes basado en la fijación estricta de cupos por carreras y facultades y posteriormente la implementación de aranceles a los cursos universitarios lograron restringir fuertemente el acceso de los jóvenes a las casas de estudios. En 1977 el número de vacantes fue reducido en un 24% en relación con 1976, pero en algunas universidades la proporción fue mayor.

En Buenos Aires, las vacantes disminuyeron en un 59%, un 50% lo hicieron en Tucumán y un 60% en Córdoba. Mientras al sistema universitario nacional ingresaron 127.606 estudiantes en 1974, en 1977 el número ascendió a 43.924. Sólo en la Universidad de Buenos Aires los ingresantes pasaron de alrededor de cuarenta mil en 1974 a doce mil en 1981. Entre 1978 y 1982, el porcentaje de ingresantes a la Universidad sobre el total de aspirantes pasó de un 44 a un 38%, lo que conllevaba el rechazo, en total, de entre sesenta mil y ochenta mil solicitudes por año. Mientras tanto, el presupuesto universitario de 1977 fue reducido en un 45% en relación con el del año anterior.

Como había ocurrido en 1966, pero ahora en una escala mucho mayor, miles de jóvenes científicos e intelectuales de prestigio fueron obligados a alejarse del país y a continuar sus carreras en centros académicos del exterior. El clima represivo que se impuso en las casas de estudios condicionaba toda la actividad académica. Tanto los estudiantes como sus docentes eran sometidos por entonces a una enorme presión. Esto provocaba que cualquier persona sospechosa de tener disidencias con las autoridades militares fuese, en forma inmediata, expulsada de la Universidad. Los docentes fueron, durante estos años, designados en función de su adhesión a los principios esgrimidos por la dictadura. En el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales los miembros del cuerpo docente se caracterizaban, en términos generales, por su afinidad con la derecha más reaccionaria. Por otro lado, se controlaba estrictamente el acceso a los recintos de las casas de estudios por parte de personal policial y militar. Desde organismos vinculados con las Fuerzas Armadas se supervisaban el diseño de los programas y la bibliografía. Bibliotecas enteras fueron destruidas y miles de volúmenes publicados por editoriales universitarias incinerados.

Al terminar la dictadura, el panorama universitario se había modificado de manera sustancial. A fines de 1983 había en la Argentina 416.000 estudiantes universitarios distribuidos en 49 universidades: 26 de ellas nacionales, una provincial y 22 privadas. El sistema privado, a raíz de las limitaciones impuestas al sector público, había incrementado en forma notable su participación en la matrícula. Mientras en 1974 el 11% de los estudiantes estaba

concentrado en establecimientos privados, en 1983 la proporción se elevaba a un 19%. Este sistema creció aceleradamente durante los años de la dictadura, entre otras razones, porque muchas casas de estudios gozaban de un clima de mayor tolerancia ideológica ya que estaban menos sometidas a la autoridad estatal. Pero también es preciso señalar que varias de las más concurridas carecían de elementos básicos para la enseñanza superior. No contaban con buenos profesores, bibliotecas actualizadas y, en la mayoría de ellas, no se hacía investigación científica. Por otro lado, también aumentó la participación en la matrícula de las universidades medianas creadas desde fines de los sesenta. En 1974 éstas agrupaban a un 13% delumnado y diez años después llegaban ya a un 21%.

#### EL OCASO DE LA DICTADURA

En definitiva, más allá de la voluntad explícita de reducir las dimensiones del sistema, no existió ninguna política de planeamiento u organización del sistema universitario durante los años del Proceso. En abril de 1980, el gobierno de la dictadura sancionó una nueva ley para la Universidad, que preveía que los rectores y decanos fuesen designados por el Poder Ejecutivo, contemplaba la designación de los profesores por concurso y estipulaba que los estudios podían ser arancelados. Además, prohibía a los miembros de los cuerpos directivos de las casas de estudios ejercer cargos en partidos políticos u organizaciones gremiales. Tampoco podían realizar declaraciones públicas de tenor político.

Esta ley fue elaborándose desde 1976 y se la sancionó sin consultar a la comunidad académica ni a los actores de la vida universitaria. Recibió, de todos modos, algunos tímidos cuestionamientos. La ley dejaba entrever, fácilmente, el rechazo que las autoridades designadas por el Ministerio de Educación sentían por las tradiciones de la Reforma Universitaria. Para el entonces subsecretario de Asuntos Universitarios, Eduardo Ventura, la Reforma había nacido "signada por la Revolución Rusa del 17" y las autoridades querían, en cambio, "una Universidad y no un soviet tumultuoso de profesores, alumnos y egresados".

Durante estos años, el presupuesto universitario, al igual que los fondos destinados a la educación, fue reducido progresivamente. En este contexto, desde 1978, comenzó a señalarse la posibilidad de que los estudios se arancelaran, hecho que se efectivizó a partir de 1980. Tanto la Ley Universitaria como la aplicación de los aranceles generaron movimientos, aunque tímidos por las circunstancias políticas del momento, de oposición. En las facultades de las distintas universidades del país estaban diseminados agentes de los servicios de inteligencia de las tres fuerzas militares. Sin embargo, en muchas de ellas, las agrupaciones estudiantiles siguieron actuando en forma clandestina y resistiendo algunas de sus políticas, como, por ejemplo, la introducción del arancel, lo que llevó a muchos de sus dirigentes a quedar detenidos.

Militantes estudiantiles vinculados con los partidos radical, peronista, Socialista y Comunista iniciaron una campaña contra la Ley Universitaria. En diciembre de 1980, la Federación Universitaria Argentina publicó una solicitada en los diarios rechazando la aplicación del arancel. Durante 1981, estudiantes de diferentes facultades comenzaron a organizarse de nuevo gremialmente. Fueron creando y difundiendo distintos tipos de publicaciones y elaborando petitorios, práctica sobre la cual empezaron a reorganizarse varias de las agrupaciones estudiantiles. Los petitorios referían, durante aquel tiempo, por lo general a cuestiones vinculadas con el funcionamiento interno de la Facultad. Se trataba de temas relacionados con la falta de comisiones suficientes para el cursado de los trabajos prácticos, restricciones horarias o problemas relacionados con el equipamiento de las bibliotecas. Un fenómeno paralelo se fue registrando en diferentes ámbitos culturales y académicos a partir de 1981. Algunas revistas culturales y centros privados e independientes de investigación, vinculados sobre todo con las ciencias sociales, expresaron, desde aquellos tiempos, voces de disidencia o protesta.

En 1982, luego de la derrota de los militares en la guerra de Malvinas y el inicio de la campaña electoral para los comicios de octubre de 1983, la vida política renació en las Universidades. El régimen militar trató de perpetuarse en las instituciones y para ello organizó un llamado masivo a concursos que fue duramente criticado. La reglamentación para dicho llamado fue cuestionada ya

que favorecía a los entonces docentes interinos. Muchos de estos concursos fueron impugnados. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, de 28 concursos fueron impugnados 27.

Las agrupaciones estudiantiles se reorganizaron siguiendo parámetros partidarios, repitiendo así una práctica surgida a principios de los setenta. En consecuencia, cada una de estas agrupaciones constituía, en realidad, el brazo estudiantil de algún partido político. La hegemonía, una vez realizadas las primeras elecciones de centros de estudiantes en la mayor parte de las casas de estudios, fue alcanzada por Franja Morada, afín a la Unión Cívica Radical. Los estudiantes universitarios marchaban ahora, a diferencia de lo ocurrido a mediados de los años cuarenta, en sintonía con las tendencias políticas que iba a respaldar, el 30 de octubre de 1983, la mayor parte de la ciudadanía argentina.